mensual/Septiembre 1981
nueva serie/número 24

inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press



La revuelta de la juventud inglesa

La contrarreforma en España

Sumario

Gran Bretaña:

La juventud rebelde se enfrenta a los conservadores

Más que la "boda del siglo", en Gran Bretaña lo que ha habido este verano ha sido, si exceptuamos la huelga general de 1926, la revuelta más grave de este siglo. El gobierno conservador ha respondido con la escalada represiva y ha decidido mantener la misma política que dio lugar a la explosión de la protesta de los jóvenes parados. La vinculación del movimiento obrero, en sus luchas actuales y venideras, con la revuelta de la juventud, puede poner fin al gobierno de Margaret Thatcher.

•página 4



Entrevista con Tony Benn

En esta entrevista, Tony Benn, líder del ala izquierda del Partido Laborista y candidato a la vicepresidencia de este partido, discute sobre una serie de temas —las tareas de un partido obrero, las alternativas económicas, el aborto, la OTAN, Irlanda, etc.— con dos redactores de *Socialist Challenge*, el periódico de la sección británica de la IVª Internacional. Estos resumen al final las posiciones de los marxistas revolucionarios sobre estos temas.

•página 8



Estado Español:

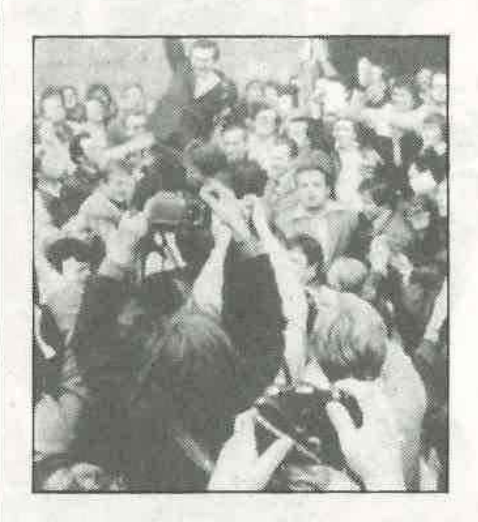
Una contrarreforma ha comenzado

El golpe del 23 de febrero abrió una nueva etapa política en el Estado español. Podría haber sido el inicio de la recuperación del movimiento obrero, después de tres años de retrocesos, de derrotas, de desmoralización. Pero seis meses después, está claro que el 23-F se inició una verdadera "contrarreforma" que ha liquidado ya muchas conquistas políticas del postfranquismo y amenaza con liquidarlas todas.

•página 18

Edita:
Liga Comunista Revolucionaria
(IV Internacional)

apdo. de Correos, 50.370
(Cibeles) Madrid
Imprime Ratlles. Mallorca, 206
Barcelona Dep. Leg. 40029/79

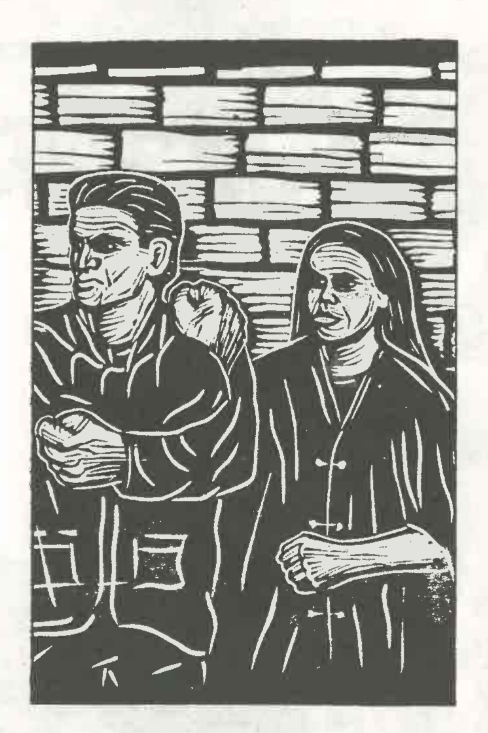


Polonia:

El sentido del IX Congreso del POUP

Un Congreso como jamás se había visto en un partido comunista en el poder en las ''democracias populares'' de Europa del Este: debates y enfrentamientos, acusaciones y amenazas... y todo ello retransmitido por televisión. Pero las limitaciones a la democracia que imperaban a pesar de todo han permitido que al final se impusiera la orientación que más conviene a la burocracia polaca: impulsar una ''renovación'' controlada para retomar las riendas del país.

•página 30



México:

El PRT, legalizado

Una importante victoria para el Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la IVª Internacional: tras una larga y dura batalla, el gobierno lo ha reconocido oficialmente como partido político, lo que significa que puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

•página 34



Irán:

La crisis iraní, tras la caída de Bani Sadr

Si la tercera revolución iraní, que derribó al sha, tuvo un trasfondo económico, la crisis económica actual también incide en la situación. El gobierno del Partido Republicano Islámico se muestra incapaz para satisfacer las necesidades de las masas y ha iniciado una ofensiva contra las conquistas obreras. La oleada represiva, que golpea principalmente a los militantes de extrema izquierda, es una parte importante de esta ofensiva.

•página 36

RECIENTEMENTE, las principales ciudades de Gran Bretaña fueron el escenario de la revuelta a gran escala de la juventud contra el gobierno conservador. Las causas inmediatas de estas explosiones fueron los ataques policiales o las provocaciones de miembros de las organizaciones fascistas. En el transcurso de los acontecimientos, la juventud levantó barricadas, lanzó adoquines y cócteles molotov contra la policía y saqueó los bienes de consumo de las sucursales de las cadenas de tiendas, todo ello escenas que recordaban a Irlanda del Norte.

Si dejamos a un lado la huelga general de 1926, esta explosión constituye la perturbación civil más grave que haya conocido la metrópoli británica desde el movimiento cartista, hace más de un siglo.

Ante la dimensión, la duración y el carácter generalizado de esta revuelta, el gobierno conservador ha emprendido la escalada represiva. Su respuesta típicamente pavloviana ha consistido en ampliar considerablemente los medios represivos de la policía, rechazando enérgicamente toda idea de aumentar los gastos sociales presupuestarios.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el pasado 14 de julio, Margaret Thatcher explicó: *«No es el momento de hacer análisis detallados. Tenemos un problema. No seremos capaces de tratar sus aspectos económicos y sociales hasta que no se haya restaurado el orden y se vea que el orden está restablecido».* Para asombro de todo el mundo, e incluso de algunos miembros de su propio gobierno, Margaret Thatcher negó que su política, y en particular el desarrollo de un paro masivo, tenga nada que ver con la revuelta. Y todos los conservadores se han puesto finalmente de acuerdo en que la causa principal era la *«falta de disciplina familiar»*.

Y para reforzar esta disciplina, el gobierno ha decidido utilizar las mangueras de agua, las balas de goma y el gas CS, que hasta entonces no se habían empleado jamás fuera de los Seis Condados de Irlanda del Norte, ocupados por Gran Bretaña.



El gobierno ha respaldado asimismo totalmente la acción represiva de la policía. En la semana del 6 al 16 de julio fueron detenidos 2.544 jóvenes. El secretario del Interior, William Whitelaw, ha ordenado abrir un campamento militar para internar a todos estos jóvenes, que va a ser condenados a penas de cárcel. Otra medida que confirma exactamente lo que los revolucionarios han denunciado siempre desde que Londres envió tropas a Irlanda en 1969, ha sido la de enviar allí a varios altos funcionarios de la policía británica para recibir sobre el terreno una formación de táctica de mantenimiento del orden en las calles.

Mientras tanto, en varias ciudades los escuadrones de la policía especial tienen luz verde para actuar contra los jóvenes revoltosos, y tratan de impedir que desciendan a

La juventud se enfrenta a los conservadores

Brian Grogan

la calle mediante el terror y la intimidación. Además, la policía ha hecho uso ampliamente del pretexto del saqueo para realizar numerosas redadas y registros en los guettos donde se concentra la población negra o pobre.

Esto sucedió en particular en uno de los centros de la revuelta, el barrio de Brixton, al sur de Londres. En la noche del 14 de julio, varios centenares de policías destruyeron prácticamente los once inmuebles que registraron, pretendidamente para buscar cócteles molotov. Cuatro personas fueron detenidas por delitos no especificados. Sobra decir que no descubrieron ni un solo cóctel molotov.

El factor principal de la revuelta es, por supuesto, el desarrollo extremadamente rápido de la crisis social y económica, que golpea ahora en plena cara a la sociedad británica; una crisis que el gobierno conservador, con Margaret Thatcher a la cabeza, ha tratado de acelerar y exacerbar por todos los medios.

En Gran Bretaña, la recesión capitalista internacional ha tenido efectos más profundos que en ningún otro país capitalista desarrollado. Y nada indica aún que se haya tocado fondo. La producción industrial seguía mostrando en junio un descenso del 0,7% con respecto al mes anterior, lo que significaba que descendía por tercer mes consecutivo.

Todo lo que se les ocurre decir a los partidarios del gobierno es que la disminución ha sido menos brutal. El 19 de julio, el número oficial de parados alcanzó los 2,8 millones, lo que representa el 12% de la población activa y sitúa al Reino Unido, en lo que se refiere al nivel de desempleo, inmediatamente detrás de Bélgica entre los países capitalistas avanzados.

Las zonas afectadas por los motines rebasan estos promedios establecidos a escala nacional. En el Noroeste del país, las estadísticas mostraban en junio una tasa de desempleo del 12,7%, frente al 8% del año anterior. En los West-Midlands, la tasa es del 12,6%, frente al 6,8% de junio de 1980. Y en los guettos propiamente dichos, las cifras son aún más altas. En el barrio de Toxteth, en Liverpool, donde los motines fueron los más violentos, un informe recien te cifraba en un 43% la tasa de desempleo entre la población de color. Y lo que aún es más elocuente, el 60% de los jóvenes negros de Toxteth son parados.

En el barrio londinense de Brixton, donde tres cuartas partes de la población son negros, el paro juvenil estimado es del 19% en general, con un porcentaje más elevado para los jóvenes negros. En cambio, la media de desempleo de todo Londres es de aproximadamente el 7,5%.

En enero de 1981 había 931.000 jóvenes menores de 25 años que estaban sin trabajo. Representaban el 31,7% del total de parados. El ritmo de crecimiento del paro juvenil ha sido astronómico: ha aumentado en más del 70% en el transcurso del año 1980. Y la situación se ha agravado aún más durante el primer semestre de 1980. El paro entre los jóvenes que buscan un primer empleo, al salir de la escuela, alcanza proporciones catastróficas. En junio, las cifras dieron un salto adelante en comparación con el mes de mayo, pasando de 100.000 a 217.000, y en julio se iban a sumar otros 100.000 más.



Esta terrible situación del empleo se combina con los efectos de los recortes masivos efectuados en los gastos sociales del presupuesto, para la vivienda, los ayuntamientos y la educación, así como para los subsidios de desempleo, cuyo importe ha disminuido y que cada vez resultan más difíciles de obtener. Así, por ejemplo, los jóvenes que han dejado la escuela en julio o en junio no podrán inscribirse en el paro antes de setiembre. ¿Es pues asombroso que si se les ha presentado la ocasión para ganarse un par de zapatos o una cadena estéreo, la hayan aprovechado?.

Frente a ello, el gobierno ha respondido con la escalada del acoso policial, a lo que hay que añadir, en lo que se refiere a los jóvenes negros, el problema suplementario de los ataques lanzados por los grupos fascistas.

En Toxteth, la revuelta estalló cuando la policía intentó detener e infligió malos tratos a un joven negro acusado de haber robado una moto, que en realidad le pertenecía. En las mentes de los polis no cabía que un joven negro pudiera poseer una moto. Este incidente avivó todos los resentimientos contra el acoso policial de los jóvenes, blancos y negros, de esta zona de Liverpool.

En Southhall, la explosión la desencadenó la agresión perpetrada contra la comunidad asiática que vive en este barrio, a cargo de varios centenares de *skinheads* (cabezas rapadas), muchos de los cuales son simpatizantes de las organizaciones fascistas. Estos comandos pudieron intimidar y amenazar impunemente a la comunidad asiática, sin que la policía tratara realmente de impedírselo, hasta que los jóvenes asiáticos se reunieron y expulsaron del barrio a los *skinheads*, pese a la protección que les prestó la policía.

Una polarización creciente

La envergadura y extensión de esta revuelta se deben al rechazo de la juventud a la suerte que se les ha deparado. Los jóvenes alimentan y refuerzan el sentimiento que tienen sus padres y antepasados de que la acción del gobierno es ilegítima.

Estas revueltas han asestado un golpe terrible a la estrategia del gobierno conservador. Hace ya varios meses que los patronos han pedido a lá Sra. Thatcher que cambie su política monetarista, que se considera demasiado rígida. Y de hecho, ella ha tratado de hacerlo de diversas maneras. Pero ahora no puede realizar ningún viraje de 180 grados, en un contexto en que parecería haber venido provocado por la presión de la clase obrera.

Al haber encadenado su destino al único criterio del equilibrio presupuestario restablecido, se ha encerrado en un callejón sin salida. Ahora, la opción de aumentar las subvenciones gubernamentales a los guettos o de reducir —o sólo mantener— el paro en su nivel actual, comportaría un problema político de calibre, aunque dispusiera de los recursos necesarios. Se parecería a una concesión política importante a la clase obrera.

Y esto no es moco de pavo.

En efecto, el periodo de negociación de los convenios colectivos está al caer, y las condiciones que había logrado introducir el gobierno en los convenios anteriores no los ha podido imponer a la clase obrera; Margaret Thatcher ha demostrado en un conflicto abierto que ni siquiera es capaz de infringir una derrota clara a los empleados de la administración pública, que sin embargo se han visto arrastrados por sus direcciones sindicales a una serie de acciones esporádicas ineficaces y que ya llevan 19 semanas de conflicto con el gobierno. Y esto sin hablar ya de la humillante derrota que le infligieron los mineros el pasado mes de marzo, cuando se vió obligada a echar marcha atrás a un programa de cierre de pozos y de despidos masivos.

Partiendo del éxito real que tuvo en el sector privado, donde el peso del paro limitó los aumentos salariales a menos del 10% este año, Margaret Thatcher había previsto un máximo del 5% de aumento para las próximas negociaciones salariales, cuando la tasa de inflación no tienen ninguna posibilidad de descender por debajo del nivel actual del 11,3%. Pero en su reciente congreso sindical anual, los mineros han lanzado un desafio abierto a los proyectos declarados de Thatcher, exigiendo, por amplia mayoría, un aumento de salarios del 25%. Y esto podría servir de referencia si los trabajadores detectaran, incluso en el sector privado, el mínimo titubeo en el gobierno.

Para no dar apariencia de debilidad, el gobierno ha rechazado todas las propuestas de dar dinero a los ghettos y ha decidido apostar únicamente por la represión. Una señal que no llama a engaño en cuanto a sus intenciones en este terreno es el nombramiento del ministro del Medio Ambiente, Michael *Tarzán* Heseltine, como presidente de una comisión gubernamental encargada de estudiar las respuestas que debería dar el gobierno a los problemas revelados por la revuelta.

Michael Heseltine es conocido como *«el hombre del hacha»*, debido a los graves recortes que hizo en las subvenciones a los ayuntamientos y a causa de las medidas de retorsión que adoptó contra las corporaciones municipales culpables de haber sobrepasado el presupuesto. Sus primeras declaraciones hirientes para los habitantes de Liverpool, cuando desembarcó allí para una visita de dos semanas, las hizo para anunciar que no había *«venido con un montón de oro»*.

En el momento en que decidió enviar al equipo de Heseltine a Liverpool, el gobierno resolvió reducir en 47 millones de libras las subvenciones para el consejo general de Lothian, que cubre la región de Edimburgo en Escocia, porque dicho consejo *«prestaba demasiados servicios sociales»*. Así, el consejo está amenazado de bancarrota.

Pero semejante rumbo político es suicida. En las recientes elecciones parciales en el distrito de Warrington-Lancashire, cerca de Liverpool, los votos de los conservadores bajaron del 29% al 7%. Por supuesto, la identificación que se sigue haciendo entre el Partido Laborista y la política aplicada por el último gobierno Callaghan, así como los temores de los sectores más atrasados de la clase obrera ante la polarización que se profundiza actualmente en Gran Bretaña, han hecho que el principal beneficiario de la pérdida de votos conservadores fuera el nuevo Partido Socialdemócrata (SDP).

Pero las exageraciones de los comentarios de prensa sobre el "milagro" del SDP no debe ocultar la catástrofe que representa esto para los conservadores. Además, si el Partido Laborista hubiera asumido la rebelión de la juventud para mostrar el fracaso de la política del gobierno y la catástrofe a la que está abocada la sociedad británica, sus posiciones —aunque ya haya ganado algo— se habrían reforzado aún bastante más.

Esto no quiere decir qúe haya habido una expresión espontánea de la solidaridad de la clase obrera hacia la juventud. Pero todos comprenden que es el paro el que está en la raíz del problema y que los conservadores son los principales responsables de la situación. Así, a medida que se desarrolla la movilización de la clase obrera, existen factores potenciales para que se opere una ligazón entre el combate general emprendido contra los conservadores y la revuelta de la juventud.

El Partido Laborista y el Trade Unión Congress (TUC, Confederación Sindical) han convocado ya diversas manifestaciones monstruo para protestar contra el paro. El Partido Laborista ha convocado para el 19 de setiembre, en Birmingham, una manifestación masiva en torno a la cuestión del empleo, y el TUC organiza una "marcha popular" que se dirigirá en octubre a la ciudad donde se celebrará el congreso conservador. También para octubre está prevista una manifestación de masas contra la instalación de cohetes de cabeza nuclear, manifestación que arrastrará sobre todo a la juventud, pero que también contará con el apoyo de diversas federaciones sindicales industriales, entre ellas las más fuertes.

Esta serie de acciones de masas —hay aún muchas más en proyecto— será el telón de fondo de las negociaciones salariales. En este sentido, la revuelta de la juventud es el barómetro y el signo precursor de las tendencias que operan en el conjunto de la clase obrera. Está claro que se aproxima un periodo de enfrentamientos abiertos con el gobierno de Margaret Thatcher. Ahora, la cuestión decisiva es la movilización de conjunto de la clase obrera para derribar al gobierno conservador, y esto, por descontado, antes de las próximas elecciones generales de 1984.

La guerra de Irlanda renace en Gran Bretaña

También está claro que la intransigencia de que ha hecho gala Margaret Thatcher con respecto a los huelguistas de hambre irlandeses podría tener también consecuencias funestas para ella. Es prácticamente evidente que la juventud, por mucho que no se identifique hasta ahora con la lucha antiimperialista que se desarrolla en Irlanda, ha retomado sus formas de lucha y se ha inspirado en la determinación y el heroísmo de la juventud de los Seis Condados en su lucha contra el ejército británico.

Este es el primer paso hacia la solidaridad con el combate de los irlandeses e indica también la nueva situación que está surgiendo en el conjunto del movimiento obrero. Está claro que la movilización de masas y la determinación de la población nacionalista de los Seis Condados, frente a la intransigencia de Margaret Thatcher, ha asestado un golpe de calibre al sistema bipartidista. Tony Benn ya ha publicado una declaración exigiendo la retirada de las tropas británicas de Irlanda, si bien propone sustituirlas por tropas imperialistas bajo el mando de las Naciones Unidas. Pero su llamamiento responsabiliza al imperialismo británico de la situación en Irlanda.

Aún más recientemente, el Partido Laborista ha adoptado una posición que reconoce que la unidad irlandesa debe ser un objetivo a largo plazo, cosa que también tiende a dislocar el sistema bipartidista. Aunque no se trate, para el Partido Laborista, de una retirada inmediata de las tropas, esta postura reforzará la convicción y la acción de ese 67% de británicos que según los sondeos están a favor de la retirada de las tropas.

Este factor, combinado con el creciente aislamiento internacional de Margaret Thatcher, contribuye a exacerbar la crisis política general en Gran Bretaña. Como señala *The Economist*, periódico de la patronal, *«Gran Bretaña está en trance de perder la guerra de propaganda contra los huelguistas de hambre de los Bloques H y está poniendo en peligro al gobierno de Dublín»*.

Por un programa socialista

Los revolucionarios están llamados a desempeñar un papel decisivo en el seno del movimiento obrero. Si el movimiento obrero no interviene y ofrece una salida a la juventud, la demoralización sucederá a la revuelta y creará un terreno de cultivo para el desarrollo de organizaciones racistas y fascistas.

La dirección del grupo parlamentario del Partido Laborista se ha opuesto a algunas de las propuestas más provocadoras de los conservadores, como el empleo de mangue-

ras de agua y balas de goma. Pero en general, se ha unido al coro de los conservadores contra *«la violencia y los saqueos»*. También para ella, la solución pasa por el refuerzo de la policía. Simplemente, como explicó Ron Hayward, secretario general del Partido Laborista, *«no creemos que las mangueras de agua, las balas de goma y el gas CS ayudarán a la policía a ayudarnos»*.

Pero otros dirigentes del ala izquierda del Partido Laborista han adoptado una posición un poco distinta. Tony Benn, en el mensaje que envió al Comité de Coordinación del ala izquierda del PL. que estaba reunido el sábado, 18 de julio, explica: *«Los motines no son una vía hacia el progreso social»*. Pero también ha denunciado el peligro de que surjan tendencias totalitarias en un Estado cuya política era la de *«transformar la policía en ejército de ocupación provisional de las zonas donde ha habido desórdenes»*.

En la misma reunión, Arthur Scargill, presidente del sindicato de mineros de Yorkshire y candidato de la izquierda a la presidencia del sindicato nacional de mineros, retomó este punto de vista. Lanzó un grito de alarma: *«Estamos cerca de la entrada a una sociedad totalitaria»*. Explicó también que las raíces de estas revueltas *«están en esta podrida sociedad capitalista»*.

Los militantes de los diversos comités de defensa que se forman tanto en los sindicatos como en el PL, han concretado este sentimiento avanzando la reivindicación de una amnistía total para los jóvenes detenidos durante los motines y proponiendo que el movimiento obrero organice comisiones de investigación sobre las actuaciones de la policía.

Esta actividad, por supuesto, debe vincularse a un programa general que debe coger por los cuernos los problemas a los que se enfrenta la juventud, y presentar una alternativa a la política de Margaret Thatcher. James Prior, el ministro conservador del Empleo, parece que está librando una batalla en el seno del gabinete para ampliar su programa de empleo de la juventud (Youth Opportunity Scheme, YOPS), que propone cursillos de varios meses para los jóvenes, pero que no les promete ningún trabajo. Para este proyecto, Prior prevé la suma "maravillosa" de 90 millones de libras anuales.

Aún así, en el gobierno hay oposición a este proyecto. Proviene del consejero económico de Margaret Thatcher, Alan Walters, partidario desenfrenado del "liberalismo". Este propone dar una subvención a cada empresario que emplee a jóvenes, por debajo de los baremos sindicales y por menos de 40 libras a la semana. Esto permitiría debilitar a los sindicatos creando un mercado de mano de obra barata...

Frente a esto, Len Murray, secretario general del TUC, ha propuesto un plan de subvenciones inmediatas de 500 millones de libras. Esta suma sigue siendo irrisoria, cuando se comparan estos 500 millones con los 3.000 a 4.000 millones de margen de error previsto en el presupuesto, o con los 8.000 millones de recortes en el gasto público efectuados desde que Margaret Thatcher accedió al poder.

Para empezar a resolver el problema de las bolsas de miseria habría que emprender un programa masivo de obras públicas. Pero esto sólo podría ser una primera medida de emergencia. El movimiento obrero necesita una política que permita unificar su acción a escala nacional y que comprometa al futuro gobierno laborista. Michael Foot, dirigente del PL, ha trazado las grandes líneas de la alternativa que propone, con ocasión de una manifestación de masas del PL contra el paro, celebrada el pasado 4 de julio. Ha prometido reducir los impuestos de los trabajadores, aumentar masivamente los gastos públicos y desarrollar las inversiones en el sector nacionalizado.

No cabe duda que tales medidas serían bien recibidas por los trabajadores. Pero antes de que los trabajadores tomen el tren del futuro gobierno laborista, les gustaría saber adónde les llevará. ¿Acaso estas propuestas no son simplemente paliativos para dar un respiro al capitalismo y ayudarle a recuperarse?.

Todos sabemos, gracias a ciertas experiencias amargas, que o bien los trabajadores empiezan a controlar las empresas, o bien los patronos conseguirán los medios para salvar el sistema. Esta fue la experiencia del último gobierno laborista y los trabajadores no quieren que esto se repita, como demuestra el ascenso de la izquierda laborista.

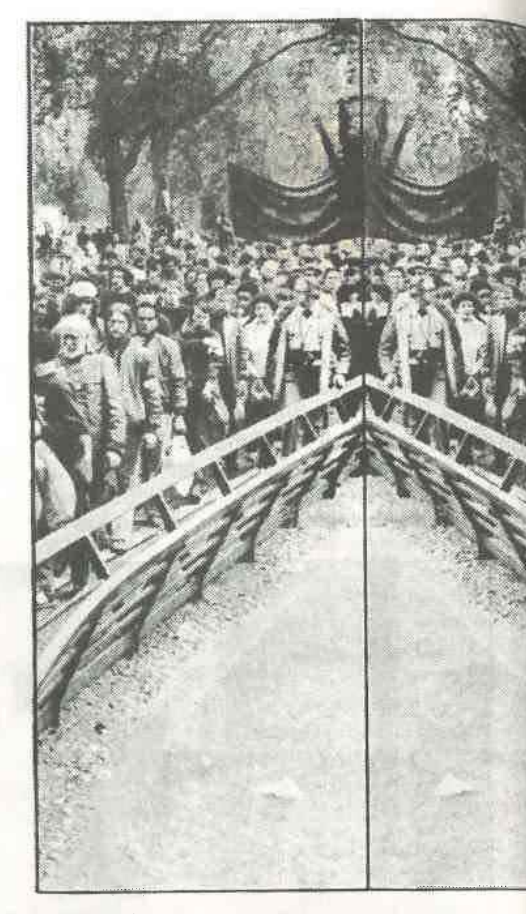
De ahí que esas medidas no deban vincularse en modo alguno a la noción de "contratos sociales". Al contrario, habrá que tomar medidas decididas, tomar el control de los bancos y de las compañías financieras, apoderarse de los centros de mando de la economía.

Si los trabajadores y los jóvenes ven que el próximo gobierno laborista se fija estos objetivos, los jóvenes se convertirán pronto en tropas de choque contra este podrido sistema. La revuelta de la juventud plantea el conjunto de estos problemas y la necesidad de dar soluciones inmediatas, en particular la lucha por las 35 horas y el apoyo a todos los trabajadores que ocupan actualmente sus fábricas para defender el empleo.



"Querer ir al socialismo a partir de las movilizaciones en las empresas es una ilusión"

Entrevista con Tony Benn dirigente de la izquierda laborista



POR qué se presenta Vd. como candidato al puesto de vicepresidente del Partido Laborista? ¿Qué resultados ha dado su campaña hasta ahora?

Tony Benn: Oficialmente se trata de elegir al vicepresidente del Partido. Sin embargo, es la primera elección que va a celebrarse con participación ampliada, por la que muchos han luchado encarnizadamente. El tipo de participación ampliada (1) en el proceso de elección de los dirigentes, que tenemos ahora, es satisfactorio; es el que yo defiendo.

Por lo tanto, esta elección constituye un test para este nuevo mecanismo, cuyas ventajas son tres. En primer lugar, se trata de la apertura de un auténtico debate político. Este debate se ha realizado primero en las conferencias sindicales, donde esto no solía producirse tradicionalmente, pues ahora hay que tomar una opción.

En segundo lugar, en las secciones locales *(constituencies)*, la discusión se ha centrado en los grandes principios de la política del Partido.

Finalmente, en cierta medida se trata de una anticipación de la aplicación del artículo 5 de los Estatutos del Partido (2). Si la elección del vicepresidente se realiza efectivamente a través de las asambleas, será extremamente difícil que nadie pueda ejercer su derecho de veto. Y me asombraría mucho que los efectos de este ejercicio de la democracia, que se aplica en el movimiento sindical, se limitaran únicamente a la elección del vicepresidente del Partido.

Este procedimiento ha puesto también de manifiesto lo que muchos sospechaban: la existencia, en los niveles superiores del partido, de un bloque de gente que se oponen a este mecanismo de elección. Así, ventilar los cuartos llenos de humo ha sido bueno.

• A la vista de las manifestaciones de Clive Jenkins en torno a la batalla sobre los problemas de dirección, Vd. debe estar particularmente animado tras la decisión de la ASTMS (3) de apoyarle.

Tony Benn: Por supuesto. De hecho es lógico, en la medida en que la ASTMS apoya posiciones políticas que están en mi programa. A medida que van celebrándose las conferencias sindicales, las tomas de posición política mejoran. Es el fruto de la agitación y de los debates que tienen lugar. Así, la USDAW se ha manifestado a favor del desarme nuclear unilateral, y la APEX (4) se ha pronunciado por el control, por parte de la Ejecutiva Nacional del Partido Laborista (PL), de la redacción del Manifiesto electoral (5). La contribución de los sindicatos al debate se radicaliza en estas discusiones. En algunos casos, esto se debe a la opción que hay que tomar en torno a los problemas de la dirección del Partido.

• Los militantes sindicales intervienen así en los conflictos internos del PL, particularmente con el fin de impulsar el combate por un funcionamiento democrático y apoyando la campaña de Vd. ¿No piensa Vd. que los dirigentes del PL, y en particular el ala izquierda, deberían apoyar activamente las luchas obreras que se producen en las fábricas? ¿No cree Vd. que los dirigentes del PL deberían llamar a la movilización para combatir las amenazas del paro?.

Tony Benn: Si hablan Vds. de intervenir en los conflictos sociales, entonces tengo mucho que decir. Hace aún pocos días estuve en la fábrica de pantalones Lee, y acabo de enviar un mensaje a los trabajadores de Lawrence-Scott. Siempre he considerado que esto es parte integrante de la actividad de un diputado del PL. ¿Acaso no soy yo también un sindicalista? Pero no creo que sea cuestión de los parlamentarios el decirle a la gente lo que deben hacer. Siempre le re-

NOTAS:

(1) En 1980, la conferencia anual del PL votó una modificación de los procedimientos de elección del presidente y del vicepresidente del Partido. Antes sólo incumbía a los parlamentarios laboristas. La Conferencia extraordinaria de enero de 1981 definió los detalles de esta participación ampliada. Según la nueva fórmula, el cuerpo electoral está formado en un 40% por los sindicatos, un 30% por los parlamentarios y un 30% por las secciones locales del PL.

(2) El artículo 5 de los Estatutos del PL trata de las normas de funcionamiento interno.

(3) La ASTMS, sindicato de empleados, ha crecido rápidamente en los últimos diez años. Organiza, en el sector público y privado, a los trabajadores de informática, profesores universitarios, empleados de oficinas, de banca y del comercio, mandos intermedios, técnicos, etc.

(4) La USDAW es el sindicato de los empleados de comercio y de los grandes almacenes. La APEX es el sindicato de los trabajadores de cuello blanco.

(5) Referencia al combate de la izquierda laborista para que sea el conjunto del Partido, representado por el Comité Ejecutivo Nacional, quien controle el contenido del Manifiesto electoral. Tradicionalmente, el Manifiesto era elaborado por la dirección del grupo parlamentario.



sulta fácil a alguien que no está directamente implicado, llamar a los demás a hacer grandes sacrificios. Creo que son ellos los que deben decidir, y el papel del PL es el de apoyarlos.

• Como dirigente del movimiento en su conjunto, ¿no cree Vd. que haya que llamar a la acción para acabar con el gobierno actual?.

Tony Benn: La marcha popular por el empleo ha sido una acción importante, porque la iniciativa provino del Noroeste (6). No fue organizada a instancias del Consejo General del TUC (7), que sólo la apoyó muy tarde. No creo que habría sido útil que el Comité Ejecutivo Nacional del PL hubiera lanzado un llamamiento a favor de esta marcha.

Pienso que el papel de una dirección consiste en analizar, explicar, animar, apoyar, más que en dar órdenes o lanzar llamamientos.

De lo contrario, las cosas no pueden marchar. Los que intervienen directamente lo harían sobre la base de las consignas y no sobre la base de sus propios debates y motivaciones. Pienso, hay que decirlo, que la idea de que el impulso debe venir de arriba es fruto de una ilusión elitista de la izquierda. Sobre todas las demás cuestiones, la izquierda dice que la iniciativa debe corresponder a la base, pero sobre esta cuestión, que incumbe a la dirección lanzar los llamamientos. Hay ahí cierta contradicción...

• ¿Puede plantearse el problema de un modo distinto? Hay en la base numerosos militantes que piensan que una dirección nacional debe desempeñar un papel fundamental en el momento actual, para que la acción sea eficaz. Por ejemplo, en la fábrica Rover, están dispuestos a pasar a la acción, han votado ya resoluciones en este sentido, pero son conscientes de que, solos y aislados, sus posibilidades de éxito son escasas en comparación con las que tendrían si hubiera un llamamiento nacional...

Tony Benn: Sí, estoy de acuerdo..., pero entonces tienen...

• Entonces se dirigen a los dirigentes nacionales...

Tony Benn: Entonces tienen Vds. que establecer los vínculos necesarios. El acuerdo tripartita entre los sindicatos de los mineros, de la siderurgia y del ferrocarril es una cosa útil (8), al igual que los comités unitarios de delegados de taller *(shop-stewards)*. Pero si en última instancia Vds. dicen que debemos derribar al gobierno mediante acciones en las empresas, mi opinión es que la construcción del socialismo es imposible sin haber convencido antes. Se puede lograr un golpe de Estado, pero jamás un golpe de Estado tendrá un apoyo amplio.

Por lo tanto, si puedo estar a favor de una huelga general para defender una conquista, la idea de que es posible tomar un atajo para ir al socialismo, a partir de las movilizaciones en las empresas, es una ilusión, una de las mayores ilusiones. Cuando sea elegido un gobierno laborista con un programa radical, se ejercerán presiones considerables sobre él, por parte de la comunidad internacional, los banqueros, etc. Y si en ese momento no cuentas con el apoyo masivo de los trabajadores, no podrías resistir a esas presiones. El atajo hacia el poder, a través de la movilización en las empresas, es en mi opinión una visión "revolucionarista", no revolucionaria.

Probablemente esté en desacuerdo con Vds. a este respecto. Pero en mi opinión hay que actuar sobre la base de cierto consenso; hay que apoyar a los que están movilizados y no tratar de crear una dirección cuyo papel fuera el de decirle a la gente lo que debe hacer, la huelga o el enfrentamiento con el gobierno en torno a una cuestión presupuestaria de carácter local. Esto es una equivocación.

• ¿Pero no piensa Vd. que las posiciones evolucionan a partir de la acción y no únicamente a partir de los debates...?

Tony Benn: Sí, pero yo no estoy en contra de la acción.

• Pero las huelgas de mineros que se han producido recientemente podían derribar, potencialmente, al gobierno. Era una posibilidad muy concreta. ¿Piensa Vd. que esa era algo positivo o negativo? ¿Piensa Vd. que había que apoyarles? En otras palabras, en 1974 no cabe duda que fue la huelga de los mineros la que condujo a la caída del gobierno (9), creando las condiciones de su derrota en las elecciones generales. ¿Cree Vd. que aquella lucha debía haber sido apoyada por los parlamentarios laboristas?.

Tony Benn: Yo apoyé a los mineros en 1974 y en 1972, pero creo que los discursos "revolucionaristas" sólo pueden decepcionar seriamente a la gente, cuando sólo una minoría se reconoce en este país en un proyecto socialista. El hecho de que la evolución de la conciencia se realice a través de la acción y del combate no tiene nada que ver con el hecho de decirles a otros que emprendan el combate para cambiar el sistema, con la esperanza de que entonces podrán Vds.

(6) La región Noroeste del TUC (Confederación Sindical). El TUC está organizado por regiones; las regiones pueden tomar iniciativas dentro del marco de la política nacional del TUC.

(7) El Consejo General del TUC es el organismos dirigente de la confederación sindical entre dos Congresos. Sus miembros son los representantes de los sindicatos más importantes y de algunos más pequeños. Se elige en el Congreso.

(8) La Triple Alianza se basaba en el acuerdo entre el sindicato de mineros, el de la siderurgia y el del ferrocarril, tras la primera Guerra Mundial. La Triple Alianza se rompió durante la gran huelga de 1926, cuando los mineros se quedaron solos luchando hasta el final, y fueron derrotados.

(9) Dos huelgas sucesivas de mineros, en 1972 y 1973, derribaron al gobierno conservador de Edward Heath (1970-73). En ambos casos los mineros recibieron un gran apoyo por parte del resto de la clase obrera. En 1972, la huelga suprimió el bloqueo de salários, y cuando en 1973 Heath hizo un llamamiento al país y convocó elecciones, las perdió.



construir el socialismo. Esto les lleva rápidamente al estalinismo.

• Ha dicho Vd. que el próximo gobierno laborista que sea elegido con un programa radical debería tratar de poner en práctica el Manifiesto de 1974, que incluye una redistribución fundamental de la riqueza y del poder a favor de los trabajadores y sus familias. Esto implicaría seguramente un grave conflicto con los bancos, las instituciones financieras, el Fondo Monetario Internacional, etc. Es evidente que partiendo de esta hipótesis necesitarán Vds. un apoyo popular masivo...

Tony Benn: No cabe ni la menor duda, lo necesitaremos...

• ¿Pero no necesitan Vds. otra cosa, en especial el control del verdadero poder, el del dinero, el de las altas finanzas, de los grandes monopolios, en suma, las grandes palancas? En otras palabras, ¿no consiste la primera etapa en asegurarse el control de estas palancas?.

Tony Benn: Entonces hay que discutir sobre la política del PL. No está bien que sea yo el único que diga cómo deben marchar las cosas. Tengo que convencer al PL...

• Pero Vd. personalmente, ¿está a favor de ello?

Tony Benn: Estoy de acuerdo con el artículo 4 (10). Creo que el procedimiento por el que se aplica el artículo 4 debe empezar con un trabajo de educación del Partido sobre la actualidad del socialismo. Desde hace 40 años nadie ha hablado de socialismo en el Partido. Globalmente, creo que las ideas socialistas son probablemente más fuertes hoy, pues en los últimos años no ha habido poca agitación socialista en este país. La experiencia práctica desembocará en la reivindicación de cambios más radicales y si Vds. dicen, y creo que tienen razón, que la comunidad financiera internacional podría intentar presionar considerablemente a un gobierno laborista elegido, deben Vds. apoyarse en los sindicatos, en el Partido y en la opinión pública que les ha votado.

Pero si Vds. quieren decir que lo que se plantea es el problema de Allende, entonces no me preocuparía por todos estos problemas políticos. Estaría en el monte y haría ejercicios por la noche. A esto lo llamo charlatanería "revolucionarista".

Si abandonan Vds. el arma de la persuasión en la dirección del combate, entonces hablamos de cosas muy distintas. La dificultad de análisis que tienen los socialistas es la siguiente: deben analizar dónde se encuentra el poder: los bancos, los terratenientes, los militares, los funcionarios, los medios de comunicación, las multinacionales, Bruselas (11). Pero, además, Vds. no deben utilizar sus análisis sobre los centros de poder para propagar entre la gente el pesimismo y el descorazonamiento.

• Al contrario....

Tony Benn: ...porque, de hecho, hay que ganarse el poder, por supuesto, hay que ganarse el poder.

• Pero veámos este punto: la nacionalización de la siderurgia fue una importante batalla para el gobierno laborista de los años 1945-1951. La nacionalización de Tate & Lyle, la compañía azucarera, fue una batalla importante que se perdió. Al hacerse el PL con las riendas de sectores decisivos de la industria y de las finanzas, para llevar a cabo su programa, ¿acaso no provocará inevitablemente un enfrentamiento?.

Tony Benn: Creo que sí. Pero creo también que un gobierno determinado, que goce del apoyo de la opinión pública, puede cumplir esta tarea. Si hubiera un intento de golpe de Estado militar contra un gobierno que intentara poner en práctica el programa con el que fue elegido, creo que es evidente que habrá que recurrir a la movilización y a la acción en las empresas. Toda la discusión sobre si "eres un revolucionario o un reformista, un parlamentario o un extraparlamentario" es en buena medida teórica y no tiene mucho significado concreto. Cuando se habla de algo revolucionario, creo que no se trata de una reforma realizada, sino de una reforma que aún no se ha intentado realizar.

• Pero la diferencia entre ser revolucionario y ser reformista es que los revolucionarios consideran inevitable el choque entre el gobierno que desea realmente llevar a cabo lo que Vd. llama reformas y que nosotros llamaríamos medidas revolucionarias, por un lado, y los capitalistas, los propietarios, por otro. Y esos capitalistas no regalarán su poder, los grandes monopolios, los bancos, las instituciones financieras...

Tony Benn: Sin violencia...

• ...sin violencia, sin tratar de utilizar su aparato de Estado.

Tony Benn: No estoy seguro de ello. ¿No fue Marx quien dijo que el Reino Unido es un país en que sería posible acceder al socialismo sin violencia?.

• Sólo para decir lo contrario más tarde.

Tony Benn: Puede ser, pero eso era una etapa inicial. Yo no creo ni un momento en la inevitabilidad de la violencia de que hablan Vds. Si lo creyera, abandonaría la política: me pondría mi vieja gorra, me buscaría un fusil de segunda mano e iría a entrenarme. Si se hiciera esto, se reforzaría enormemente a la derecha. No sería serio, pero sí suficiente para asustar a la gente. Esto desviaría al PL y a los sindicatos de su verdadera tarea. Donde el movimiento sindical es muy fuerte, su tarea no debe ser, como han dicho Vds., derribar al gobierno.

En lo que se refiere al gobierno Heath, es un error común que hacen los conservadores y la extrema izquierda, pues no fue el movimiento sindical quien lo derribó. Fué el pueblo británico, que ya no estaba dispuesto a apoyarle en su conflicto con el movimiento obrero. Si Heath hubiera ganado las elecciones, ¿se imaginan Vds. por

(10) El artículo 4 se refiere al objetivo histórico del PL de instaurar la propiedad colectiva de los medios de producción.

(11) Esto hace referencia al argumento de la izquierda laborista de que la CEE actúa en contra de los intereses de los trabajadores. Pero este argumento viene acompañado de otro, chovinista y parlamentarista, de que la CEE limita la soberanía del Parlamento británico.

un momento que los mineros habrían estado en posición de fuerza? En absoluto. Fue por tanto el proceso electoral el que derribó a Heath.

• La elección de François Mitterrand en Francia es un estímulo considerable. Una de sus promesas electorales es la semana de 35 horas. ¿Piensa Vd. que un gobierno laborista debería hacer promulgar una ley sobre las 35 horas y que se trataría de otra fuente de conflictos con los patronos?.

Tony Benn: Seamos claros. Todo lo que queremos hacer, y que está inscrito en nuestro Manifiesto, nos provocará conflictos con el Pentágono, con Washington, con los banqueros, con sectores de la administración, etc.

Al adoptar el Manifiesto de 1979 no tomamos una decisión definitiva; dijimos que estábamos por las 35 horas, pero que semejante decisión debía tomarse a escala europea, lo que significa que no lo haríamos si otros no lo hicieran.

Actualmente, las presiones son muy fuertes para considerar la reducción del tiempo de trabajo como uno de los instrumentos fundamentales de la lucha contra el paro. Yo no estoy autorizado a decirles lo que hará el próximo gobierno laborista, porque hasta el momento el problema no está resuelto.

Esta es la razón por la que gastamos tanto tiempo en torno a los problemas de la democracia en el seno del Partido. Hasta que este problema no esté resuelto, no será posible saber, hasta tres semanas antes de las elecciones, cuáles serán los compromisos electorales y cómo se cumplirán.

• Para nosotros, la semana de 35 horas es importante, tanto para resolver el problema del paro como para luchar contra el control de las importaciones (12), que implica una alianza del movimiento sindical con la patronal.

Tony Benn: No creo que el control de las importaciones resuelva la crisis que sufre Gran Bretaña, como tampoco una revaluación o el bloqueo de los salarios.

Pero a la inversa, no conozco ninguna teoría socialista que me permita pensar que la libre circulación de capitales y mercancías sea parte integrante de la concepción internacional del socialismo. Existe en este momento un control de las importaciones —una persona que dispone de pocos ingresos no puede comprar productos extranjeros—, y la planificación del comercio y de la producción me parece perfectamente lógica. La crítica de izquierda a los controles sobre las importaciones la entiendo perfectamente, pues soy internacionalista.

Si planificáis vuestro comercio de manera que se vuelva al pleno empleo, entonces se desarrolla el comercio mundial. Pero si actuáis de manera que exportáis el paro, perjudicáis a la clase obrera francesa, japonesa y sudafricana.

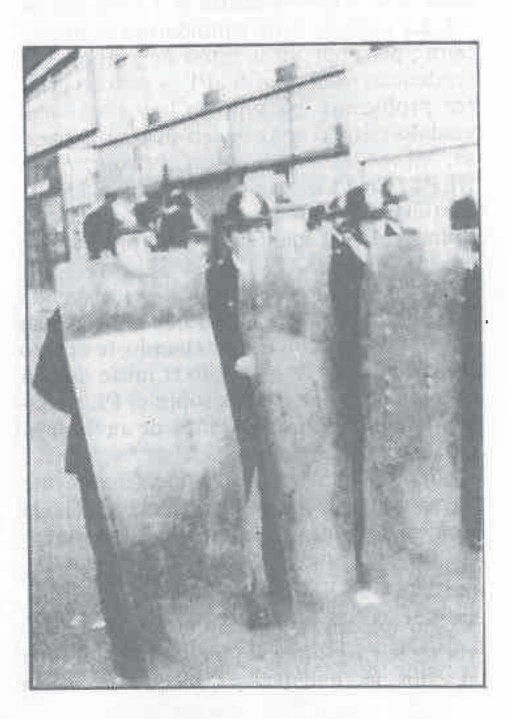
Si habéis nacionalizado la industria bajo control obrero por un lado, entregando las compensaciones necesarias por otro, algunas compañías multinacionales pueden importar, bajo la cobertura de la libertad de comercio, productos baratos para destruir esta industria, y cuando haya logrado su propósito, podrán aumentar de nuevo los precios.

• El contexto a que se refiere Vd. es el de una economía planificada con un control obrero generalizado. Pero el contexto en que sitúan sus reivindicaciones numerosos líderes sindicales y muchos dirigentes de la CBI (13) es muy distinto...

Tony Benn: En este caso, quedémonos en el contexto en el que me sitúo yo y no adoptemos la posición de que el proteccionismo podría resolver la crisis. Algunas críticas formuladas contra el papel de la planificación del comercio en la estrategia industrial de los laboristas parecen similares a las del CBI. Sin embargo, esto no es así.

• En el programa de cinco puntos que defiende Vd. en su campaña electoral, se opone Vd. a la aceptación de los misiles Cruise y de los submarinos Trident, y defiende Vd. la idea de una política no nuclear. Esto implica que nos quedaríamos en la OTAN. ¿Por qué no apoya Vd. la resolución de la ASTMS, según la cual Gran Bretaña debería retirarse de la OTAN?

Tony Benn: Me apoyo en la línea política definida por la Conferencia del Partido. Esta rechazó una propuesta de abandonar la OTAN, pero adoptó el principio de que deberíamos tener una política no nuclear, como el Canadá. Es una posición perfectamente posible. El PL tiene una posición con respecto a la OTAN que se sitúa en la perspectiva de una disolución simultánea de la Alianza Atlántica y del Pacto de Varsovia, y la creación de un sistema de defensa europeo. No pienso que el arsenal nuclear sea realmente un instrumento adecuado para una estrategia de defensa.



Los conservadores están desmantelando nuestra marina de guerra para equiparse con los Trident. Así, vemos cómo se debilita nuestra defensa para producir un arma que jamás podrá ser utilizada sin que sea destruido el país entero.

Pienso que la estrategia de defensa no nuclear, y la pertenencia como miembro no nuclear a la OTAN, es una posición perfectamente coherente. Es posible que el PL vaya más lejos y proponga que el país salga de la OTAN. De todos modos, pienso que es una eventualidad poco probable, pues muchas personas de mi generación se acuerdan de los años de preguerra y de los intentos que se hicieron entonces por parte de la izquierda para obtener un Tratado de seguridad colectiva frente al fascismo; esto llevó a un intento de mantener la Sociedad de Naciones, con todas las consecuencias que tuvo esto. Para mi generación, es imposible ir hacia atrás pensando que lo que sucedeen el mundo no nos afecta.

• El argumento según el cual ser miembro no nuclear de la OTAN significa, de hecho, apoyarse para la defensa en la OTAN, y por tanto, en última instancia, en los Estados Unidos, no carece de fuerza. El *Daily Mirror*, por otro lado, ha considerado incoherente la orientación del PL en este terreno, pues, según él, abandonar una política de defensa nuclear sería abandonar uno de los fundamentos de la OTAN.

Tony Benn: Esto es poco serio. Podrían Vds. plantearme la cuestión exactamente con los argumentos contrarios. Si estoy en contra del armamento nuclear, ¿por qué estoy a favor de los explosivos convencionales, que sin embargo pueden matar a miles de personas? Hay otro argumento que se utiliza también: lo que no es totalmente pacifista es ilógico. Debemos tratar de encontrar las mejores soluciones en el mercado de las posibles opciones.

Estoy por tener una defensa y por la idea de una defensa colectiva. No estoy a favor de una estrategia de defensa nuclear y estoy en contra de apoyarnos en el potencial norteamericano, para convertirnos así en una base aérea colonial. Creo que son numerosos los que asumen ahora estas posiciones. Si lográramos establecer una zona desnuclearizada en Europa, podríamos invertir esta corriente que nos lleva inevitablemente a una guerra nuclear.

• En Gran Bretaña y en el mundo, hemos asistido estos últimos años a una serie de

(12) El control de las importaciones es una de las piezas maestras de la "estrategia económica alternativa" de la izquierda.

(13) La CBI es la asociación patronal más representativa en Gran Bretaña.

ataques contra el derecho al aborto. ¿Qué podemos hacer para poner fin a estos ataques? ¿Piensa Vd. que los parlamentarios laboristas deben seguir teniendo el derecho a la cláusula de conciencia individual en torno a esta cuestión, o bien deberían ser obligados a apoyar la política general del PL, que es favorable al aborto libre?

Tony Benn: Estoy de acuerdo con la línea adoptada por la Conferencia del Partido. Pienso que es muy correcto que el movimiento de mujeres sitúe entre sus prioridades el derecho a controlar su propio cuerpo y que se oponga a las prerrogativas de un Parlamento dominado por los hombres sobre cuestiones que afectan exclusivamente a las mujeres.

Sin embargo, no soy partidario de excluir a los parlamentarios que, en estas cuestiones de carácter individual, tengan dificultades para asumir las posiciones del Partido. La gran característica de la izquierda, en comparación con la derecha, cuando ésta dominaba el Partido, es que no siempre está a favor del enfrentamiento cuando las posturas son divergentes. En este género de cosas tengo una tolerancia personal hacia los que no profesan las mismas ideas que yo. En última instancia, como sucede con todos los demás temas, hay que conquistar el apoyo de la gente. El referéndum en Italia ha demostrado que esto es posible (14).

• Entre otras cosas, la Campaña por la Democracia en el PL (15) propone que todas las nuevas listas de candidaturas incluyan a un negro y a una mujer, y que haya una actitud voluntarista sobre esta cuestión. ¿Qué opina Vd.?

Tony Benn: Es un problema difícil. Estoy por el socialismo; y si me viera obligado a meter a un negro o a una mujer del ala derecha en una lista, y tuviera que escoger entre ellos y un hombre de izquierda, estaría muy azorado.

El movimiento de mujeres, el movimiento negro deberían afiliarse como tales al PL y tener representantes en cada Conferencia para la elección de los candidatos. Estas deberían asegurar que los derechos de las mujeres y de la comunidad negra estén representados en el Partido cuando éste seleccione a sus candidatos. Creo que la solución está en la afiliación, del mismo modo que los mineros están afiliados (16). No tenemos ningún cupo para los mineros, y sin embargo los mineros están representados en el Parlamento, pues en la zonas en que son más fuertes, tienen una fuerte participación en el Comité Ejecutivo Local, y están presentes en las candidaturas.

En las zonas en que los negros están más implantados, sería normal que se hiciera lo mismo con ellos. Idem para las mujeres, donde los grupos de mujeres están mejor organizados.

No excluyo el sistema de cupos, pero pienso que se trata de un procedicimiento



que no hace sino esquivar el verdadero problema: ¿Cómo puede expresarse institucionalmente un movimiento obrero y socialista, unitario y autónomo, a través de un único partido político, vinculado al movimiento sindical? ¿Cómo puede expresarse en la Cámara de los Comunes y en otras partes?

• Piensa Vd. que la extrema izquierda debería afiliarse al PL, y en tal caso ¿cuáles podrían ser las modalidades de esta afiliación?

Tony Benn: Pueden afiliarse al Partido individualmente. Pero no creo que sea posible afiliar a un grupo que presenta sus propios candidatos a las elecciones. No podéis tener gente en el Partido que cuando no les gusta alguien que ha sido designado como candidato, van a luchar contra él a nivel electoral. La regla de la no candidatura es importante; pero hay un montón de grupos y de tendencias en el seno del PL, y esto no plantea problemas. Ni siquiera hay problemas cuando estos grupos tienen su propia prensa. Miren el *Independent Labour Party* (ILP). Una vez han renunciado a ser un partido político independiente, han vuelto a afiliarse y han mantenido una publicación en el seno del PL (17).

Muchos grupos de extrema izquierda han nacido y se han alimentado de los fracasos del PL, a partir de 1951, cuando se apartó del socialismo. Este ha sido el juicio de una generación de socialistas sobre el PL parlamentarista, sobre estos años de revisionismo.

Creo que es significativo que actualmente haya de nuevo convergencias. Si la izquierda se une al PL, entonces la influencia de la izquierda en el PL será mayor. Creo que éste es el método a seguir.

• ¿Por qué no se ha manifestado Vd. a favor de los presos de los bloques H? Al fin y al cabo, lo fundamental, lo que dicen —a saber, que el combate que han emprendido es político— es a todas luces exacto, aunque no siempre se esté de acuerdo con los métodos que emplean. ¿Qué piensa Vd. de la actividad de Don Concannon (18), que fue a ver a Bobby Sands cuando agonizaba para pedirle que interrumpiera la huelga de hambre?.

Tony Benn: No haré comentarios sobre uno de mis colegas. Creo que el problema de las prisiones (de los Bloques H) conduce a un enfoque reductor de los problemas que se han planteado. Si la cuestión central que debe plantearse hoy en día en relación con Irlanda del Norte, es la cuestión del régimen interno de las prisiones, esto quiere decir que el porvenir de Irlanda del Norte está desgraciadamente decidido: la población carcelaria seguirá siendo la de hoy, y por consiguiente, la cuestión central será el estatuto y el uniforme de los presos.

Creo que se trata de hecho de una cuestión política y que uno de los aspectos más increíbles y más trágicos de la situación actual es que los laboristas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre Irlanda. El gabinete fantasma (19) laborista no ha discutido prácticamente jamás sobre Irlanda. Creo que sólo ha discutido de esto cuando la huelga de los trabajadores del Ulster. Yo he intentado, sin éxito, abrir esté debate en el seno del gabinete, incluyendo el problema de los presos. Cuando discutimos el Manifiesto, se nos dijo que era demasiado tarde para poder decir otra cosa. Así, el Manifiesto no habla de Irlanda.

Cuando creamos un grupo de estudios, tuvimos primero un grupo formado por miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Yo y otros nos pusimos de acuerdo para considerar que el objetivo debería ser el de una Irlanda unificada e independiente. Esto fue rechazado, mientras que se consideró favorablemente todo un abanico de diversas soluciones.

Cuando Tony Sannois (representante de las Juventudes Socialistas en el Comité Ejecutivo Nacional) presentó una resolución sobre las condiciones de vida en las prisio-

(14) El referéndum celebrado en 17 y 18 de mayo en Italia, con el que se pretendía restringir la legislación, salió derrotado con el 70% de los votos en contra.

(15) La "Campaña por la Democracia en el PL" es un agrupamiento de militantes que han luchado durante años por mejorar la democracia interna. Actualmente es un marco ampliado para todas las fuerzas de izquierda que luchan en torno a los problemas de democracia en el PL.

(16) En el PL pueden afiliarse los sindicatos colectivamente.

(17) El ILP participó en la fundación del PL, pero se apartó de él en los años 30. Actualmente ya sólo existe la publicación del mismo nombre.

(18) Don Concannon es el portavoz laborista para Irlanda. Lanzó una campaña ignominiosa a favor del sistema bipartidista de concertación con el gobierno Thatcher.

(19) El gabinete fantasma *(shadow cabinet)* es una especie de "gobierno alternativo" que por norma tiene la oposición en Gran Bretaña, y que cuenta con especialistas encargados de intervenir en torno a los diversos aspectos y sectores de la política gubernamental.

nes, que no se limitaba a los presos del IRA, la propuesta salió derrotada. Creo que ahora hay que volver a las fuentes. Los Seis Condados nacieron de la violencia. 75 de los 105 parlamentarios elegidos en 1918 estaban por la independencia, y la división se organizó con la violencia. Creo que todo el resto no permite abordar el problema en toda su dimensión.

• Sin embargo, el problema de las condiciones de vida de los presos es decisiva para que se admita que lo que ocurre en Irlanda del Norte es una lucha política...

Tony Been: Esto lo entiendo, pero mi tarea es la de transmitir este mensaje: el árbol no debe ocultar el bosque e impedir que sea oído este mensaje. Sobre la base de mis posiciones he hecho todo lo que podía hacer. He actuado poco públicamente, pero las propuestas que he avanzado en el gabinete fantasma y en el grupo *Tribune* no han cuajado. (20).

Aquel hombre agonizando no representaba en mi opinión ninguna alternativa, sino que mostraba hasta qué punto estaba inadaptada la política británica. Les decimos: no podéis matar gente. No dejéis que os maten de hambre. No debéis ser candidatos a las elecciones si sabéis que no cumpliréis vuestro mandato. Se ahogaron las posibilidades de elaborar una política alternativa.

He subrayado que toda la historia del imperio británico está llena de personajes que empezaron a darse a conocer en la cárcel y que terminaron siendo primeros ministros, invitados a tomar el té con la Reina. Mugabe es el ejemplo más reciente de alguien que ha pasado de terrorista al puesto de jefe de Estado, por la vía electoral.

Este argumento no ha influido mucho en mis colegas, pues se negaban a mirar las cosas de frente. ¿Cómo salir de una situación provocada, en lo fundamental, por la presencia de las tropas británicas, que son precisamente las que debían poner fin a dicha situación?.

• Quizá el primer paso sea la ruptura con el sistema bipartidista, aunque sólo fuera para sugerir que existe una política alternativa. Sin embargo, la dirección laborista ha reaccionado muy pronto para mantener el bipartidismo.

Tony Benn: No quiere hacer comentarios sobre otras personas. No cabe ninguna duda que la elección de Bobby Sands tuvo un gran significado, y que fue recibida como tal, sobre todo a nivel internacional. Su muerte fue recibida como la muerte de un miembro del Parlamento británico que protestaba contra sus condiciones de detención. El hecho de que el secretario general de las Naciones Unidas, que la señora Gandhi, el Papa y la Comisión Europea de Derechos Humanos hayan tomado cartas en el asunto, ha iniciado un proceso.

Pienso que mis discursos, mis entrevistas y la reunión del Comité Laborista sobre Irlanda han contribuido a romper esa costra. Además ya puede verse cómo evolucionan las cosas. Se necesitará poco tiempo para que estos sentimientos penetren en el partido y lleguen a sus miembros. No crean Vds. que no pasa nada. De aquí a finales de año, o, por qué no, al final del próximo Congreso, verán Vds. una política laborista radicalmente distinta.

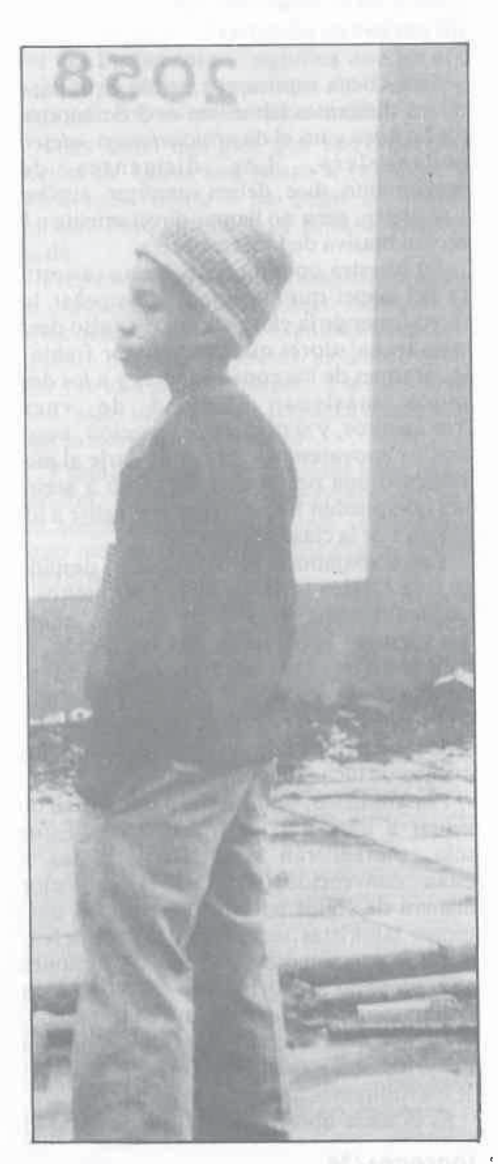
• Las luchas desarrolladas en el seno del PL han comportado, y comportan, importantes pasos adelante. Pero el resultado final dependerá evidentemente del apoyo que presten millones de trabajadores. ¿No piensa Vd. que estos combates por la democracia interna deben fundirse e identificarse con las luchas sociales del momento?.

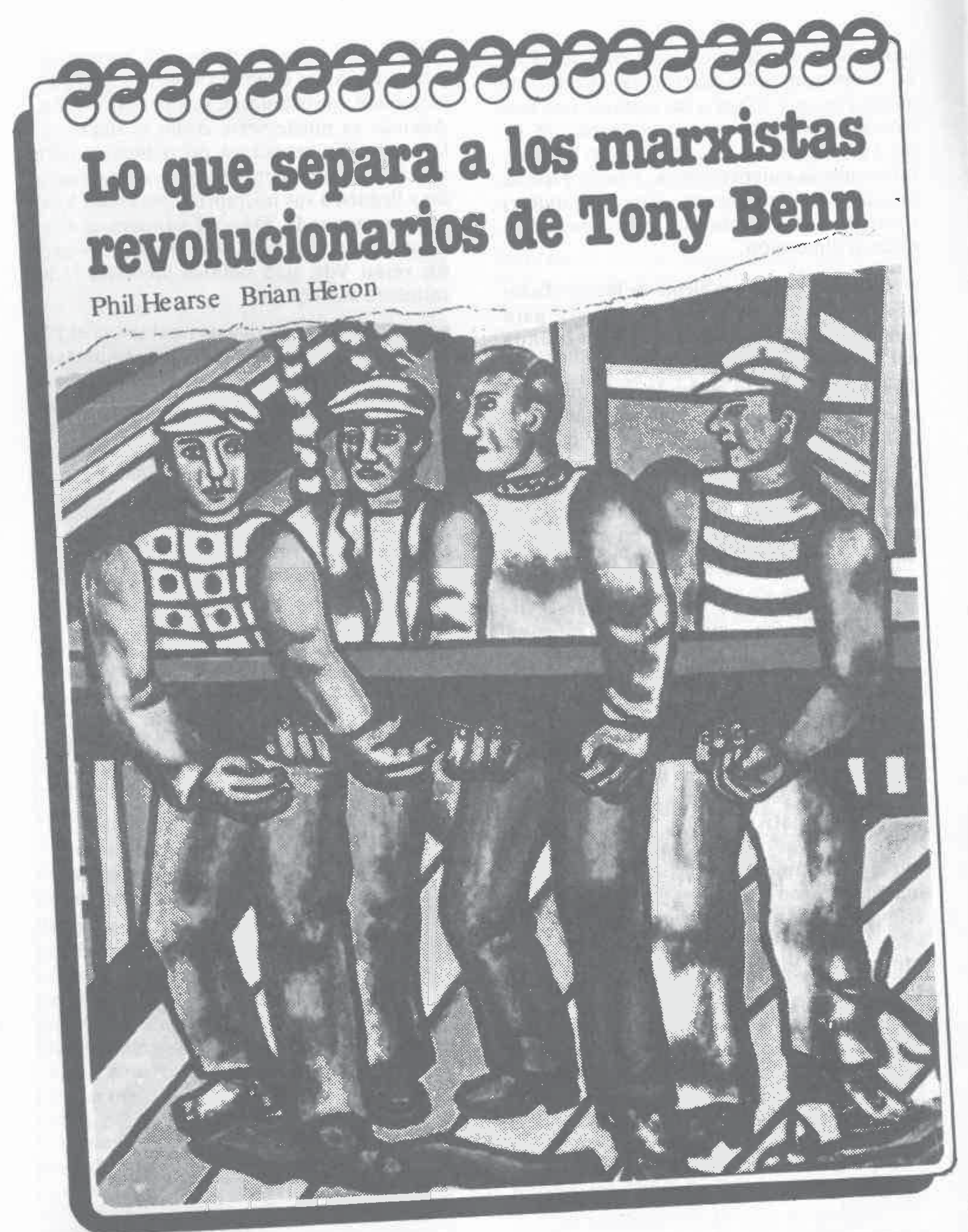
Tony Benn: Si presentan Vds. las cosas de esta manera, estoy totalmente de acuerdo con Vds. No quiero que mi argumentación sobre el lenguaje revolucionario opuesto al lenguaje reformista sea un elemento de confusión. Lo que yo quería decir es que no podremos construir el socialismo en Gran Bretaña sin el apoyo activo de millones de personas. Cuando lo tengamos, nada en la tierra podrá detenernos.

Entrevista efectuada por Phil Hearse y Brian Heron para *"Socialist Challenge"*, Londres, 4 de junio de 1981. ■

(20) *Tribune*, el ala izquierda del PL, está actualmente dividida entre los partidarios y los adversarios de Tony Benn. Es un agrupamiento alrededor de una revista, como existen otros en el Partido.







SOCIALIST *Challenge,* semanario del International Marxist Group (sección británica de la IV Internacional) apoya la candidatura de Tony Benn a la vicepresidencia del Partido Laborista.

Como destaca correctamente en la entrevista, la campaña ha abierto el debate, particularmente en los sindicatos, sobre la línea política y la democracia en el PL, cosa de la que debemos felicitarnos.

Pero pensamos que el programa de Tony Benn es absolutamente inadecuado, tanto desde el punto de vista de la línea inmediata a seguir por el movimiento obrero británico en su lucha contra el gobierno conservador, como a largo plazo, para llegar al socialismo.

El apoyo prestado a la campaña de Tony Benn debe ir acompañado, por tanto, de una crítica a su programa y de la presentación de los ejes políticos socialistas basados en la capacidad de la clase obrera para aplicar esta política.

¿Cuál es el papel de las direcciones obreras?

Tony Benn explica que, según él, el papel de los dirigentes laboristas es el de *«apoyar las luchas»* y no el de *«iniciarlas»* o *«desencadenarlas»*. Los dirigentes del movimiento, dice, deben *«analizar, explicar y apoyar»*, pero no llamar directamente a la acción masiva de la clase obrera.

En nuestra opinión, esto es una caricatura del papel que deberían desempeñar las direcciones de la clase obrera. Es falso decir a los trabajadores que deben hacer frente a los ataques de los conservadores y a los despidos masivos: «Cuidad de vuestros asuntos, y si optáis por la acción, nosotros os apoyaremos». Hay que darle al movimiento una perspectiva en torno a acciones que puedan hacer frente realmente a los ataques de la clase dominante.

Los trabajadores enfrentados al despido en una fábrica, estarán menos dispuestos a emprender una acción combativa, como por ejemplo una huelga con ocupación, si nadie más en el país está dispuesto a adoptar una iniciativa idéntica. El PL y los sindicatos pueden desempeñar un papel insustituible generalizando y popularizando los medios de lucha más eficaces.

Por supuesto, nadie debe dar la orden de actuar a un grupo de trabajadores. Estos sólo emprenderán la acción de masas si están convencidos de que es la mejor manera de seguir adelante. Pero si los dirigentes laboristas recorrieran el país defendiendo activamente este tipo de acciones para preparar al movimiento obrero de cara al derrocamiento del gobierno conservador, si organizaran acciones comunes entre el PL y los sindicatos, se reforzaría el papel de los militantes que quieren luchar.

Es la clase obrera quien debe detentar el poder y la soberanía, y no el Parlamento. Los diputados que pretenden representar los intereses de la clase obrera deberían ser responsables ante el movimiento obrero y no ante el Estado. Permitir que esta soberanía siga siendo el legado del Estado capitalista —incluso con un gobierno socialista a la cabeza— es darle el poder sobre la vida y la muerte a su propio verdugo.

Las dudas que expresa Tony Benn sobre el valor de las acciones de masas impulsadas por la clase obrera como fuerza motriz de la marcha al socialismo repercuten en sus posiciones sobre la construcción del socialismo.

En primer lugar, es extremamente reservado en cuanto a la nacionalización de los grandes monopolios, bancos y compañías financieras, que sería el primer paquete de medidas que debería adoptar un gobierno laborista si quiere emprender el camino del cambio socialista.

Es bueno que Tony Benn apoye el artículo 4 de los Estatutos del PL, que preconiza el control sobre las esferas dirigentes de la economía. Pero cuando añade que *«la experiencia de la administración abrirá la vía del cambio»*, sugiere una estrategia gradualista.

Previamente, Tony Benn ha asociado su nombre al concepto de acuerdos de planificación con los grandes monopolios, lo que implicaría que un gobierno laborista podría colaborar con las empresas para planificar las inversiones sin llegar nunca a su nacionalización.

Lo más asombroso es que considera la nacionalización de los sectores clave de la economía como un proceso que se escalona durante varios años. Sería una estrategia desastrosa. Para asegurar el pleno empleo, es necesario que la clase obrera controle desde el principio las instituciones financieras, las esferas dirigentes de la industria y los principales circuitos de distribución.

La clase dominante y las multinacionales se aprovecharían del mínimo retraso, pues seguirían controlando la economía, para sabotear las medidas adoptadas por un gobierno de izquierda. se intensificaría la fuga de capitales; habría huelga de inversiones; las multinacionales trasladarían sus unidades de producción a otros países "más seguros"; las compañías inmobiliarias y los bancos se negarían a financiar las inversiones. Y contarían con la ayuda y el apoyo del aparato de Estado capitalista.

Más importante aún es el hecho de que estas fuerzas aprovecharían el mínimo signo de relajamiento para lanzar una gran contraofensiva con miras a desestabilizar políticamente al gobierno y tratar de derribarlo.

El único medio para ganarse y conservar el apoyo popular —como demuestra la experiencia de todos los gobiernos de "izquierda", en Francia en 1936, en Italia, en Chile— es el de asegurar que las conquistas de la clase obrera se establezcan de forma irreversible. Esto implica una estrategia de centralización del poder en manos de las organizaciones obreras.

La idea según la cual el papel de los trabajadores es el de impulsar las acciones reivindicativas y que la tarea del PL es la de apoyarles, es la clásica repetición de la antigua división —entre la acción reivindicativa y la acción parlamentaria— que ha perjudicado al movimiento obrero.

En una situación como la que acabamos de describir, los trabajadores deberían imponer su control sobre la producción para responder al sabotaje de los patronos. La exigencia de apertura de los libros de cuentas, para sacar a la luz pública los intentos de sabotaje, el veto contra las decisiones patronales, la elaboración de un plan nacional por parte de los sindicatos, sobre la base de estas medidas, son el complemento que hay que establecer para contrarrestar la reacción en el Estado.

Acción reivindicativa para derribar el gobierno conservador

Tony Benn se pronuncia enérgicamente contra toda acción reivindicativa destinada a derribar a los conservadores. Añade que esto equivaldría a un "golpe de Estado", y que lo que hay que hacer es basarse en el convencimiento y el "apoyo masivo". Por consiguiente, tendríamos que esperar hasta las elecciones legislativas de 1984...

Es un problema falso. Para amenazar a los conservadores haría falta un movimiento de huelgas que desembocara en una huelga general que englobara a centenares de miles de trabajadores. Para ser eficaz, debería arrastrar a la lucha a millones de trabajadores. Las ideas políticas circularían rápidamente en semejante clima de efervescencia; es muy distinto de un "golpe de Estado" organizado por una pequeña minoría.

Los conservadores se encuentran actualmente ante una ola de impopularidad sin precedentes. Millones de trabajadores los odian, y ahí reside la causa de su aplastante derrota en las elecciones locales del pasado mes de mayo. Ya no disponen de ningún mandato para proseguir con su política de liquidación de la industria británica y de despidos masivos.

El argumento de Tony Benn es que toda acción reivindicativa que se plantee con fines políticos pondría en tela de juicio las reglas del juego político y las normas de la democracia parlamentaria.

Pero él mismo subraya que la clase dominante no confía primordialmente en el Parlamento y en las elecciones. Entonces, ¿por qué deben someterse los obreros a la ley de los patronos?

En la argumentación de Tony Benn, la movilización de los trabajadores está subordinada a la Constitución y a la maquinaria estatal de la clase dominante. La experiencia de Chile demuestra que para poner en práctica medidas socialistas, los trabajadores sólo pueden contar con sus propias organizaciones, ya sea para combatir hoy a los conservadores, ya sea para aplicar mañana la legislación de un gobierno socialista.

Sin estas medidas, la "experiencia de gobierno" crearía la confusión y la desorganización en el movimiento obrero y le permitiría a la derecha retomar la iniciativa.

Además, los argumentos de Tony Benn sobre el Estado presentan un punto débil importante. Durante la entrevista, *Socialist Challenge* subrayó que cualquier gobierno de izquierda que tratara de aplicar medidas socialistas tendría que enfrentarse inevitablemente al actual aparato de Estado.



Tony Benn dice que esto equivaldría a reconocer el carácter inevitable de la violencia; y que si él así lo creyera, renunciaría ipso facto a la política y se haría también él con un fusil.

A esto opone el "apoyo público de masas" y la "determinación" de un gobierno socialista. Este cuadro que pinta es un mundo al revés.

En Chile, en 1973, el gobierno de Salvador Allende gozaba sin ninguna duda de un apoyo de masas entre la opinión pública. Exactamente ocho días antes del golpe de Estado, tuvo lugar en Santiago una manifestación de un millón y medio de trabajadores, para apoyar al gobierno contra la reacción. Pero a pesar del apoyo de masas de que disponía, el gobierno fue fácil mente derrocado por las fuerzas armadas.

Para los comunistas revolucionarios, la imposibilidad de evitar un choque con la clase dominante —que, como dice Tony Benn, gobierno directamente a través de su control sobre las instituciones decisivas (ejército, policía, tribunales de justicia, grandes monopolios) y no únicamente a través del Parlamento— significa que los trabajadores deben prepararse de antemano para este enfrentamiento inevitable.

Tony Benn nos dice que apoyaría toda acción de masas con miras a restaurar la democracia frente a un golpe de Estado militar. Pero entonces ya sería demasiado tarde.

Prepararse para el enfrentamiento implica organizar el control obrero sobre las fábrica *desde el principio*. Significa destruir el aparato policial, el ejército, el aparato judicial y la alta administración. Y si no se hace esto, estas instituciones frenarán como puedan la marcha al socialismo.

Y significa también organizar a los trabajadores, como parte integrante de una estrategia socialista, para que se resistan a todo intento de golpe de Estado, si es preciso por la fuerza.

El "enfrentamiento decisivo" no significa necesariamente la violencia de masas. En Gran Bretaña, las fuerzas armadas y la policía cuentan con unas 250.000 personas. La clase obrera se cuenta por millones. Ningún golpe de Estado tendría éxito si estos millones estuvieran movilizados y dispuestos a utilizar el arma de la huelga, las manifestaciones masivas y, si es preciso, a emplear la fuerza para detenerlo.

Pero ninguna de estas formas de resistencia podría producirse si la clase obrera escucha de sus dirigentes que tales aconteci mientos son improbables o imposibles.

El hecho de que esta sea la línea de la dirección actual del movimiento obrero no hace sino subrayar la necesidad de que la base de este movimento prosiga el proceso de transformación de sus organizaciones, obligando a la dirección a ser responsable ante la base y construyendo una dirección

alternativa ligada a la lucha de clases y no a la colaboración de clases.

El control de las importaciones

La versión de Tony Benn de la *«estrategia económica alternativa»* (AES) no es sino un programa de reforma institucional del capitalismo. Según Tony Benn, hay que relanzar la economía, concluir acuerdos de planificación con los capitalistas; para combatir los efectos inflacionistas inevitables de este programa, hay que adoptar determinados mecanismos anti-inflacionistas que van de una "política salarial voluntarista" al control de las importaciones.

Este programa es bastante flexible y puede recibir el apoyo de todas las alas del movimiento obrero, incluso el de Denis Healey, su principal oponente en la carrera de la vicepresidencia del PL.

Denis Healey minimiza los aspectos que en la "estrategia económica alternativa" favorecen a la clase obrera: recortes en los créditos para la Defensa, reducción de la jornada de trabajo sin disminución del salario, etc. Healey puede subrayar el aspecto fundamental de la AES, que es la defensa intransigente del capitalismo, y el principio de colaboración entre el movimiento obrero y la patronal con el fin de restaurar los beneficios de la clase dominante británica.

Es bueno que Benn rechace el proteccionismo comercial como estrategia para resolver la crisis. Sin embargo, sus declaraciones siguen siendo ambiguas.

Explica que haría falta una planificación del comercio exterior por parte de los sindicatos para proteger a la industria nacionalizada, cosa con la que estamos de acuerdo, siempre que esto signifique claramente que se instaura el monopolio del Estado sobre el comercio exterior, bajo un gobierno socialista que nacionalizaría y pondría bajo control obrero a los sectores clave de la industria.

Si rechaza el control de las importaciones bajo el capitalismo, no hay problemas; pero que se lo diga claramente a los dirigentes de los sindicatos que buscan una alianza con la CBI y la patronal para limitar las importaciones.

Nosotros pensamos que existe una alternativa, que es la del reparto del tiempo de trabajo y la de la semana de 35 horas inmediatamente.

La OTAN y las armas nucleares

En la argumentación de Tony Benn no hay nada más incoherente que su posición sobre las armas nucleares y la OTAN.

Si Gran Bretaña fuera un miembro "no nuclear" de la OTAN, de hecho seguiríamos dependiendo del paraguas nuclear norteamericano, como es el caso del Canadá. Sería imposible separarse de la esfera de influencia política norteamericana mientras permanezcamos dentro de la OTAN, tengamos o no armas nucleares.

Es mucho lo que está en juego. La OTAN es una alianza imperialista. Imposible concebir una alianza entre una Gran Bretaña socialista y el gendarme internacional que es el imperialismo americano. Aún si fuera deseable tener una forma u otra de alianza contra la Unión Soviética —no es el caso—, sería imposible establecerla con una fuerza antisocialista y antiobrera en su propia esencia.

Una Gran Bretaña socialista tendría que desarrollar una política internacional socialista, que debería incluir una ampliación de los intercambios comerciales y el establecimiento de relaciones distintas con la Unión Soviética. En este contexto, es evidente que las fuerzas de la OTAN serían utilizadas para amenazar y destruir el socialismo en Gran Bretaña. Imposible concebir alianza alguna entre el socialismo y el imperialismo. Imposible un socialismo que se conjura con él imperialismo contra la Unión Soviética.

Apoyamos el rechazo de los misiles de crucero *(cruise missiles)* y los Trident, así como la reivindicación del desmantelamiento de las bases norteamericanas. Pero nos oponemos irremediablemente a toda idea de "una política de defensa no nuclear" si esto significa una alianza con el imperialismo. Una política de defensa socialista debería dirigirse *contra* el imperialismo.

Disciplina de voto y aborto

Estamos en profundo desacuerdo con Tony Benn en cuanto a su posición sobre disciplina de voto y el aborto.

Explica que, si bien apoya la política defendida por el partido sobre el aborto libre y gratuito, se niega a emprender acción alguna contra los diputados que, sobre este "problema de conciencia", votan "contra" en el Parlamento.

Esto contrasta con la postura defendida por la *Campaing for Labour Party Democracy* (CLDP), que ha propuesto que el voto sobre el aborto sea una de las condicioners *sine qua non* para poder presentarse a las elecciones parlamentarias. Pensamos que el aborto es una cuestión de clase, uno de los derechos democráticos fundamentales que los diputados laboristas deben defender.

En Italia, el reciente referéndum sobre el aborto se ha convertido en un test de la relación de fuerzas entre el movimiento obrero y las fuerzas de la reacción. En Gran Bretaña, cualquier equívoco en el movimiento obrero sólo puede provocar una división desastrosa que llevaría a derrochar las fuerzas del movimiento obrero.

El derecho al aborto es atacado a intervalos regulares. La última vez, el TUC encabezó una importante manifestación contra el proyecto Corrie de limitación del derecho de aborto. La política del movimiento obrero debe ser la defensa de la ley de 1967 y la lucha por la creación de estructuras y el voto de créditos que permitan realmente que las mujeres puedan optar.

Tony Benn esquiva el problema del apoyo a la inclusión obligatoria de negros y mujeres en las candidaturas con el argumento de que, después de todo, hay negros de derechas y mujeres que se oponen al aborto... Es cierto, pero esto no responde al problema.

Estos sectores de la sociedad sufren una discriminación estructural. Su afiliación al PL será la expresión de la radicalización en el partido. El aumento del número de negros y de mujeres no implicará que el partido sea mas derechista, sino al contrario, más radical.

Irlanda

La cuestión del estatuto político para los huelguistas de hambre republicanos concentra todos los problemas que plantea la lucha en Irlanda del Norte. Pero Tony Benn no apoya sus reivindicaciones.

El apoyo a los huelguistas de hambre ha demostrado al mundo entero la naturaleza política de la lucha; también ha demostrado que los presos republicanos de la prisión de Long Kesh son presos de un ejército en lucha por la liberación nacional.

El Estado fantoche de Irlanda del Norte y sus Seis Condados, instaurado por el imperialismo británico, es rechazado por gran número de sus ciudadanos, que son partidarios de una Irlanda unificada. Esto puede verse claramente en la elección de Bobby Sands y en los resultados de las recientes elecciones municipales.

El porvenir de Irlanda pertenece al propio pueblo irlandés. El Estado británico no tiene ningún derecho a encarcelar a los combatientes de la libertad irlandesa, a ocupar militarmente ninguna parte del suelo irlandés ni a enviar sus tropas, aunque esto se hiciera bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

El silencio de la izquierda laborista en torno a la huelga de hambre y el apoyo sin reservas prestado a los conservadores por la dirección laborista, es un escándalo y una vergüenza.

Es bueno que Tony Benn critique la política del bipartidismo de la dirección laborista. Su comportamiento es preferible al de muchos otros. Pero evita constantemente pronunciarse sobre el problema vital del apoyo al aspecto clave de la lucha actual en el norte de Irlanda, así como sobre el problema básico del derecho del pueblo irlandés a decidir sobre su propio destino.

Marchar separados, golpear juntos

Aunque el *Socialist Challenge* esté de acuerdo con algunos de los puntos del programa de Tony Benn, está claro, después de lo que acabamos de exponer, que pensamos que desde el punto de vista general es una equivocación. Sin embargo, la campaña de Tony Benn por la vicepresidencia del PL tiene el mérito inestimable de batirse contra el ala derecha del partido, y de organizar la lucha de la izquierda por democratizar el PL y los sindicatos.

Esta campaña crea las mejores condiciones para un debate sobre la política socialista, en el que puede tomar parte el conjunto del movimiento obrero.

En la lucha contra el ala derecha, contra los agentes del capitalismo en el movimiento obrero, estaremos codo a codo con los que apoyan a Tony Benn. Pero si después de la derrota del ala derecha queremos ir más lejos, hacia el socialismo, necesitaremos una estrategia diferente de la que propone Tony Benn, que no plantea una estrategia con miras a aplastar a los conservadores, o a hacer realidad el socialismo.

Necesitamos un programa para la acción de masas y para la revolución socialista. Con este objetivo, *Socialist Challenge* impulsará el combate junto a Tony Benn contra el ala derecha del PL, pero desarrollando sus propias movilizaciones, con su propio programa y bajo su propia bandera. ■



La contrarreforma ha comenzado

Angel Muñoz

EL golpe de Estado del 23 de Febrero abrió una nueva etapa política en el Estado español. Podría haber sido el inicio de la recuperación del movimiento obrero, después de 3 años de retrocesos, derrotas, desmoralización. Las manifestaciones del 27 de Febrero pese a su enorme confusión, demostraron que esa posibilidad existía.

Pero seis meses después, está claro que el 23-F se inició una verdadera "contrarreforma", que ha liquidado ya muchas de las conquistas políticas del postfranquismo y amenaza con liquidarlas todas.

Porque el peligro de un "segundo golpe" no ha desaparecido. Tampoco puede decirse que se haya reforzado: simplemente, se ha "instalado". El golpismo ha pasado a ser una de las instituciones fundamentales del régimen. Esta situación ha sido bautizada con el nombre de "democracia vigilada". Sí, los golpistas "vigilan la democracia, como el zorro "vigila" el gallinero.

Vamos a hacer balance de los 6 meses transcurridos desde el 23-F, empezando con un resumen de los datos ahora conocidos, y que permiten hacerse una idea más precisa de lo que realmente ocurrió.

Los dos "Pactos de la Zarzuela"

En Octubre de 1980, la gran mayoría de la jerarquía militar llega a la conclusión de que es necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas (FAS), para cambiar el curso de la situación política. El modelo elegido es una variante del golpe de Estado de Turquía: un "pronunciamiento" del conjunto de las FAS dirigido al Rey, planteándole la necesidad de nombrar un gobierno cívico-militar de "salvación nacional". Las "razones" del pronunciamiento serían las clásicas: "acabar con el terrorismo", "defender la unidad de la patria", "restablecer en el plazo más breve posible una verdadera democracia", etc. No había ninguna duda entre los jefes militares sobre el apoyo del Rey al proyecto, cuya fecha quedó fijada para los días posteriores al 1º de Mayo del 81 (1).





En el mes de Noviembre, los golpistas entran en contacto con miembros del equipo Reagan y les informa del plan; encuentran una acogida prudente, pero alentadora: el nuevo gobierno USA *"no se opondría al golpe, pero tampoco le favorecería"* (2).

En las mismas fechas, se producen **probablemente** contactos con dirigentes del capitalismo español. Podemos hacernos una idea de la acogida que encontraron —parecida a la de la administración Reagan—, por medio de estas declaraciones del presidente del primer banco español (Banco Español de Crédito), Aguirre Gonzalo, realizadas inmediatamente después del 23-F: *«Si un golpe no triunfa, estamos como estábamos, y si triunfa es para traer una dictadura, que se supone impondrá el orden. Usted comprenderá que eso al Dinero* (sic) *no le asusta. Otra cosa es que, como consecuencia de un golpe, se presuma la posibilidad de una revolución. Yo siempre he dicho que en un cambio de régimen se plantea esta escala social: uno, desencanto; dos, indiferencia, que es el punto en el que estamos; tres, descontento; cuatro, irritación y cinco, revolución. Al llegar al cuatro, es cuando el Dinero se alarma»* (3). El proyecto de golpe aparece, pues, ante los poderosísimos sectores capitalistas que representa Aguirre Gonzalo, como innecesario y prematuro, pero se adopta ante él una actitud de "observación", no de hostilidad. Los golpistas sólo encontrarán apoyo **directo** en sectores financieros marginales y lumpen-

NOTAS

(1) Hay multitud de referencias en la prensa española e internacional sobre los preparativos del golpe. Para la fecha prevista, ver las declaraciones de Alberto Oliart, ministro de la Defensa. "Diario 16". 13.4.81.

(2) Declaraciones de Felipe González. "El País". 17.3.81.

(3) "Hoja del Lunes de Madrid". 2.3.81.

capitalistas enriquecidos bajo el franquismo.

En fin, también en Noviembre se realiza otro contacto, que puede sorprender: el general Armada, que será el 23-F el candidato de los golpistas a presidente del gobierno, conversa sobre «la situación del país y sus soluciones», con el responsable del PSOE para temas militares, Enrique Múgica, y el secretario general del PS de Catalunya, Joan Raventós (4). Los dirigentes socialistas afirman que esta conversación, cuya realización se ha conocido sólo **después** del golpe, tuvo un carácter "informal", sobre posibles salidas de "gobierno de unión nacional" por "mecanismos constitucionales". La realidad es que, evidentemente, los golpistas trataban de sondear la actitud del PSOE hacia sus planes. El general Armada llegó a la conclusión de que, al menos, **no** iba a haber una oposición frontal.

En estas condiciones, el proyecto sigue adelante. Pero por su misma amplitud, por el hecho de que fuera un plan de **la práctica totalidad** del mando de las FAS, era inevitable la presencia de diversas opciones políticas en su interior.

Efectivamente, en la jerarquía de las FAS existía un amplio acuerdo en el rechazo de la situación existente, en el balance totalmente negativo del postfranquismo y en la necesidad de realizar el "pronunciamiento". Pero sobre la forma y los objetivos inmediatos de éste, había posiciones muy diferentes, desde los que querían el puro retorno a una dictadura militar, formando un gobierno con los despojos del franquismo, hasta los que sólo consideraban necesario, por el momento, "disciplinar" al régimen, pidiendo la colaboración en el gobierno a los partidos de la derecha parlamentaria, e incluso buscando alguna forma de compromiso con el PSOE.

Desde la muerte de Franco, el Ejército español carece de "caudillo", de una persona, o una institución que le centralice políticamente. El proyecto de "pronunciamiento" no tenía una clara dirección dentro de la jerarquía militar. Tampoco la encontró en el imperialismo USA, ni en ninguna fracción significativa de la burguesía española.

En estas condiciones, a primeros del 81 es probable que existiera una cierta competencia entre las distintas "alas" de la jerarquía, para hacer prevalecer su versión del "pronunciamiento" sobre las demás. El golpe del 23-F fue fundamentalmente la acción del ala más reaccionaria, que decidió **adelantarse** a los planes previstos.

Entre las causas que provocaron esta anticipación, están sin duda las circunstancias de crisis de gobierno y de la UCD que existían desde la dimisión de Adolfo Suárez, así como el aumento de la presión política de la extrema derecha, que se produjo por las mismas fechas. Pero la causa fundamental, y la que en definitiva provocó el fracaso, fue **un intento de la extrema derecha militar de hegemonizar el golpe respecto a los demás sectores.**

A pesar de ello, los golpistas del 23-F no encontrarán ninguna hostilidad seria entre sus "compañeros de armas", ni antes, ni después de los hechos, y dispondrán de colaboraciones mucho más amplias de las que aparecen en las versiones oficiales (5).

Pero el protagonismo de la extrema derecha militar en el golpe, plantea inmediatamente el riesgo de que resulte incontrolable por la burguesía, por el Rey e incluso por la mayoría de los jefes de las FAS. En todo caso, un rápido éxito militar hubiera inclinado la balanza en favor de los golpistas. Al no producirse éste éxito, se abría la posibilidad de un compromiso entre el Rey y los mandos militares no implicados directamente en el golpe. Efectivamente, el pacto se realiza la misma noche del 23-F.

Este pacto es la contra-reforma; los hechos posteriores están determinados por él.

Hay diversas versiones sobre el contenido del pacto (6). Nos interesa destacar su aspecto fundamental: el Ejército acuerda con el Rey detener el golpe de Estado y decide dar una **última oportunidad** al régimen parlamentario. A cambio obtiene garantías sobre un "cambio de rumbo" en la política gubernamental en los tres terrenos que le preocupan especialmente: autonomías, terrorismo y crisis económica (7). Naturalmente, se le garantiza también su capacidad para controlar el cumplimiento del pacto y para intervenir de nuevo, si los "políticos" no consiguen resolver "los males de la patria". Incluso, el pacto incluye una fecha límite, el 29 de Marzo, para que sean adoptadas por el gobierno una serie de medidas inmediatas, en especial la dirección militar en la lucha contra ETA (8). No fue pues solamente el Rey, sino **este pacto** el que, en ausencia de movilización de masas, detuvo el golpe militar.

Al día siguiente, 24 de Febrero, tuvo lugar lo que se conoce oficialmente por "Pacto de la Zarzuela", es decir, la reunión del Rey con los dirigentes de los partidos parlamentarios, con la excepción significativa de las organizaciones nacionalistas. Este pacto es la formalización de la política de "unidad nacional", pero en realidad constituye una simple ratificación del compromiso del Rey con los militares.

El "golpe de timón"

Varios meses antes del 23-F, políticos de la derecha (en especial, Fraga Iribarne), dirigentes patronales, portavoces militares y de la Iglesia, venían reclamando lo que se llamaba "un enérgico golpe de timón" en la política gubernamental. Se trataba de presionar a UCD para que asumiera una orientación aún más derechista, abandonando definitivamente todo tipo de "consenso" con la izquierda parlamentaria. Pero los



conflictos internos y el debilitamiento del partido gubernamental, le impedían una respuesta decidida a estas presiones.

Finalmente, fue el Ejército quien dió el "golpe de timón" y fijó el nuevo rumbo de la política española. UCD asumió con gusto el papel de timonel y, por decirlo todo, el PSOE y el PCE el papel de grumete. La derecha comprendió enseguida las posibilidades que para ella se abrían y se dispuso a aprovecharlas.

Ciertamente, el punto de partida era una situación muy grave: el 23-F había revelado una profunda crisis de régimen y una crisis de dirección política, sin solución a medio plazo. Todas las piezas de la reforma se habían dislocado. El Rey era el garante de la "unidad nacional" de las fuerzas parlamentarias, pero no era ya, sino formalmente, el jefe de las FAS. El Ejército asumía un papel político directo, establecía los límites de funcionamiento del sistema parlamentario y planteaba claramente su voluntad de dar un nuevo golpe, si no se cumplían sus condiciones.

Junto a esta posibilidad de **una intervención del conjunto de las FAS**, que es la ver-

(4) "El País". 4.3.81 y "Diario 16" 9.3.81.

(5) Por ejemplo, "El País" del 26.3 recoge una información de "Newsweek" del 23.3, según la cual la decisión de dar el golpe del 23-F fue adoptada en una reunión de 17 generales; sólo 2 votaron en contra, por considerarlo "inoportuno".

(6) Por ejemplo, "Sábado Gráfico" del 4.3, publicaba en portada las "6 condiciones" que exigían los militares para evitar un nuevo golpe. Hay otras versiones, pero el contenido de fondo es siempre el mismo: "integridad de la Patria", "acabar con el terrorismo" y "orden económico".

(7) «El golpe del 23-F es la cristalización de una serie de malestares, en la base de los cuales está el terrorismo, la crisis económica, la integridad nacional». Declaraciones del ministro de Defensa. "Diario 16" 6.3.81.

(8) "El País" 24.3.81.

dadera amenaza de golpe que existe ahora, la extrema derecha militar y civil va a reforzar las provocaciones de la "estrategia de tensión", estimulada por haber rozado la victoria el 23-F y por la casi total impunidad de que gozan los protagonistas de esa ocasión.

En fin, el gobierno se siente bastante cómodo dentro de los límites establecidos por los militares, pero está obligado a hacer a corto plazo la prueba práctica de su capacidad para resolver la crisis burguesa por métodos parlamentarios.

El nuevo presidente del gobierno, Calvo Sotelo, va a centrar sus esfuerzos en dos direcciones. La primera, establecer un marco de coexistencia con el Ejército; no se trata de **resolver** el problema del golpismo, sino de **convivir** con él. La segunda, explotar el miedo que se ha adueñado del país; poner en orden las filas de su propio partido y subordinar a los partidos nacionalistas burgueses; recuperar, en fin, la confianza de la patronal.

Como la izquierda reformista ha renunciado a toda actividad eficaz de oposición en el Parlamento y aún más en la calle, la derecha española no podía soñar con condiciones más favorables para su "golpe de timón".

La cuestión militar

El problema militar es la primera prioridad del nuevo gobierno UCD. Toda su línea en este terreno se basa en proclamar la "fidelidad del Ejército a la Constitución" y en actuar con el convencimiento de que esa "fidelidad" no existe en absoluto.

Parece que la burguesía ha descubierto a su Ejército el 23-F. Los revolucionarios habíamos hecho este "descubrimiento" hace ya muchos años. El Ejército español sólo tiene en su haber una victoria en los tiempos modernos: la guerra civil. Sobre ella, y por consiguiente sobre el franquismo, ha elaborado su sistema de valores, que comparten la práctica totalidad de los militares, sin distinción de grados, ni generaciones: el anticomunismo, el centralismo, una moral de la más reaccionaria tradición católica, la desconfianza hacia los "políticos" y, en general, hacia los regímenes parlamentarios, la conciencia de su propio papel como **único** defensor de los valores esenciales de la "patria" y de la "inevitabilidad histórica" de su intervención para defenderlos.

Los jefes militares que no comparten, parcialmente, estas ideas, son marginales. A uno de ellos, Gutiérrez Mellado, le correspondió la tarea de intentar la "reforma militar" que suponía, sobre todo, conseguir la aceptación de la reforma política por la jerarquía. El fracaso ha sido estrepitoso: las FAS han terminado homogeneizándose políticamente en contra de esta reforma, aunque todavía **no** sobre una alternativa de recambio. A partir del 23-F, se están creando condiciones para que esa alternativa tome forma y se consolide.

Porque, en realidad, el gran vencedor del



23-F, en términos de poder político, son las FAS: ellas son la única institución que sale fortalecida del golpe. Su fuerza reside en que se ha mostrado **capaz** de dar un golpe de Estado y que, con muy poca ambigüedad, se manifiesta **dispuesta** a hacerlo, si se traspasan los límites que ella misma ha fijado.

La mayoría de la burguesía quiere seguir gobernando por medios parlamentarios, pero no quiere entrar en conflicto con su Ejército. Su posición será pues, aceptar todas las exigencias de las FAS —lo que equivale a dar todas las facilidades al golpismo; lo que hemos llamado antes "institucionalizarlo"— y a la vez intentar que la jerarquía militar considere **innecesario** el "segundo golpe".

Por eso, en primer lugar, se abandona todo proyecto de "subordinación" militar al poder civil. En este terreno, se abandona hasta la esperanza: uno de los especialistas del PSOE en cuestiones militares ha escrito: *«No es exagerado afirmar que a nuestras FAS le costará 15 años defender la Constitución»* (9). El propio Ministro de la Defensa reconocerá a su manera la situación; preguntado por un periodista si los militares obedecían sus órdenes, respondió: *«Cuando doy una orden se obedece; claro que no se me ocurre dar una orden sin haberla estudiado previamente y sin consultar opiniones»* (10).

En segundo lugar, se organiza una gigantesca campaña de propaganda de exaltación del Ejército. En nombre del objetivo de "acercar el pueblo a las FAS", considerando la prioridad del momento por PSOE y PCE, estos partidos colaborarán activamente en ella. La campaña parte de una versión, que es también una cierta justificación, del golpe del 23-F. Dos tomas de posición, casi simultáneas, las de Manuel Fraga y Santiago Carrillo, permitirán comprender la eficacia de la "unión nacional" en este terreno: *«Los militares no se van a poner nerviosos por ninguna ley social, ni por problemas económicos. En estos temas ellos no se meten. Pero por lo que no pasan es por el terrorismo y el separatismo. Entonces, o se les da la oportunidad de defender a la Patria ahí donde les duele, o caerán otra vez en la tentación de avasallar al Parlamento»* (Fraga); *«Los militares no se han sublevado y no se van a sublevar porque haya huelgas (...) La solidaridad nacional debe basarse en la moderación del desarrollo autonómico y la guerra frontal al terrorismo»* (Carrillo) (11).

La política de "unidad nacional" tiene pues su propia versión sobre el golpismo: el Ejército es "neutral" en cuestiones sociales (y hay que decir desde ahora que ésta es una de las mentiras más siniestras, entre las muchas que vienen cayendo sobre el movimiento obrero); los "errores" en política autonómica y en la lucha contra ETA (porque éste es el significado real del "antiterrorismo") son la causa del golpe.

En fin, la política de "unión nacional" termina legitimando, o considerando "inevitable" lo que en la práctica viene a ser lo mismo, la nueva función política del Ejército, su derecho a intervenir en Euskadi y hasta las posibilidades legales de implantar una verdadera dictadura militar, que le ofrece la nueva legislación sobre el "estado de sitio".

Así, el PSOE y el PCE han dejado la cuestión militar en manos de la derecha parlamentaria. El problema es que el gobierno de esta derecha puede convivir, al menos por cierto tiempo, con el golpismo. Pactar con él. Puede, en fin, utilizarlo como arma de chantaje: así viene actuando el gobierno ante cada problema político y social.

La derecha puede hacer todo esto, pero la izquierda sólo puede capitular o combatir. La opción del PSOE y PCE está clara; está particularmente clara en el terreno de la lucha "antiterrorista" que vamos a ver a

(9) E. Gomáriz. "El Socialista" nº 196, 4.3.81. Por supuesto, el autor no explica por qué dice "15 años", y no 25, ó 150.

(10) "El País" 22.5.81

(11) Para las declaraciones de Fraga, "El País" 4.3.81. Para las de Carrillo, informe al CC del PCE, publicado en "Mundo Obrero" nº 115, 5.3.81.

continuación.

ETA como pretexto

Uno de los objetivos fundamentales del gobierno después del 23-F es fortalecer el aparato y la legislación represiva. Va a elegir para ello un método hábil: esperar a los atentados de ETA y presentar las medidas como reacciones necesarias hacia estos atentados. Nuevamente, esta "habilidad" va a estar extraordinariamente facilitada por la política reformista y, desde luego, por los errores desastrosos de ETA-militar.

Hay que recordar que, desde primeros de año, existía una crisis profunda en el aparato de represión. El movimiento de protesta popular que siguió al asesinato bajo tortura del militante vasco Joseba Arregi, que confirmaba dramáticamente el informe de "Amnesty International" sobre la generalización de la tortura policial en España, agravó la crisis. La protesta popular alcanzó tal nivel que incluso el PC de Euskadi propuso la abolición de la "Ley antiterrorista" y había posibilidades reales de lanzar una campaña de masas sobre este tema. En fin, se produjeron dimisiones y destituciones en la jefatura de la policía.

El primer objetivo de la "contra-reforma" en este terreno tenía que ser restablecer la moral y por tanto la impunidad del aparato de represión. A la vez, se va a crear una verdadera maquinaria de guerra legal contra las libertades, siempre bajo el pretexto "antiterrorista". En fin, se va a buscar, y en gran medida conseguir, comprometer a fondo en esta "cruzada" no sólo al PSOE y PCE, sino también al PNV.

Así, con el sector más reaccionario de la policía, se crea el "Mando Unico de Lucha Antiterrorista": su jefe lo era también de los asesinos de Arregi, el comisario Ballesteros. En puestos de responsabilidad reaparecen viejas figuras de los servicios especiales franquistas, como el comandante Casinello. En los mismos días, los asesinos de Arregi son puestos en libertad.

La represión va a ser protegida por toda una teoría de la necesidad de la "guerra sucia" contra ETA. Un periódico "liberal" como "Diario 16", la definirá en un editorial en términos precisos: «*No hay derechos humanos en juego a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa y, si hace falta, se le mata*» (12). El peor de los efectos de tal campaña es lo que podríamos llamar la indiferencia, la acomodación ante la tortura.

Todo el mundo sabe que en Euskadi ha habido centenares de detenidos desde el 23-F, la mayoría miembros de Herri Batasuna. Todos han sido torturados salvajemente, durante los diez días que la legislación "antiterrorista" les deja a merced de la policía. La militancia en ETA es lo de menos: entre otros muchos, nuestro camarada Karmelo Jaio, concejal de Markina (Vizcaya), ha sufrido la tortura "reglamentaria", estrictamente por nada más que ser un revolucionario y actuar como tal en su pueblo. Pasados los diez días, el juez le puso en libertad, sin ningún cargo.

Una situación como ésta hubiera provocado, antes del 23-F, por no hablar de épocas anteriores, un gran movimiento de solidaridad y protesta, ampliamente unitario. Ahora, sólo la izquierda revolucionaria lucha por organizar esta movilización.

La izquierda reformista se mueve entre el silencio y la protesta literaria y moderada, en el mejor de los casos; en el peor, y más corriente, marcha en vanguardia de la represión. El terreno preferido por el PSOE para la crítica al gobierno es la necesidad de mejorar material y técnicamente los efectivos de la policía, según el "modelo" de la República Federal Alemana. "Con el PSOE en el gobierno, la represión sería más eficaz", éste parece ser el slogan político del primer partido obrero del país.

Por su parte, Carrillo había fijado ya una línea clara en el primer CC del PCE posterior al golpe: «*Tenemos que esforzarnos porque los que caen bajo las balas dèl terrorismo sientan la solidaridad popular (...) Podemos vernos obligados a votar la ilegalidad de grupos políticos, sean de derecha o sean de otro tipo, que aparezcan como la faz legal de los grupos terroristas*» (13).

En fin, una reunión de las ejecutivas del PSOE y PCE el 1 de Abril, establece un marco claro de "unidad de acción": el comunicado que da cuenta del acuerdo, no dice una sola palabra sobre el "golpismo", pero reclama «*la colaboración del pueblo con las fuerzas de seguridad del Estado*» (14).

El 10 de Mayo, esta línea que pretende "defender la democracia" apoyando al aparato de represión heredado de una dictadura, va a ser puesta a prueba. En la provincia de Almería, la Guardia Civil detiene a tres jóvenes a los que una denuncia anónima (una «*colaboración del pueblo con las fuerzas de seguridad*») había relacionado, sin el menor fundamento, con ETA. Los guardias civiles, al mando directo del teniente coronel jefe del puesto, torturan salvajemente a los jóvenes, les rompen todos los huesos largos, los matan a tiros y finalmente queman sus cuerpos. Estos nostálgicos de los hornos crematorios, los autores de esta barbarie, no tienen nada de excepcional: son simplemente guardias civiles que luchan "contra el terrorismo", que "cazan el tigre", según la expresión de "Diario 16". Deben ser pues protegidos por sus jefes y por el gobierno.

Un mes después de los hechos, siguen en sus puestos, obstaculizando a placer la investigación y uno de ellos acaba de ser ascendido. Hubo, eso sí, naturalmente, un informe del Ministro del Interior al Parlamento, doce días después de los hechos. Todo había sido fruto de un "lamentable error", dijo.

La izquierda parlamentaria tenía una ocasión para demostrar, al menos, cierta dignidad. Lo que demostraron fue, justamente, lo contrario.

Sirva de muestra la intervención de Sánchez Montero, el nº. 2 del PCE, en nombre de su partido: tras manifestar la preocupación del PCE porque este suceso afecte a un cuerpo como la Guardia Civil «*que está*

(12) "Diario 16" 23.3.81.

(13) Por supuesto la referencia a los "grupos de derecha" es una pura cobertura formal. Carrillo sabe muy bien que el problema es Herri Batasuna y el periódico EGIN.

(14) "El Pais" 1.4.81.



pagando un enorme tributo de sangre en defensa de la democracia» (sic), añadió que estos hechos son contraproducentes para la lucha antiterrorista *«ya que pueden ser utilizados como explicación de la lucha de los terroristas»* (resic) (15).

Hay que repetir que las protestas, las mociones parlamentarias..., que suelen hacer los diputados del PSOE y el PCE ante casos como éste, no compensan en modo alguno el daño que causan contribuyendo a la realización de la campaña de intoxicación gubernamental, amparando las responsabilidades de la Guardia Civil, hasta convertirla poco menos que en una institución "mártir" al servicio de la democracia.

El PSOE y el PCE no se han opuesto realmente ni a una sola de las medidas de fortalecimiento de la represión y de ataque a las libertades realizadas por el gobierno. Si González y Carrillo fueran sinceros, deberían definir su actitud ante la represión, como León Blum definió la suya ante los créditos de guerra: *«Yo represento a un partido que durante años luchó contra los créditos de guerra, excepto cuando su voto era necesario para aprobarlos»*.

Gracias a ello, el gobierno ha conseguido superar sin gran resistencia los dos primeros tests que se había marcado en este terreno: el envío del Ejército a Euskadi y la aprobación de la nueva legislación represiva. Ahora prepara otros dos: la implantación del Estado de excepción y la ilegalización formal de Herri Batasuna y del periódico EGIN. Carrillo y González llevan tiempo preparando a sus partidos para una aceptación más o menos resignada de estas medidas. El gobierno sólo espera un nuevo atentado grave de ETA militar para ponerlas en práctica. **El pronóstico es muy claro:** si estas medidas se aplican, habrá empezado la cuenta atrás para el segundo golpe de Estado.

El golpe antiautonómico

Como hemos visto, la "integridad de la Patria" es, junto a la ofensiva "antiterrorista", la exigencia central del Ejército. También en este terreno, el "arco constitucional", con la excepción parcial de los partidos nacionalistas burgueses, pondrá todo su esfuerzo en ayudar al gobierno a satisfacer las exigencias militares. Las débiles conquistas autonómicas del periodo anterior se van a tambalear ante una ofensiva centralista, patriotera, cínicamente disfrazada de defensa de la "solidaridad entre los pueblos de España".

En este caso, el gobierno empieza la ofensiva por una demostración de fuerza: el anuncio de una ley que privilegia a la bandera monárquica frente a las de las nacionalidades (las "banderolas", como dice Carrillo), que "defiende los derechos del castellano" frente a las demás lenguas y que obliga a utilizar las palabras "nación", "nacional", etc., por referencia exclusiva a "España". A la vez se refuerza una campaña contra los movimientos nacionales, especialmente de Catalunya y Euskadi, que siempre ha estado por lo menos latente en las posiciones y medios de comunicación de la burguesía centralista. La novedad consiste ahora en la virulencia de la campaña, el espíritu policial que la caracteriza, a la búsqueda con lupa de signos "separatistas", y la aparición del "anticatalanismo" al mismo o superior nivel que el "antivasquismo" (16).

Tras esta primera ofensiva, aparece el armamento pesado. El gobierno encarga a un "técnico", el profesor García de Enterría, un informe sobre la "armonización de las autonomías". Sin duda por una feliz casualidad, el informe coincide exactamente con los proyectos de UCD (17). El PSOE apoyará inmediatamente el informe.

La tal "armonización" se completará con una Ley de Régimen local destinada a favorecer el aumento del número de alcaldes de la derecha, muy pequeño en la actualidad, y a establecer un control férreo de la administración central sobre los municipios y diputaciones provinciales, marginando al máximo posible a los gobiernos de las nacionalidades. En fin, una nueva ley electoral establecerá más mecanismos correctores en el actual sistema, relativamente proporcional, para disminuir la representación parlamentaria de los partidos nacionalistas burgueses y tratar de impedir la de los partidos revolucionarios.

Este giro en la política gubernamental respecto a la cuestión nacional tiene un significado y va a tener unos efectos políticos de enorme importancia. Significa una nueva prueba de la incapacidad de la burguesía española para encontrar una solución al problema nacional. El franquismo intentó aplastarlo por la violencia y, en cambio, resurgió más fuerte y más amplio que nunca y fue uno de los componentes fundamentales del movimiento de masas que acabó con la dictadura.



La "reforma" intentó, con muchos temores y vacilaciones, buscar una salida democrático-burguesa. Tuviera o no conciencia de ello, esta salida exigía una cierta distribución del poder político, un pacto con las burguesías nacionales para asegurar la dirección política del Estado y conseguir que las instituciones autonómicas fueran capaces de integrar las aspiraciones de autogobierno de los pueblos oprimidos. Este es el proyecto que se trató de vender con el nombre de "Estado de las autonomías". Y éste es el proyecto que ha fracasado.

Lo que el gobierno trata de hacer ahora, cualquiera que sea el nombre que le dé, es aplicar criterios de pura "reforma administrativa" a uno de los más graves problemas **políticos** del Estado español. Además, trata de hacerlo con los métodos de la "contrarreforma", es decir, arrebatando derechos que se consideraban adquiridos, por medio de amenazas, leyes reaccionarias, campañas chovinistas. No hay duda que esta política va a fracasar también, pero es fácil imaginarse las consecuencias dramáticas que puede tener este fracaso, cuando las organizaciones obreras mayoritarias están directamente comprometidas en la ofensiva centralista.

Porque durante este tiempo, se ha demostrado también la incapacidad del reformismo para dar una respuesta obrera a la cuestión nacional.

La historia viene de lejos en el caso del PSOE. Este partido parece haber aprendido todo lo que sabe sobre la cuestión nacional en la peor tradición de la II Internacional. Para el PSOE, ahora como en los años 30, Euskadi, Catalunya o Galicia deben pertenecer a la categoría de los "pueblos sin historia", para los que es "reaccionario" defender el derecho a la autodeterminación. Después del 23-F, el PSOE ha llevado esta tradición hasta sus últimas consecuencias.

---

(15) "El Pais" 22.5.81.

(16) Debe tenerse en cuenta que la expresión ideológica tradicional del centralismo español es el "anticatalanismo". Esto es una demostración complementaria de que la lucha contra el "separatismo" es solamente una excusa del centralismo: en Catalunya las tradiciones, y la realidad actual, del independentismo son débiles. La virulencia actual de la campaña anticatalana es enorme. Dos ejemplos: el gobierno ha planteado recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por un modesto decreto de la Generalitat, reformando el régimen de diputaciones provinciales. Por otra parte, se ha dado difusión muy amplia a un llamado "Manifiesto de los 2300", cuyos primeros firmantes son intelectuales más o menos conocidos, que denuncia la pretendida existencia de una "opresión" contra los castellanoparlantes en Catalunya.

(17) El informe Enterría no tiene como objetivo fundamental "armonizar" nada, sino limitar drásticamente las competencias políticas de las instituciones autonómicas, especialmente las de Euskadi y Catalunya. Entre otras cosas, niega toda autonomía en el terreno judicial, potencia la presencia de funcionarios de la administración central en los gobiernos autónomos, rechaza cualquier competencia exclusiva de las nacionalidades (pese a que están admitidas en la Constitución), potencia las diputaciones provinciales frente a las instituciones autonómicas, etc.



En primera fila en la competición patriotera (*«No he encontrado a nadie más patriota que yo»*, declaraba F. González poco después del 23-F (18)), co-autor del proyecto de "armonización" de las autonomías, dirigente de la lucha de la derecha contra la integración de Navarra en Euskadi..., el PSOE es el principal aliado de UCD en el "golpe anti-autonómico".

El PCE desearía encontrar un hueco en el "Estado Mayor" centralista UCD-PSOE. Pero no le dejan, a pesar de que, desde el 23-F, Carrillo ha representado su papel favorito: el arribista que hace méritos para mostrar su fidelidad ante los dueños del país. Por poner un ejemplo, bastantes mítines del PCE están presididos por la bandera monárquica y terminan con el grito de "¡Viva España!".

Pero en la escala jerárquica de lo que ahora se llama "concertación" (porque la palabra "consenso", después de dos años de uso, ha sido retirada porque ya no engaña a nadie), al PCE sólo se le escucha **después** de que UCD y PSOE se han puesto de acuerdo en lo fundamental. Por tanto, en contra de su voluntad, el PCE aparece menos directamente comprometido con el gobierno. Entonces trata de utilizar este pequeño margen de maniobra para mantener cierta actitud de "oposición", útil para su crisis interna.

En estas condiciones puede comprenderse la hegemonía del nacionalismo burgués en Catalunya y Euskadi. Una hegemonía reforzada, a pesar del apoyo que PNV y CiU han dado al gobierno durante el periodo de la reforma en todas las cuestiones llamadas de "modelo de sociedad" (19), es decir, cada vez que estaban en cuestión los intereses de la burguesía en su conjunto. Una hegemonía mantenida, a pesar de que las reacciones de cobardía ante el golpe del 23-F de las organizaciones nacionalistas burguesas, han estado a la "altura" de las del PSOE y PCE. Porque PNV y CiU quieren integrarse y colaborar en la contrarreforma, aún aceptando nuevos recortes en las autonomías. Pero el gobierno exige prácticamente una "rendición sin condiciones".

Y cuando empezaron a conocerse los efectos prácticos de la nueva ofensiva centralista, PNV y CiU, buscando únicamente defender las parcelas de poder político que creían conquistadas, van a aparecer dirigiendo la resistencia al "golpe autonómico", utilizando esta situación para fortalecer su autoridad y su base social en los pueblos de Euskadi y Catalunya.

Así, el chovinismo de las direcciones obreras reformistas alimenta el nacionalismo burgués. La división en las filas obreras que provocan PSOE y PCE es utilizado y ampliado por PNV y CiU. El movimiento obrero y los movimientos de lucha contra la opresión nacional, que sólo pueden triunfar **juntos**, unidos en un pacto de lucha contra el capitalismo y el centralismo, están hoy más divididos y enfrentados que nunca.

El nacionalismo revolucionario vasco representó en cierto modo, durante el periodo de la reforma, la posibilidad de superar en la práctica esa contradición, de dar nacimiento a una corriente de masas con una alternativa obrera revolucionaria ante la cuestión nacional. También el 23-F ha hecho entrar en crisis esta posibilidad.

Euskadi Eskerra marcha definitivamente por el camino de constituir el "PSUC de Euskadi": puede recorrerlo con éxito, porque el espacio de "ala izquierda del bloque autonómico" es amplio y está vacío en Euskadi. Herri Batasuna puede seguir capitalizando solidaridad en un pueblo que, **afortunadamente**, sigue mostrándose capaz de defender de la represión a sus presos y saludar la memoria de sus muertos, comparta o no sus ideas. Puede mantener también una base electoral importante, recoger el "voto de la desesperación" de muchos miles de personas en Euskadi. Pero, desde el punto de vista político, Herri Batasuna y ETA-militar están en bancarrota. La idea absurda de que en el Estado español sigue existiendo una dictadura; la conclusión coherente de que el golpe del 23-F fue un "autogolpe", una simple maniobra política interna a dicha "dictadura", les ha conducido al desprecio más absoluto por lo que los trabajadores y los pueblos del Estado español, incluyendo la mayoría del pueblo vasco, consideran justamente como la tarea central de la situación, es decir, la defensa de las libertades frente al golpismo. Cada nuevo atentado de ETA-militar es un paso más en una huída hacia adelante sectaria, desesperada, y útil únicamente para quienes intoxican a los trabajadores con la idea de "ETA, principal enemigo de la democracia", o para quienes quieren recuperar para el nacionalismo burgués al sector más combativo del pueblo vasco (20).

En definitiva, el proyecto de "Estado de las autonomías" no ha fracasado porque un poderoso movimiento de masas, superadas las ilusiones en las autonomías, luchara abiertamente por la autodeterminación. Ha sido la burguesía centralista la que ha hecho naufragar su propio barco.

El negocio del 23-F

Era de esperar que el "golpe de timón" a la derecha de la situación política española tuviera una traducción en el terreno económico-social: la patronal debía aprovechar la

(18) "Diario 16" 17.3.81.

(19) La única excepción importante, en realidad muy importante, fue la abstención del PNV en la votación sobre la Constitución. Esta posición hizo posible un rechazo mayoritario al proyecto constitucional en Euskadi, que ha tenido una influencia considerable no sólo en la situación de la nacionalidad, sino también en la crisis de la dirección burguesa en su conjunto.

(20) En un artículo publicado en "Zutik!", el dirigente de nuestro partido LKI José Iriarte resume así la contradicción central de la política actual de ETA-m: «La orientación de la actividad de ETA-m ha estado apoyada en el siguiente análisis: la burguesía centralista está firmemente montada en el camino de la Reforma, sin posible vuelta atrás. Euskadi tiene tal nivel de contradicciones que hacen inviable la aplicación de esa Reforma de manera estable. La actividad militar crea en este marco tal estado de tensión, que la burguesía centralista no va a tener a medio plazo otra solución que negociar la "alternativa KAS". En consecuencia la lucha armada es la que mejor favorece la ruptura del marco de la reforma política y la conquista de la soberanía nacional, la retirada de la policía (...)». Tras analizar el análisis falso de ETA sobre el golpe del 23-F añade: «Puesto que reconocer que su actividad no se corresponde ni al nivel de organización, ni a las formas de lucha del movimiento, ni tampoco al conjunto de la situación política, supondría negarse a sí misma, ETA-m pone sus necesidades propias por encima de cualquier necesidad de organización del movimiento (...). Esta actividad de ETA crea dificultades crecientes para que estos hechos (la represión en Euskadi, especialmente contra el nacionalismo revolucionario) encuentren en el pueblo Vasco —por no hablar ya de otros pueblos— una solidaridad efectiva».

situación para hacer un buen negocio y para asegurarse un periodo de paz social. Ambas cosas eran además muy necesarias para la burguesía en este año 1981.

Porque 1980 había sido quizás el peor año de la crisis para el capitalismo español y mucho más para los trabajadores. A pesar de ser un excelente año agrícola (que con seguridad no se repetirá en el 81), el PIB creció solamente el 1% (1,5% en el 79) y el crecimiento fue negativo en el sector industrial y en servicios; las exportaciones crecieron un 1% (8% en el 79 y 10% como media en el periodo 76-78); el déficit de la balanza de pagos fue próximo a 5.000 millones de dólares (frente a un superávit de unos 1.000 millones de dólares en el 79); la inflación fue del 15,5% (equivalente a la del 79); se perdieron 442.000 puestos de trabajo (270.000 en el 79); más de 400.000 trabajadores se vieron afectados por expedientes de crisis (casi un 50% más que en el 79). A pesar de todo ello, había razones fundadas para el optimismo en la patronal: los salarios habían crecido como media un 13,5%; la productividad había aumentado un 4,5% (3,1% en el 79); el método de pacto social entre patronal y sindicatos inaugurado por el AMI (Acuerdo Marco Interconfederal) firmado entre CEOE y UGT se había consolidado; se había conseguido avanzar en la legislación laboral, gracias especialmente a la muy reaccionaria Ley Básica de Empleo; UGT había experimentado un gran salto adelante en las elecciones sindicales; en fin, 1980 había alcanzado el más bajo nivel de huelgas de los últimos 15 años (21).

La burguesía necesitaba un nuevo paso adelante, que se puede resumir en cuatro objetivos.

El primero, garantizar el cumplimiento del programa nuclear, comprometido por una fuerte resistencia popular, simbolizada en las luchas contra la construcción de la central de Lemóniz (Euskadi). La primera fase de este programa supone el funcionamiento de 7 centrales, que asegurarían un cuarto de la producción de energía eléctrica del país (6.555 MW); la segunda fase supone la instalación de otras 8 centrales; la inversión de conjunto supera 1 billón de pesetas, financiada en mas del 80% con créditos exteriores no renovables. La realización completa de este plan es decisiva para el capital financiero, que controla todo el programa nuclear.

El segundo, buscar una solución de compromiso para los sectores en crisis, en los que está comprometido el núcleo del capital industrial español. Ciertamente, mantener en vida estos sectores es una carga que el gran capital se considera imprescindible a corto plazo, con el fin de mantener su cohesión interna en momentos tan críticos como los actuales. Pero, a largo plazo, la carga de estos sectores (construcción naval, siderurgia, automóvil, electrodomésticos, textil...) se sigue considerando insostenible: unos deben desaparecer, otros ser reconvertidos drásticamente. La ley gubernamental llamada de ''reindustrialización'', que reglamenta la ayuda financiera pública a los sectores en crisis, a cambio de planes de ''racionalización'' (sobre todo, de reducción de plantillas), es una medida **táctica** que, como tal, ha sido apoyada, con más o menos entusiasmo, por el conjunto de la patronal, pero cuyos efectos son sólo de **aplazamiento**, no de **resolución** de los problemas del aparato productivo español.

El tercero, son las medidas tradicionales de reducción del gasto público y toda la conocida demagogia ''neo-liberal'', manejada con un cinismo particular en el Estado español (los poemas a la ''economía de mercado'' se acompañan de reivindicar el traspaso al Estado de una parte considerable de la aportación patronal a la financiación de la Seguridad Social, de exigencias de crédito barato, de financiación de empresas en crisis, etc.).

En fin, **el cuarto** y fundamental, un nuevo pacto social, en el cual por primera vez, los sindicatos aceptaran de entrada subidas salariales por debajo de la inflación prevista.

Uno tras otro, estos cuatro objetivos han ido cumpliéndose, o el gobierno se ha comprometido formalmente a cumplirlos (en el caso del programa nuclear). Es ejemplar que coincidieran los ''cien días'' del gobierno Calvo Sotelo con la firma del pacto social (Acuerdo Nacional de Empleo, ANE). El ministro de Economía, García Díez, en pleno delirio de optimismo capitalista tras la firma del pacto, anunció: *«Empezamos a salir de la crisis»*. En el terreno económico, ni el propio ministro se cree lo que dice. Pero en el terreno político, se trata de una gran victoria del gobierno y, en particular, de su presidente Calvo Sotelo, el cual no solamente ha conseguido los resultados óptimos que podía esperar la burguesía en las circunstancias actuales, sino que además ha desarmado completamente la ''alternativa económica'' del PSOE.

Efectivamente, en vísperas de la firma del pacto social, el PSOE presentaba su nueva versión de la ''respuesta socialista a la crisis''. Para hacerse una idea del ''socialismo'' de tal respuesta, basta considerar que el PSOE proponía que los salarios de los funcionarios crecieran ¡¡un punto menos!! (8%) que lo establecido finalmente en el ANE; proponía igualmente un déficit público (5%) inferior también al decidido por el actual gobierno; las nacionalizaciones proyectadas se limitan a la red de distribución de energía eléctrica, etc. Al presentar a la prensa semejante engendro, F. González declaró: *«Yo no creo en las nacionalizaciones (...) No seré yo quien adore el becerro de oro de la economía de mercado, pero no hay otro sistema más eficaz que él»* (22). Sin duda para mejorar ''la eficacia del sistema'', el secretario general del primer partido obrero del país, ha renunciado hasta a la más misera posición reformadora ante la crisis.

La línea económica del PCE se mueve más o menos por los mismos terrenos, bajo la bandera de la ''solidaridad nacional'' frente a la crisis. *«Una gran victoria para los trabajadores»*, dijo entusiasmado Marcelino Camacho tras la firma del pacto social. Debería haber dicho «otra gran victoria», porque Camacho es un especialista en cantar ''victorias'' de este tipo, desde el Pacto de la Moncloa: victorias de 1.400 parados más cada día, de pérdidas de 5 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios...

Por segunda vez en tres años, las direcciones reformistas pretenden comprar libertades entregando explotación como moneda de cambio. Pero también en este terreno funciona la inflación: cada vez se paga con más explotación, para recibir menos libertades.

Y cada vez hay que engañar más descaradamente a los trabajadores. ¿Recuerdan los lectores esas afirmaciones de Carrillo, a dúo con Fraga, diciendo que *«Los militares no se sublevan por las huelgas»*? Pues ahora la primera justificación que se da para la firma del pacto social es la *«estabilidad política», «evitar los riesgos de involución», «defender la democracia»*, etc. (23). De alguna manera, se reconoce la evidencia: que el golpismo ha sido el invitado ''invisible'' en las discusiones del pacto social, que la firma del pacto ha sido asegurada por una guardia pretoriana, a la cual no dudaba en invocar el presidente de la patronal vasca Luis Olarra el pasado 24 de Abril, cuando decía: *«O somos capaces de hacer un pacto social, o al final alguién tendrá que imponerlo»* (24).

Esta vez ese ''alguién'' se ha quedado en los cuarteles. Ha cumplido así su verdadera ''misión constitucional'', como instrumento de chantaje político y **económico** contra los trabajadores. Pero la patronal volverá a hacer invocaciones como ésta, cada vez que tenga dificultades graves para realizar su política de austeridad.

La burguesía: entre la vía parlamentaria y la vía golpista

Hemos visto en las páginas anteriores, la crónica de este periodo en los sectores más importantes de la situación política. En todos ellos, con la excepción, por el momento, de la cuestión nacional, el gobierno

(21) Los datos están tomados de la revista política de la LCR ''Comunismo'' nº 3, ''El propósito de enmienda de UCD'', de J. Albarracín y P. Montes, y de los análisis de coyuntura económica de L. Hita que publica regularmente COMBATE.

(22) Artículos de L. Hita en COMBATE nº 234 y 236.

(23) ''Mundo Obrero'' nº 129 12.6.81.

(24) ''Hoja del Lunes de Barcelona'' 20.4.81.

ha conseguido victorias tácticas muy importantes. Se ha hecho así una prueba de la utilidad para la burguesía de la "vía parlamentaria", una vez sometida al tratamiento de la contrarreforma.

Además, la victoria electoral de la izquierda en Francia ha creado unas condiciones internacionales más difíciles para un nuevo golpe en el Estado español. La burguesía lo ha comprendido así y es significativo que una de las primeras felicitaciones que recibió Mitterrand fuera la del Rey de España.

Entonces, ¿debemos concluir que ha pasado ya la amenaza golpista, que sólo es ahora un instrumento de chantaje contra los trabajadores?.

Sería "razonable" responder SI. Pero los juicios "razonables" no sirven demasiado en un país en el que la mayoría de la jerarquía militar ha conspirado contra un gobierno de derechas, en el año de más baja conflictividad social desde 1965. En un país, en fin, que ha producido una docena de Pinochet, antes de que aparezca ningún Allende.



El golpismo actual en el Estado español no actúa a la manera clásica, porque los intereses fundamentales de la burguesía están amenazados, sino según criterios relativamente autónomos de esos intereses, basados en la naturaleza misma del régimen y de sus FAS. La experiencia ha demostrado que no se puede juzgar la situación política española desde el punto de vista de los problemas de **gobierno**, dejando en segundo plano los problemas de **régimen**, como tampoco se debe centrar la atención en los avances tácticos de la burguesía, olvidando los problemas de fondo, estratégicos, que siguen pendientes.

En este periodo, la burguesía ha conseguido avanzar, de una manera **contradictoria** y **frágil**, en el terreno de su dirección política. El avance es contradictorio, porque el aumento de la autoridad del presidente del gobierno Calvo Sotelo no ha compensado los problemas provocados por la pérdida de autoridad del Rey. Y es frágil porque Calvo Sotelo ha dispuesto de un cierto "estado de gracia" —retomando la fórmula de Mitterrand— que no se puede prolongar indefinidamente, y en ciertos aspectos ha terminado ya.

Efectivamente, pasados los primeros momentos de "euforia monárquica" después del 23-F, es evidente hoy que el Rey ha perdido autoridad, porque ha perdido poder; más precisamente, porque ha desaparecido el espejismo que lo presentaba como el jefe efectivo de las FAS. En momentos de crisis como los actuales, la burguesía española busca un "Bonaparte", un "De Gaulle" se suele decir, y la analogía es, por una vez, clarificadora: alguien capaz de reorganizar profundamente las instituciones, los partidos y el Ejército burgués. El Rey es incapaz de hacer esta tarea. Ni siquiera funciona ya como punto de equilibrio entre las FAS y las instituciones parlamentarias.

En fin, sólo es parcialmente verdad que constituya un obstáculo para otro golpe de Estado: si el golpe estuviera protagonizado por los fascistas, entonces sí, sería claramente un "golpe contra el Rey", pero las posibilidades de éxito de una acción de este tipo son prácticamente nulas; ahora bien, si el nuevo "pronunciamiento" está protagonizado por la mayoría de la jerarquía militar, y ésta es **la verdadera amenaza** que pesa sobre los trabajadores, entonces el Rey sería no su enemigo, sino su aliado, más o menos voluntario. La función fundamental que ahora desempeña el Rey, con bastante éxito, es ser el cebo que mantiene al movimiento obrero paralizado, confiando en él y en el régimen que representa, como defensor de las libertades fundamentales.

A Calvo Sotelo le ha tocado representar el papel de jefe político de la burguesía y lo ha hecho, hasta el momento, con cierta habilidad. Este político ultraconservador, cuyos modelos confesados son Reagan y Thatcher, ha comprendido que su fuerza consiste en ser suficientemente reaccionario como para ganar confianza en la patronal y el Ejército y en aparecer, a la vez ante el país, como el político "más democrático" tolerable por las FAS. Ha comprendido también que, a corto plazo, tenía que actuar al margen no sólo del Parlamento, sino también de su propio partido, desgarrado por enfrentamientos de camarillas. Su método de trabajo ha sido una negociación escalonada, en la cual el primer nivel es asegurar la entrada inmediata en la OTAN, para mejorar la capacidad de intervención del mando político-militar imperialista sobre la situación española, y en particular, sobre las FAS. El segundo nivel es establecer relaciones directas de compromiso y consulta con el Ejército, la Banca y en general, la patronal. Las decisiones establecidas aquí, pasan a un tercer nivel, la "concertación" con el PSOE, sobre aquellos temas en que le interesa al gobierno practicar la línea de "unidad nacional", en especial, la nueva política autonómica. El cuarto nivel está ya a ras del suelo y en él entran en escena el resto del "arco parlamentario" y el Parlamento mismo.

Este método ha sido eficaz para establecer el **marco general** de leyes, pactos, etc., de la contrarreforma. Pero la eficacia sólo ha funcionado sobre la base de la **inexistencia** de oposición política y social y **únicamente** en el terreno de las normas generales. Es ejemplar que cuando ha existido alguna oposición significativa y se ha entrado en el terreno de las medidas concretas (es decir, en la nueva política autonómica) el gobierno ha recuperado su verdadera imagen de debilidad. En el futuro, esta debe ser la norma: el porvenir de Calvo Sotelo está comprometido incluso en los temas en que ha obtenido por ahora éxitos tácticos.

Este es el caso, por ejemplo, de la legislación represiva y centralista. El gobierno ha conseguido fácilmente promulgar las leyes. Pero el problema real va a ser aplicarlas: ilegalizar una organización revolucionaria; cerrar una publicación y su imprenta con ayuda de la ley de "Defensa de la Democracia"; implantar un estado de excepción;

obligar a la Generalitat de Catalunya y al gobierno vasco a no utilizar el término nación mas que para referirse a España, con todas las consecuencias políticas que se deducen de ello; decidir la ampliación de la intervención militar en Euskadi, etc. El Ejército no se va a contentar con leyes; va a exigir su aplicación a la primera oportunidad que se presente. Y la reacción popular, e incluso la de la izquierda reformista, ante las pruebas prácticas más duras de la contrarreforma, será diferente a la que hemos conocido en este periodo.

El mismo razonamiento puede aplicarse al pacto social. Su sola firma ha despertado ya reacciones significativas en el movimiento obrero (25). Pero aún estamos en la época de los discursos. A partir de ahora, empezará la de los hechos: la continuación del aumento del paro, las promesas nuevamente incumplidas, los ataques en profundidad a los sectores en crisis, la miseria sin esperanza de los jornaleros andaluces, a quienes se ha tenido el descaro de decir que el pacto social iba a mejorar su dramática situación, etc.

También, la audacia creciente de la "estrategia de tensión" de los fascistas, que todavia recibirá un nuevo impulso cuando se aproximen los juicios a los responsables del 23-F, obliga ya al gobierno a salir aunque sea tímidamente de la completa pasividad y tolerancia actual. Pero los fascistas no son un grupúsculo marginal; cualquier medida de alguna entidad contra ellos, provocará reacciones de complicidad, en especial en el Ejército, que comprometerán la "convivencia" del gobierno y la jerarquía militar.

En fin, Calvo Sotelo no podrá continuar al margen de la gravísima crisis de su propio partido. Fraga acostumbra a decir que *«UCD tiene dentro a todo el parlamento de la República Federal Alemana»*. El chiste da una idea del tipo de "partido-escoba" que la burguesia española ha debido inventar para mantener el poder en régimen parlamentario. Al principio, el solo ejercicio del poder mantuvo la cohesión del partido; después, este mismo ejercicio fortaleció a las distintas camarillas, que iniciaron la lucha por la hegemonia interna. Al entrar en una fase aguda la crisis de dirección burguesa, las camarillas pasaron a la guerra abierta: ésta es la situación actual.

Aparentemente, el centro del debate es el tipo de alianzas que debe establecer el partido: la "gran derecha" (coalición con Fraga, eliminando al sector llamado "socialdemócrata"), o la coalición con el PSOE (que sólo cuenta con defensores muy minoritarios dentro de UCD y fue calificada por el presidente de la patronal como "un grave atentado al país", nada menos).

Pero no creemos que sea éste el debate de fondo, ni las alternativas centrales que maneja la burguesía para hacer frente a su crisis de dirección.

La última encuesta Gallup sobre intenciones de voto da a UCD el 23,6%, a Fraga el 8,9%, al PCE el 7,9% y al PSOE el 42% (26). Por grande que sea la distancia entre las "intenciones" y lo que ocurriría en unas elecciones reales, y probablemente sería muy grande, está claro que la burguesía corre, hoy más que nunca, el riesgo de una derrota electoral.

En cualquier país de la Europa capitalista, esta posibilidad de una mayoría electoral de izquierdas provocaría un serio sobresalto en la burguesía, aunque quedaran aún 2 años para las elecciones y aunque la izquierda tuviera a su frente una política tan derechista como la del PSOE. Pero en el Estado español, lo que esto provoca es un drama.

Todos los avances realizados por la burguesía en su organización política en régimen parlamentario aparecen amenazados: UCD no resistiría la prueba de una derrota electoral y no existe, por el momento, solución de recambio. El gran capital no tiene aún confianza en el PSOE como dirigente el gobierno: máxime cuando la reestructuración del aparato productivo, que será totalmente inaplazable en el 83, supone un 23% de paro (27) y afrontar las graves contradicciones internas de la desaparición de sectores industriales enteros. En fin, y sobre todo, el aparato de Estado, y en especial el Ejército, siguen considerando al PSOE como un cuerpo extraño que amenaza, a pesar de sus demostraciones de "buena voluntad", la continuidad que en este terreno ha establecido la reforma.

En estas condiciones, el verdadero debate de fondo dentro de la burguesía es qué operación quirúrgica debe sufrir la propia UCD, para **garantizar** una mayoría electoral de la burguesía centralista: los problemas de coaliciones, alianzas, etc., se plantearían en todo caso, después.

Y junto a este debate, se desarrolla otro de aún mayor importancia: qué hacer si no existen **garantías** de que la operación tenga éxito. En esta posibilidad, hay sin duda sectores burgueses que **aceptan el riesgo de una victoria electoral del PSOE**, con la intención de utilizarla o, y esta es sin duda la posición predominante, asfixiarla en el plazo más breve posible. Pero hay también sectores muy poderosos, probablemente mucho más que los anteriores, para los cuales la alternativa en este caso es la que viene formulando Fraga: **un gobierno de emergencia con plenos poderes durante un año**, es decir, la cobertura civil de un golpe militar.

No puede hoy hacerse un pronóstico sobre la opción que terminará imponiéndose, porque todo va a depender de la actitud del movimiento obrero. Si éste se encuentra débil, las dos variantes del proyectos burgués —la "operación quirúrgica" en hospital civil, como pretende Calvo Sotelo, o en hospital militar, como pretende Fraga— se reforzarán. Un movimiento obrero fuerte, puede dar la victoria en unas elecciones al PSOE y, antes que eso, asegurar la celebración de unas elecciones que la burguesía pueda perder. Hará falta una fuerza y una claridad política aún mucho más grande para hacer frente a las operaciones de boicot que empezarían nada más conocerse el dato de esta victoria.

En conclusión, el apoyo actual de la mayoría de la burguesía a la "vía parlamentaria" tiene un carácter **táctico** y va a ser puesto a prueba en los próximos meses. En ningun caso, la burguesía descarta la "vía golpista". Las dos existen hoy, no en lucha abierta por el poder, sino conviviendo, influyéndose, utilizándose mutuamente para tratar de reforzarse. Esta situación no puede prolongarse indefinidamente: a medio plazo, estas dos vías son incompatibles.

En Mayo del 80 escribíamos en estas mismas páginas: «Este régimen sólo puede ser gobernado por la derecha» (28). Ahora añadimos: este régimen está enfermo de golpismo y es una enfermedad incurable. Atravesará fases más leves y más agudas, no podemos prever cuánto tiempo vivirá aún el enfermo, pero no sanará.

En las luchas defensivas actuales, el objetivo debe ser que el movimiento obrero comprenda este problema y consiga la fuerza para resolverlo.

El movimiento obrero, entre el miedo y la esperanza

La situación del movimiento obrero, después de este período, demuestra que será una tarea muy difícil alcanzar ese objetivo, sobre todo porque no hay mucho tiempo para hacerlo. No se trata de lanzar un "ultimátum" sobre nosotros mismos, sino de comprender la gravedad de los problemas presentes. Esta es la primera condición para resolverlos. Porque pueden ser resueltos.

Es verdad que el 23-F fue una "carga de profundidad" contra el desencanto. Apenas existe ya ese cansancio, esa indiferencia o desprecio por "la política" que caracterizaba a la mayoría del movimiento

(25) En la dirección de UGT el pacto se aprobó con 87 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones. En la dirección confederal de CC.OO., la votación fue 112 a favor, 24 en contra y 5 abstenciones. Pero en CC.OO., el rechazo al pacto tuvo otras manifestaciones importantes: la Conferencia Nacional de las CC.OO. de Catalunya (CONC), rechazó el pacto por 228 votos, contra 55 y 28 abstenciones (posteriormente, según una táctica de la dirección de las CONC que empieza a ser ya una costumbre, el rechazo se ha convertido en una especie de "apoyo crítico"); el Consejo de Euskadi aprobó el pacto por 26 votos contra 11 y 5 abstenciones; la Ejecutiva de Guipuzkoa se pronunció contra, etc. En cuanto a las posiciones de otros sindicatos, tanto ELA-STV (central mayoritaria en Euskadi), como LAB (sindicato próximo a Herri Batasuna) y la CNT, han rechazado el pacto. Debe tenerse en cuenta que, en consecuencia, la mayoría del movimiento obrero organizado de Euskadi, se ha manifestado **contra** el pacto social.

(26) Encuesta realizada entre los meses de Marzo y Abril. "Diario 16" 27.5.81.

(27) "Le Monde Diplomatique". Abril 81. "L'Espagne sous surveillance", pág. 18.

obrero, en la época anterior. Lo que existe ahora es más bien una nueva politización, pero que todavía es solamente un cambio de "estado de ánimo", sin reflejos importantes en la actividad de las masas.

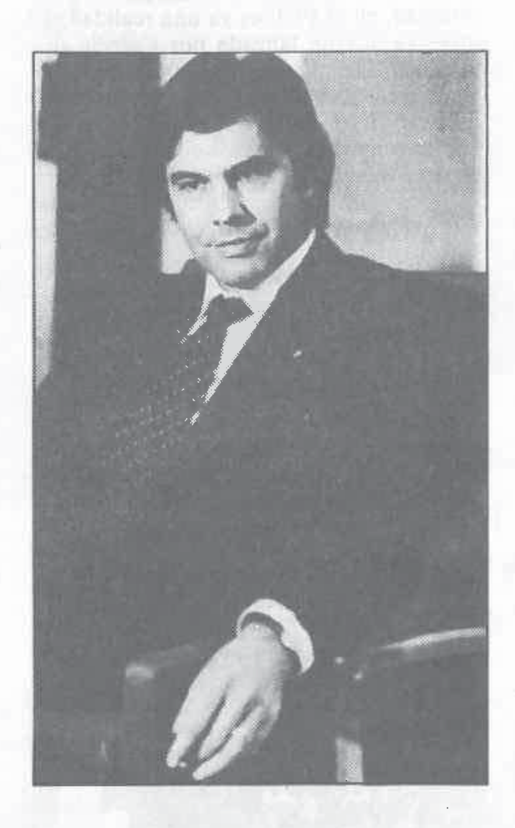
La crónica de las luchas desde el 23-F, con algunas honrosas excepciones, ocuparía muy poco espacio y no sería alentadora. En particular, jornadas como el 1° de Mayo, el Aberri Eguna de Euskadi, el Sant Jordi de Catalunya, el 8 de Marzo..., han registrado los más bajos niveles de movilización del postfranquismo. Con seguridad, el primer semestre del 81 batirá, a la baja, el récord mínimo de huelgas establecido en el 80.

Tampoco se ha relanzado la afiliación a partidos o sindicatos, aunque en general se ha cortado la sangría de militantes que la izquierda venía sufriendo desde el 79.

Pero sería un error concluir simplemente que continúa, o se ha agravado, el retroceso del movimiento obrero. Creemos que la verdadera interpretación de esta situación, es que **el 23-F ha cambiado totalmente el eje de la situación política** y estamos aún en una fase de adaptación a las nuevas condiciones. Una fase que será compleja y prolongada por varias razones: porque partimos de un retroceso realmente muy profundo, porque lo que está en juego es muy importante y, sobre todo, porque la política del PSOE y el PCE, esos agentes del miedo dentro de los trabajadores, está opuesta por el vértice a la que el movimiento obrero necesita.

El primero, y fundamental, de los cambios que se han producido en el movimiento obrero es la apertura de una brecha en el "bloqueo político" de los dos últimos años. El objetivo de "¡Alto al golpismo!", a pesar de su carácter puramente defensivo, tiene capacidad para centralizar la movilización a escala de Estado y vuelve a situar en primer plano de la escena política al movimiento obrero, que aparece netamente como el protagonista necesario de esta lucha decisiva. Esta situación es comprendida por los sectores muy amplios de trabajadores, que despiertan del desencanto. Así, la anterior dinámica centrífuga de las luchas, que se desarrollaban fundamentalmente en nacionalidades y regiones, sin relación entre si y sin apenas plantearse tareas de conjunto, **tiende** a debilitarse.

Pero **un segundo cambio** entra en contradicción, a corto plazo, con los efectos positivos del anterior. Inevitablemente, el aumento de protagonismo político del movimiento obrero, refuerza el peso de sus direcciones mayoritarias, especialmente la socialista, en el terreno político y sindical. En efecto, el PSOE aparece como la "alternativa viable" al gobierno de la derecha, especialmente ante la gravísima crisis del PCE y más aún tras la victoria de Mitterrand en Francia. El PCE se alineará al 100% en todas las cuestiones básicas con el PSOE. La gran mayoría del movimiento obrero, todavía muy poco activa y sin capacidad de presionar sobre sus direcciones, va a ser arrastrada con facilidad tras la línea reformista sobre el golpismo. Pero en condiciones de contrarreforma, el PSOE y el PCE se hacen "contrarreformistas". Su función política es lograr que la mayoría de los trabajadores apoyen la política del gobierno, o se resignen ante ella, evitar a cualquier precio, sobre todo al precio de la división, que el movimiento obrero levante su propia alternativa frente al golpismo, que sería necesariamente también, una alternativa contra el gobierno de la derecha.



Esta es la principal contradicción de la situación actual, que es imprescindible comprender y dominar en la práctica para poder realizar un trabajo revolucionario eficaz: **el movimiento obrero está hegemonizado por una línea reaccionaria frente al golpismo, pero está empezando a despertar.**

El tercer cambio se ha producido en la cuestión nacional, como un efecto especialmente grave de la contradicción anterior. La nueva política autonómica del gobierno, apoyada incondicionalmente por el PSOE, ha puesto en cuestión la vía de "desarrollo de los estatutos", de "conquistas parciales a través de las instituciones autonómicas" que dominaba el período anterior. A la vez, el aventurerismo y la irresponsabilidad de ETA-militar ante la amenaza golpista, ha llevado a un callejón sin salida a Herri Batasuna. Por grande que sea la solidaridad del pueblo vasco con ETA-militar frente a la represión, por profundas que sean las raíces del independentismo en Euskadi, las acciones etarras aparecen, en especial para el movimiento obrero, al margen o en contra de la tarea decisiva de defensa de las libertades.

La resistencia al nuevo ataque centralista está siendo hegemonizada por el nacionalismo burgués, en nombre de la defensa de los estatutos e instituciones autonómicas. Y el PSOE, que aparece a escala de Estado como la "alternativa" frente a la derecha, es a la vez en las nacionalidades un colaborador decidido del centralismo, un adversario de la resistencia. Cuando todo exige la máxima convergencia entre la lucha contra el golpismo en general y la lucha contra los efectos de la contrarreforma en las nacionalidades, se produce en la realidad un conflicto abierto entre ambas. Esta situación empuja además hacia el sectarismo completo a Herri Batasuna, aumenta la influencia en el interior del nacionalismo, incluso del nacionalismo burgués y disminuye seriamente las posibilidades de influencia de las posiciones obreras revolucionarias.

En resumen, las tendencias más negativas de la anterior situación en las nacionalidades se han reforzado. La lucha contra esta situación es, sin duda, la tarea más difícil de los revolucionarios.

En fin, el cuarto cambio, que resume los anteriores, es el nuevo proceso de recomposición que tiene lugar en el movimiento obrero. Vamos a tratar de caracterizarlo sintéticamente respecto a las corrientes mayoritarias.

Desde el Congreso extraordinario del 79, ese "equipo de notables" que constituye el aparato del PSOE, se había asegurado el control del partido. La llamada "izquierda socialista" se había mostrado tal cual era: inofensiva, sin apenas influencia, siempre dispuesta a capitular ante la dirección, en la cual sus principales "bonzos" se integran cómodamente.

Uno de los objetivos centrales del Congreso, colocar a UGT a la altura de CC.OO. en el movimiento obrero, vio confirmado su éxito en las elecciones sindicales (29). Por el contrario, el otro gran objetivo, conseguir el "placet" del gran capital y el Ejército como "partido de gobierno", permanecía estancado, a pesar de que la dirección socialista había renunciado prácticamente a toda política "reformadora" y a la imagen de "alternativa de poder" que había sido el eje de su política desde el 77. A partir del 23-F, el PSOE va a llevar al límite su apoyo incondicional a la política de la derecha. Pero inevitablemente, ha vuelto a aparecer como "la alternativa": esta es la explicación de ese 42% de intenciones de

(28) "La reforma ha terminado". INPRECOR n° 21.

(29) Los datos de las elecciones sindicales fueron: CC.OO. 30,75% (-3,75, respecto a 1978); UGT 29,29% (+7,3 respecto al 78). Ambos sindicatos obtuvieron sus peores resultados en Euskadi: CC.OO. 16,7%; UGT 18,7%; ELA-STV 23,85%; LAB 4,7%.

voto, que no significan adhesiones a la línea actual socialista, sino ilusiones, ciertamente moderadas, en que "las cosas cambien".

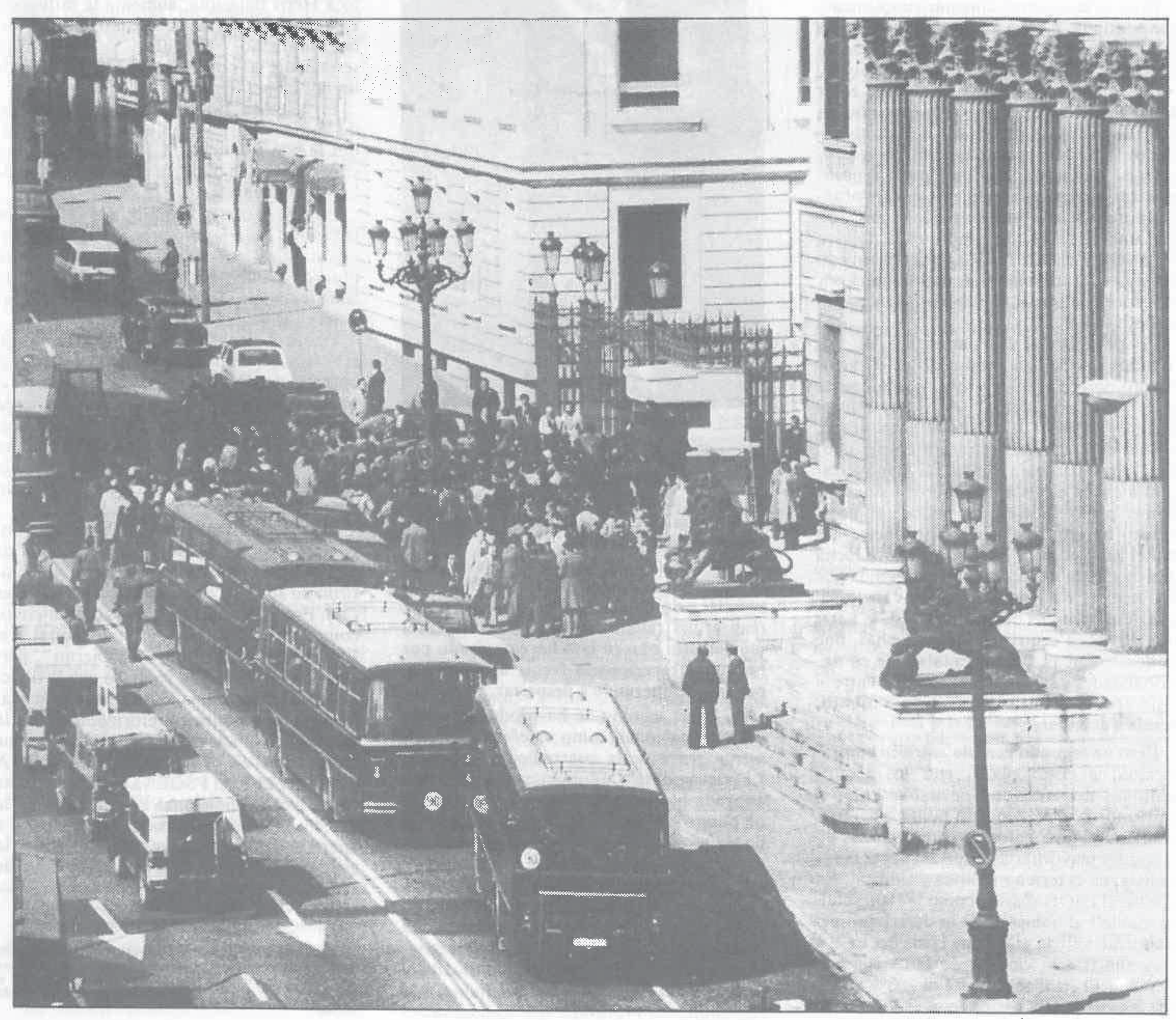
Esta fuerza electoral potencial no va a cambiar un milímetro la política del PSOE. Más bien al contrario, el mensaje de Felipe González a la burguesía puede resumirse así: «Ustedes quieren seguir ejerciendo el poder en régimen parlamentario. Con independencia de nuestra voluntad, es probable que el PSOE gane las próximas elecciones. Resígnense por favor; convenzan al Ejército de nuestra buena voluntad; estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por demostrarla». Y efectivamente, hacen "cualquier cosa", como hemos podido comprobar en las páginas anteriores.

Pero esta línea, cada vez más derechista, tiene que entrar necesariamente en contradicción con las aspiraciones masivas de cambio que han vuelto a centrarse en el PSOE. Por ello, vuelve a haber condiciones para que se desarrolle una nueva "ala izquierda" que, si adquiere raíces en UGT, puede modificar la situación en la corriente política mayoritaria del movimiento obrero, en un sentido favorable para los intereses de los trabajadores.

Lo que en el PSOE es solamente una posibilidad, en el PCE es ya una realidad. La ofensiva interna lanzada por Carrillo después del 23-F, probablemente consiga un compromiso entre las distintas corrientes del aparato central. Pero en cualquier caso, la crisis continuará y la división dentro del aparato también.

El aspecto más espectacular de la crisis son los intentos de sustitución de Santiago Carrillo y su todopoderoso equipo de burócratas. No es poca cosa para el PCE, pero el verdadero problema de fondo es una crisis estratégica: en las condiciones del Estado español, el eurocomunismo tiene todo el espacio político y sindical ocupado por la socialdemocracia. Por si faltaba alguna prueba, los hechos desde el 23-F son concluyentes. Las verdaderas oposiciones dentro del PCE, se plantean en torno a este problema, a derecha e izquierda, protagonizadas por cuadros intermedios, menos ligados por la "complicidad de aparato".

La corriente llamada "afgana" refleja esas reacciones clasistas frente a la política oficial, que un delegado al congreso del PSUC resumió diciendo: «el eurocomunismo no es una palabra, es romper huelgas». Sobre todo, en el terreno sindical, pero no





sólo en él, esta corriente representa para los revolucionarios una posibilidad muy necesaria, de realizar unidad de acción con un sector de base de las organizaciones reformistas, formado además en su mayoría por militantes obreros.

Situaciones como éstas empiezan a poner en cuestión, dentro de las propias organizaciones reformistas, la piedra angular en que se apoyan sus direcciones para tratar de justificarse: «no se puede hacer otra cosa», «marchamos por un camino que tiene un solo carril», como dice Carrillo.

Los revolucionarios sabemos que es mentira. Pero se trata de demostrarlo. Ya antes del 23-F, se estaban produciendo de una manera dispersa intentos de crear plataforma de acción de la izquierda revolucionaria. En todas ellas desempeñaba un papel motor la unidad de acción entre LCR y MC, las dos únicas organizaciones obreras revolucionarias, que cuentan a escala estatal.

Este trabajo de agrupar a quienes no se resignaban ante el desencanto, quienes querían luchar, resistir contra todas las agresiones de la derecha, quienes querían despertar al movimiento obrero, llevarlo a la acción, ha sido positivo. Ahora es aún más necesario, aunque tiene también que adaptarse al "cambio de eje" de la situación política.

El movimiento obrero está ya despierto, aunque marche en una dirección equivocada. El espacio a la izquierda de los partidos reformistas es ciertamente muy grande, pero está poco habitado. No se llenará esperando que acudan los trabajadores desengañados de la experiencia de la "vía del miedo". Hay que ir a buscarlos, allí donde están

Por eso el esfuerzo fundamental debe consistir en encontrar los objetivos, el tipo de organización, el momento adecuado..., para lanzar iniciativas que puedan movilizar al conjunto de los trabajadores, que sean capaces de apoyarse en los sindicatos, por modesto que sea el punto de partida. Cada vez que el movimiento obrero diga NO a un ataque de la derecha, estará recuperando fuerza, venciendo al miedo, recobrando confianza en sí mismo, la de los pueblos oprimidos, los movimientos sociales..., la prioridad absoluta en la lucha contra el golpismo, los fascistas, el centralismo, el pacto social..., es lograr **respuestas masivas.**

Esta orientación no tiene solamente valor en sí misma. Es imprescindible también para combatir la política de marginación, cuando no de represión, contra los revolucionarios que practican las direcciones reformistas. Es necesaria en fin, para ganar audiencia y respeto entre los trabajadores para otras tareas que son necesarias, aunque no puedan ser aún masivas.

Por ejemplo, para continuar oponiéndose a las movilizaciones "anti-ETA" y solidarias del aparato de represión. Para marchar justo en la dirección contraria, aunque nos dejen solos, diciendo a los trabajadores que no pueden defender la democracia, sin defender también la legalidad de Herri Batasuna, sin solidarizarse con todos los que sufren la represión.

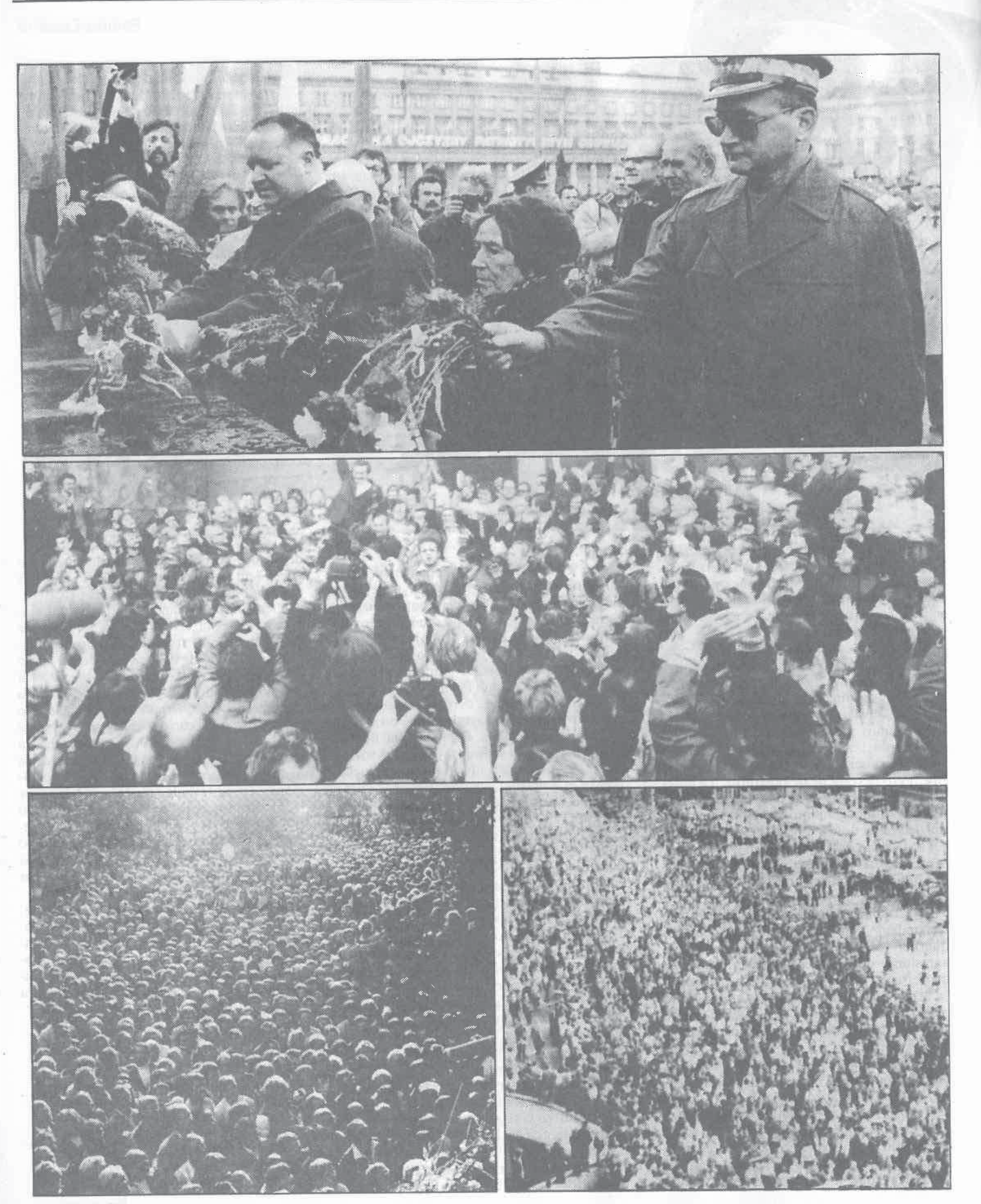
Y para seguir luchando por la autodeterminación de las nacionalidades. Respetando el patriotismo de los pueblos oprimidos. Combatiendo el "patriotismo" de los opresores, incluso cuando sus portavoces son los secretarios generales de los dos mayores partidos obreros del país.

Y en fin, para plantear entre los trabajadores cuál es la vía verdadera para acabar con el golpismo, frente al engaño de palabras como estas de Felipe González: «*Yo no dejo de pensar cuál es la maldición que pesa sobre nuestro país, para que un sistema democrático de lbertades, se venga abajo siempre en un corto espacio de tiempo*» (30). Nosotros, como no creemos en la magia negra y tratamos de aprender de la historia, conocemos la causa de la "maldición". Un historiador, nada sospechoso de izquierdismo, la explica así refiriéndose al fracaso de la II República: la coalición republicano-socialista, que formó gobierno en Abril del 31 «se limitó a podar algunas ramas de un árbol que había que arrancar de cuajo» (31).

Este fue y este sigue siendo el problema. Ahora, el movimiento obrero está repitiendo otra vez la experiencia de la poda. Estaremos con él, cortando todas las ramas posibles. Pero de lo que se trata es de prepararse, de sacar fuerzas y voluntad para echar abajo el árbol. De cuajo. ■

(30) "El País" 4.5.81.

(31) Tuñón de Lara. "Tiempo de Historia" Abril 81.



POLONIA

El sentido del X Congreso del POUP

Ernest Mandel



EL IX Congreso del Partido Obrero Unificado de Polonia (POUP), que se ha reunido entre el 14 y el 20 de julio de 1981, no ha dejado de ser, en algunos aspectos, espectacular. Esto refleja la profundidad de la revolución política que ha comenzado en este país, la amplitud de la politización de las masas, que no podía dejar de influir en el partido de masas que es el POUP. El 25% de los delegados eran miembros de Solidarnosc. En estas condiciones, el Congreso no podía ser un congreso de rutina.

El rasgo más espectacular del Congreso fue su carácter público, la retransmisión televisada de los debates, que se impuso gracias a la acción concertada de 100 delegados. Así, el Congreso fue más democrático que los congresos tradicionales de los PC burocratizados en el poder.

Los delegados no se limitaron a pronunciar discursos rutinarios para aprobar el informe del primer secretario, sobre la base de informaciones o balances regionales o sectoriales. Tampoco hubo una elección puramente ficticia del Comité Central, como sucede en otras partes, cuando la composición del mismo se decide de antemano en la comisión de cuadros.

Hubo verdaderos debates, a veces tumultuosos. Las divergencias que aparecieron eran profundas. La elección del Comité Central, al igual que la de los delegados, fue una auténtica elección, mediante voto secreto y con un resultado imprevisible.

El resultado se conoce: la inmensa mayoría de los delegados del Congreso, de los miembros del Comité Central y del Buró Político son gente nueva. La tasa de renovación era del 80% para los delegados, de más del 90% para los miembros del CC y de 13 miembros sobre 17 del Buró Político.

Los límites de la democracia

Pero esto no significa que la democracia proletaria, o que el centralismo democrático, tal como funcionaba en la época de Lenin en el seno del partido bolchevique y de la Internacional Comunista, hayan reinado en el IX Congreso del POUP.

Sin derecho de tendencia no es posible ninguna verdadera democracia proletaria: esta regla de oro de los principios organizativos comunistas se ha visto confirmada de nuevo en Varsovia, durante la segunda semana de julio de 1981.

Una libertad de expresión real, sin plataformas claramente distintas que propongan soluciones alternativas en torno a los grandes problemas del día, es una puerta abierta a la confusión y a la anécdota que sustituyen la coherencia política, incluso una puerta abierta a la demagogia pura y simple. Poner en la picota la corrupción de los dignatarios cesados de sus cargos, denun-

ciar la desigualdad regional en la organización del racionamiento, proclamar la necesidad de apoyarse en los principios y en la moral comunista para superar el desprestigio que sufre el partido: son temas populares, que están de moda, que provocan aplausos espontáneos.

Pero esto no clarifica en nada la cuestión de saber en qué sentido, con qué métodos y con qué medios hay que sanear la situación económica, si hay que admitir o no despidos masivos en las empresas, si las secciones sindicales deben tener el derecho de veto sobre estos despidos, de saber quién asegurará el mantenimiento del pleno empleo a escala nacional, a pesar de estos despidos.

La elección del CC mediante voto secreto, sin clarificación de las tendencias políticas, sin una mayoría que se pronuncie por una orientación precisa, sin una representación proporcional de las tendencias, es abrir la puerta a las maniobras de camarilla que pueden impedir la elección de los "indeseables" organizando un bloque sistemático frente a un sector de los candidatos. Esto es por cierto lo que sucedió, pues los burócratas "liberal-tecnocráticos" más destacados, como Rakowsky, han quedado eliminados finalmente del Buró Político junto a los "conservadores estalinistas" más notorios, como Grabski (que ni siquiera fue reelegido al CC).

El hecho de que el primer secretario haya sido elegido directamente por los delegados ha sido celebrado como un triunfo de la democracia en la prensa burguesa. Pero no es así, ni mucho menos. Esto lo convierte en un personaje plebiscitado, situado por encima de las tendencias de hecho, sustraído al control y a la censura del CC y del BP. Dado que los Congresos sólo se reúnen con intervalos prolongados, este carácter plebiscitario del primer secretario puede hacer que resulte prácticamente inamovible durante años. Además, él mismo ha nombrado a la secretaría del partido, que es su dirección cotidiana.

El carácter no democrático del Congreso quedó patente también en un terreno particular, el de las delegaciones internacionales. Es la primera vez que sucede en la historia de los partidos comunistas "oficiales" que uno de ellos celebra un Congreso sin invitar a la gran mayoría de sus "partidos hermanos". Sólo pudieron asistir al IX Congreso del POUP los partidos que están en el poder en los países del COMECON, así como algunos partidos en el poder en Africa.

La razón de esta prohibición, claramente contraria al internacionalismo proletario, es evidente: se trataba de evitar que los delegados de los PC italiano, español, sueco, o los de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, pudieran pronunciar en la tribuna del POUP un discurso "revisionista", de apología de la autogestión, o siquiera expresar su apoyo a Solidarnosc.

El sentido antidemocrático de esta prohibición salta a la vista. Mientras que sobre los delegados cayó todo el peso de la presión del Kremlin y sus aliados —desde la carta del CC del PCUS al CC del POUP, hasta los discursos de Grishin y de los representantes del PC checoslovaco y húngaro, blandiendo abiertamente la amenaza de la intervención militar y cantando sus méritos por adelantado—, la presión en sentido opuesto, la del movimiento obrero internacional, que es muy favorable a Solidarnosc, y que los PC español e italiano expresan en cierta medida y a su manera, no pudo hacerse sentir. Elegante manera de trucar los dados.

La victoria del ala Kania

La mezcla caótica de la libertad de expresión, aunque deformada y limitada, con la demagogia y de la manipulación, que dominó el IX Congreso, ha dado así el resultado que sin duda es el más útil para la burocracia polaca. Los "radicales" de ambas alas han quedado eliminados. Triunfa el pantano de los moderados. La renovación es muy limitada. La base está decepcionada.

Es la victoria de Kania y Jaruszelsky, la fracción moderada de los renovadores. Se trata de burócratas que tratan de volver a consolidar su poder evitando al máximo posible el choque frontal con Solidarnosc y el choque frontal con el Kremlin.

Canalizar el deseo de "renovación" para retomar las riendas del país: así podemos resumir el proyecto de este ala de la burocracia. Y que nadie se llame a engaño: el deseo de retomar las riendas, los gritos contra la "anarquía" estaban presentes en los discursos de Rakowsky y de Kania, al igual que lo estaban en los de Olzowsky y de Grabski.

Por supuesto que hubo maniobras, y no pocas; maniobras inteligentes y falsas maniobras. Pero las maniobras no lo explican todo. De hecho, el Congreso estaba hasta cierto punto controlado. Si finalmente ha triunfado el proyecto que más se conforma a los intereses de la burocracia, no es sólo porque ésta haya podido maniobrar entre bastidores mucho más de lo que apareció en el pleno. Es también porque la naturaleza misma de la "renovación" le facilitó enormemente la tarea.

Las "tendencias horizontales" habían quedado derrotadas y prácticamente disueltas desde antes del Congreso. Sus cuadros principales han abandonado de hecho el trabajo en el partido para irse a los sindicatos. Sin una alternativa política clara, sin una plataforma en torno a los grandes problemas del día (el de la "reforma económica", el del poder político de la clase obrera, el de la articulación entre la autogestión económica, la democracia socialista y el poder de los trabajadores), sin tener el derecho de tendencia, los elementos de oposición quedaron muy marginados en el Congreso. Hacia el final del Congreso, además, notaron un aire glacial que anunciaba la represión. En cambio, los "conservadores" han creado estructuras paralelas que ya influyen en el aparato.

El asunto de los presos políticos —algunos militantes ultranacionalistas del KPN (Confederación de Polonia Independiente), difícilmente defendibles como tales por Solidaridad— ilustra muy bien hasta que punto la burocracia ha retomado las riendas del POUP y cuáles son sus limitaciones. En Huta Warszawa, la gran acería de la capital, los trabajadores habían puesto una pancarta que decía: *«Es una verguenza para una República Popular tener presos políticos»*. Los dirigentes de la sección local del Partido trataron por todos los medios de lograr que se quitara la pancarta, pues la fábrica se encuentra en el camino que debían tomar las delegaciones extranjeras de los "partidos hermanos", incluída la delegación soviética, para ir al Congreso. Los dirigentes de Solidaridad en Huta Warszawa son miembros del POUP. Pero junto a los trabajadores de la fábrica se negaron a retirar la pancarta. La sección local de Partido amenazó incluso a las familias de los trabajadores, pero no consiguieron nada: Solidaridad, en Huta Warszawa, sigue decidida a defender el principio de que todo ciudadano polaco tiene el derecho a expresar sus opiniones políticas.

Nada resuelto en relación con el movimiento de masas

Si el aparato del Partido sale reforzado de la prueba, es prematuro hablar de una consolidación del poder de la burocracia como tal. Como máximo, el Congreso ha creado determinadas condiciones para dicha consolidación. Pero por sí mismo no ha modificado la relación de fuerzas entre la burocracia y las masas trabajadoras, en primer lugar el proletariado industrial, modificación que es la condición indispensable para que pueda retomar las riendas del país. El general Jaruszelsky, primer ministro, que pronunció el verdadero discurso de clausura del Congreso, reiteró en él los ataques más duros contra Solidaridad, idénticos a los que ya había formulado algunos meses antes. Acusó al sindicato de fomentar la "anarquía" con las "huelgas políticas". Rechazó las reivindicaciones formuladas para justificar el anuncio previo de las huelgas por los estibadores de los puertos del Báltico y los trabajadores de la compañía aérea LOT. Incluso amenazó a los sindicatos con la represión abierta. Todo ello iba en la línea del Kremlin y de sus aliados, que se habían explayado en invectivas contra la reivindicación de los trabajadores de la LOT de nombrar ellos

mismos al director de su empresa.

Pero en realidad las cosas sucedieron de forma distinta. Desde que terminó el Congreso, el 20 de julio, el gobierno se ha sentado a negociar con los sindicatos que preparaban las huelgas. En 24 horas se llegó a un acuerdo provisional. Su contenido preciso no es conocido, pero no cabe duda que se han hecho nuevas concesiones a los trabajadores.

En los puertos del Báltico, los estibadores se salieron con la suya en materia de seguridad e higiene, así como en lo relativo a las vacaciones. En la LOT, el director elegido por los trabajadores permanece provisionalmente en el puesto, flanqueado por un vicedirector nombrado por el gobierno, que sería el responsable de los aspectos militares de la empresa, a la espera de que la ley de reforma económica precise las modalidades de nombramiento y las competencias de uno y otro.

Por supuesto, la victoria de los obreros no es total. No está garantizado que se aplicará el acuerdo. El propio anuncio de la huelga en los puertos del Báltico es en gran parte la consecuencia de la no aplicación de acuerdos anteriores. Los principales acuerdos de comienzos de setiembre de 1980, los de Gdansk, de Sczeczin y de Katowice, aún no se han aplicado íntegramente por parte de la dirección del gobierno y del Partido. El derecho de huelga aún no está legalizado formalmente. Aún no se ha abolido la censura.

Todo ello le permite al Kremlin, y a sus representantes directos en Polonia, los pretendidos "conservadores", e incluso a los burócratas "liberales", acusar a los dirigentes y militantes de Solidaridad de «violar la ley, oponerse al Estado, ser anarquistas» (olvidando un poco apresuradamente que ellos mismos violan así unos acuerdos firmados solemnemente).

Evidentemente no se abordó nada con respecto al "derecho" o a la "ley". Todo es un problema de relación de fuerzas y de necesidades. Y la relación de fuerzas no le permite aún a la burocracia golpear frontalmente a Solidaridad, que cuenta con el apoyo de nueve millones de trabajadores.

Del Congreso del POUP al de Solidaridad

En estas condiciones, la táctica de la burocracia sigue siendo la misma que en los últimos meses: retroceder para ganar tiempo, hacer concesiones pero sin darles un carácter definitivo, sondear hasta dónde pueden llegar los primeros ataques contra los obreros y los sindicatos sin provocar una respuesta global, tratar de provocar la división de los sindicalistas entre los "duros" y los "moderados", entre distintas regiones y corporaciones, contar con el cansancio y la desmoralización para provocar un reflujo del movimiento y de las movilizaciones de masas. Una vez llegado el reflujo, la represión se endurecería y se generalizaría.

Lo que ayuda a la estrategia de la burocracia es en primer lugar la crisis económica, que se agrava mucho más. Ya durante el Congreso anunció la burocracia nuevos aumentos de precios, así como una reducción de la ración de carne. Puesto que esas raciones ni siquiera están garantizadas en numerosas regiones, las amas de casa de Lodz decidieron movilizarse masivamente para protestar contra este estado de cosas. En Kutno ya se ha organizado una marcha de hambre.

La burocracia trata de achacar la crisis y el desorden económico a la "anarquía" provocada por las huelgas y las actividades "políticas" de Solidaridad, es decir, a la clase obrera. Evidentemente, es una vergonzosa mentira.

La crisis económica y la desorganización de los abastecimientos son anteriores a las huelgas de julio y agosto de 1980 y a la creación de Solidaridad; hasta cierto punto, incluso las provocaron. Además, en el llamamiento del Congreso al país se afirma claramente que los responsables de la crisis son la antigua dirección del partido y del gobierno, que por ello será castigada.

Pero no se trata ni de la lógica ni de la coherencia de un argumento, sino de una lucha política sin tregua en la que la burocracia no repara en medios, sin preocuparse si cae en las contradicciones más flagrantes. Cuando sus agitadores murmuran en las colas delante de las tiendas que antes de la creación de Solidaridad y antes de las "huelgas ininterrumpidas" todo iba mejor, saben muy bien lo que hacen.

El argumento no tiene garra entre los trabajadores más politizados y más vinculados a la nueva organización, que en general contestan, no sin razón, que si la situación se ha agravado, es debido al sabotaje deliberado de los abastecimientos por parte del propio poder. Que este permita por tanto un control de los ciudadanos sobre las reservas de productos de primera necesidad, sobre su circulación, su destino, y se podrá ver rápidamente lo que pasa.

Pero en los medios menos politizados, y con ayuda del hambre y la fatiga, la propaganda insidiosa de los defensores del orden burocrático encuentran un eco real. Y encontrará aún más si la crisis se agrava en los próximos meses, cosa que es de temer. De ahí que Solidaridad se haya opuesto con razón a la reducción de la ración de carne, al margen de un Plan económico global aprobado y controlado por los trabajadores.

A este respecto, hay que dejar patente la existencia de un fallo grave en la solidaridad obrera internacional con la lucha de los trabajadores polacos. Hace poco se abrió en Zürich la conferencia de los bancos capitalistas para negociar con la burocracia polaca el escalonamiento de sus deudas (el Estado polaco debe 26.000 millones de dólares a los países capitalistas; este año, el pago de intereses y los plazos vencidos de la devolución de la deuda ascenderán a 6 ó 7 mil millones de dólares). Es hora de que los sindicatos y los partidos obreros de masas de Europa occidental y de Japón, así como los sindicatos de EE.UU., avancen la reivindicación: ¡Moratoria inmediata para el pago de la deuda polaca! ¡Anulación íntegra de esta deuda!

La actualidad de esta reivindicación viene acentuada por el hecho de que la banca internacional exige, a cambio del escalonamiento del pago de la deuda, que la burocracia polaca informe regularmente sobre la situación económica del país, que le someta los proyectos de "reforma económica" y que intensifique la política de austeridad que proyecta imponer a los trabajadores.

El apoyo a Solidaridad tiene su complemento natural en la reivindicación: ¡Banqueros capitalistas, burócratas soviéticos y polacos, alto a vuestros ataques al nivel de vida y a los derechos y libertades conquistados por los trabajadores polacos! En efecto, la política de austeridad no podrá materializarse sin limitar severamente, o incluso suprimir, el derecho de huelga.

Junto a la crisis económica, la debilidad de la orientación de Solidaridad en materia de política económica es un factor que amenaza, a la larga, con cambiar la relación de fuerzas. El pueblo está cansado del desorden y de la dislocación económica que provoca. Exige una alternativa a una política económica que a todas luces ha fracasado. El problema de la autogestión, de la seguridad del empleo de los trabajadores, de la estrategia económica global, están en el centro de las preocupaciones de todos.

Los dirigentes de Solidaridad reconocen en general que deben ofrecer rápidamente una alternativa de conjunto. Pero sigue habiendo una falta de claridad evidente en cuanto al contenido concreto de esta alternativa y a las premisas políticas de su aplicación. La preparación y la celebración del Congreso de Solidaridad, que tendrá lugar en dos fases a finales de agosto y comienzos de octubre, deberán mostrar hasta qué punto podrá utilizar la burocracia la ausencia de un contraplan y de un contrapoder obrero realmente centralizado.

La lucha por este contraplan y este contrapoder implica la defensa de las libertades y derechos conquistados, la defensa de la unidad del movimiento, la respuesta unánime y consciente contra todo intento de división y de represión. Es la condición *sine qua non* para que las conquistas de agosto y setiembre de 1980 no sean liquidadas por la táctica del salchichón, tan apreciada por los burócratas. ■

El PRT legalizado

Fernando Zamora



EL Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la IV Internacional, acaba de obtener una importante victoria política al ser legalizado, el pasado 11 de junio. Tras varios meses de silencio, el gobierno mexicano ha reconocido oficialmente, a través de la Comisión Federal Electoral, al PRT como partido político legal.

Así obtiene el derecho a presentarse a las elecciones presidenciales de 1982. Esta victoria no es únicamente la del PRT, sino también la del conjunto del movimiento obrero, y de los que luchan por las libertades democráticas en general.

Antes de promulgarse la Ley de Reforma Política, en 1977, los únicos partidos políticos legalizados eran el Partido Revolucionario Institucional (PRI, que detenta el poder) y sus organizaciones satélites. Así, por ejemplo, el único candidato en liza para las presidenciales de 1976 fue José López Portillo, candidato del PRI y de otros tres partidos políticos oficiales, entre ellos el Partido Popular Socialista (PPS).

En aquel entonces, el Partido Comunista se puso de acuerdo con varios partidos políticos más para desarrollar una fuerte campaña electoral, no legalizada, pero que hizo que más de un millón y medio de ciudadanos depusieran papeletas nulas con el nombre del candidato del PC, Campa.

El proyecto político del gobierno mexicano estaba muy claro. Por un lado, quiere aumentar la credibilidad del sistema político, cosa que no podía favorecer el hecho de que sólo hubiera un único candidato en liza. Por otro, pretende canalizar el creciente descontento de amplios sectores de la población desarrollando una política parlamentaria distinta, y aprovechando para ello la ocasión de una campaña electoral. Este proyecto de gobierno hizo que la "reforma política" se promulgara como gancho electoral.

El propio texto de la ley era extremadamente contradictorio y antidemocrático. Restringe severamente el derecho de toda organización a obtener siquiera su legalización. Debido a esta ley, el PRT no pudo lograr su inscripción provisional. En lugar de ello, sólo fue reconocido como "asociación política", que es una forma de legalización pero que subraya la imposibilidad de participar en las elecciones.

Incluso esta concesión sólo se ha obtenido tras una lucha dura y prolongada. Sin embargo, la creciente influencia del PRT, acompañada de una amplia campaña por su legalización como partido político, han obligado al gobierno a reconsiderar su actitud. El ministro del Interior, Enrique Olivares Santana, reconoció que el gobierno aplicaría de ahora en adelante criterios políticos para determinar qué organizaciones iban a ser legalizadas, y no los requisitos legales que la ley estipula.

En 1978 fueron legalizados "a título provisional" el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST, organización reformista y populista, vinculada políticamente al poder y financiada por él); es decir, que su legalización definitiva quedaba condicionada por la obtención del 1,5% como mínimo del conjunto de votos, lo que equivale a unos 300.000 votos. Ahora, el PRT está también en esta categoría.

La campaña por la legalización del PRT contaba con el apoyo de numerosas personalidades y organizaciones de la izquierda obrera y sindical. Este apoyo procedió sobre todo de dirigentes de la Universidad y de los sindicatos de enseñantes, que históricamente han desempeñado un papel importante en el pasado de México y en las luchas sociales de estos últimos años. Asimismo, diputados del PC y prácticamente el conjunto de las organizaciones de extrema izquierda y centristas prestaron su ayuda.

Paralelamente, el PRT lanzó una intensa campaña para lograr su legalización, mediante la distribución de decenas de miles de





panfletos y carteles, y organizando asimismo una cifra incalculable de reuniones, de varios mitines importantes, en los que participaron miles de personas. Los momentos álgidos de esta campaña fueron el 12 de marzo y el 5 de abril.

El 12 de marzo, un mítin celebrado ante las oficinas del Ministerio del Interior reunió a 2.000 personas, con el apoyo de otros partidos políticos que también luchaban por su legalización. El 5 de abril se celebró otro mitin en el cine *Variedades* de México, para lanzar la campaña presidencial del PRT y reclamar su legalización; asistieron 1.500 personas.

Durante esta campaña por su legalización, el PRT ha vuelto a ser víctima de la represión, a causa de su trabajo político cotidiano en los sindicatos, centrado en particular contra el gobierno y sus atentados a las libertades democráticas, y por los llamamientos lanzados a favor de la amnistía para todos los presos políticos.

Hubo incluso amenazas de muerte contra Edgar Sánchez y Pedro Penaloza, dirigentes públicos del PRT y miembros de su Buró Político; Rafael Torres, dirigente del PRT, militante del sindicato de enseñantes y dirigente de la tendencia lucha de clases en este sindicato; Andrés Ugalde, organizador del PRT en Cuautitlán, en el cinturón industrial de México, y Rosario Ibarra de Piedra, candidata del PRT a la presidencia de la República y portavoz nacional del Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

El Frente Nacional Patriótico y Anticomunista (FNPA), fue la organización que profirió las amenazas y es sospechosa de tener lazos con la policía y el BARAPEM (Batallón de Radiopatrulla del Estado de México). El hecho de que las amenazas lanzadas por el FNPA son serias viene demostrado por el hecho de que esa misma organización reivindicó el doble asesinato del dirigente sindical de los enseñantes, Miguel Núñez Acosta, y del secretario general del sindicato de la fábrica General Electric de México. Frente a estos ataques y a las múltiples detenciones de militantes, el PRT ha afirmado que no lograrán forzarle a entrar en la clandestinidad o a reducir su actividad.

La decisión del gobierno, el 11 de junio, implica únicamente el reconocimiento de dos partidos más, el PRT y el Partido Socialdemócrata, una pequeña organización que se apoya principalmente en miembros de las clases medias, y que no tiene relación alguna con la socialdemocracia internacional. Esto significa que aún no están legalizados muchos otros partidos obreros, como los centristas Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Obrero Marxista, y diversas formaciones prosoviéticas y estalinistas, como el Partido Socialista Revolucionario, la Unidad de Izquierda Comunista, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista y el Partido del Pueblo Mexicano. El PRT exige que todas estas organizaciones sean reconocidas también y se ha comprometido a participar en la campaña por su legalización.

Durante la campaña, el PRT ha anunciado que ponía su legalización al servicio del



movimiento obrero. El Comité Central, en su sesión del 14 de marzo, concretó su ofrecimiento a través de una propuesta de unidad de acción electoral de la izquierda y del movimiento obrero para las presidenciales de 1982, centrada alrededor de un programa de lucha de clases y de reivindicaciones democráticas, y propuso la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Frente Nacional contra la Represión y madre del militante estudiantil ''desaparecido'', Jesús Piedra.

Para el PRT, la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra representa sin duda la mejor expresión de la unidad del movimiento obrero al mismo tiempo que simboliza de forma muy clara la lucha por los derechos de los presos políticos, de los ''desaparecidos'', por las libertades democráticas, contra la represión del régimen.

La propuesta del PRT ha encontrado un eco muy favorable, tanto entre los militantes no organizados como en algunas otras formaciones como la Unión de Colonias Populares (asociación de habitantes de chabolas que lucha por sus propias reivindicaciones), el Frente Campesino Independiente de Sonora, el Frente Marxista (una reciente escisión de la Corriente Socialista), Punto Crítico (la principal organización centrista, que publica la revista del mismo nombre), la UPOME (un sindicato nacional estudiantil de origen maoísta), y numerosos grupos locales.

En la base del PCM aparecen fuertes presiones a favor de la unidad de acción electoral y en apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra, oponiéndose a que se presente frente a ella a un burócrata del PCM.

La ovación que recibió Rosario Ibarra de Piedra cuando tomó la palabra ante un mitin central de 20.000 personas, en conmemoración de la masacre del 10 de junio de 1971, es una buena señal del eco que despierta su campaña. Principal oradora, Piedra fue ya claramente reconocida como su candidata por los asistentes.

Los marxistas revolucionarios en México tienen enormes posibilidades para impulsar la lucha de clases y para construir el partido revolucionario en el próximo período. El crecimiento actual del PRT y su mayor implantación demuestran que estas posibilidades existen y que la campaña electoral de los próximos doce meses será sin duda apasionante. ■

La ofensiva represiva amenaza las conquistas de las masas iraníes

Michel Rovere

EL fracaso de la "Revolución blanca" que pretendía convertir a Irán, antes de finales de siglo, en el Japón de la Asia anterior; las contradicciones económicas y sociales insuperables, provocadas por una industrialización basada en la capitalización de la renta petrolera y en el refuerzo de la dependencia con respecto a las metrópolis imperialistas, fueron el telón de fondo del estallido de la tercera revolución iraní.

Al lanzarse a la calle, frente a las balas de los soldados de la monarquía Pahlavi, las masas iraníes no sólo querían derribar un régimen odiado y comprometido, a sus ojos, con el imperialismo, sino cambiar también las condiciones materiales de su existencia cotidiana.

La profundidad de la crisis económica

La incapacidad de la República Islámica, dos años después de su acceso al poder, para resolver todos los grandes problemas planteados por el subdesarrollo y a dependencia del país, la exacerbación de la crisis económica provocada por el bloqueo imperialista y después por la guerra con Irak, alimentan la creciente ruptura de las masas con un régimen que les parece cada vez menos capaz de "cambiar su vida".

La inflación, según las cifras dadas por el banco central iraní, fue del 56% en los últimos tres años, con una clara tendencia a aumentar. El doctor Mohsen Nurbaksh, que sucedió en la dirección del banco central a Ali Reza Nowbari, próximo a Bani Sadr, admitió que la inflación en el año actual alcanzaría el 30%. De hecho, la inflación afecta sobre todo a los bienes alimenticios y los productos de primera necesidad. El precio de estos se ha dobiado o triplicado, en algunos casos, durante los últimos meses.

En el sector agrario, pese al aumento de los precios, la producción ha descendido desde el comienzo de la revolución. Las importaciones de trigo han pasado de 426.000 toneladas en 1978-79, a 2 millones en 1980-81. Las importaciones de alimentos representaron la mitad de los 11.400 millones de dólares de importaciones realizadas durante el año pasado, según la administración de aduanas iraní.

En el sector industrial, la situación apenas es mejor. Pese al esfuerzo bélico, la industria sólo trabaja como máximo al 40% de su capacidad productiva de antes de la revolución. Si la construcción, en lo que se refiere a las pequeñas casas unifamiliares, fundamentalmente en las ciudades de provincia, ha mejorado ligeramente, la parte fundamental de las grandes obras, que representaban una buena parte del empleo, siguen paralizadas. En total, el PNB ha descendido en un 30% desde el comienzo de la revolución.

Según las estimaciones oficiales, el paro afecta a entre 2,5 y 4 millones de personas, sin incluir a los refugiados —más de un millón— que ha causado la guerra. ¿Se debe la crisis únicamente al fardo de la guerra? Los gastos bélicos —que incluyen los subsidios a los refugiados, pero también el precio de la guerra en el Kurdistán— ascienden a cerca de un millón de dólares al mes, de los que 400 millones se destinan a la compra de armas y piezas de recambio (a través de Corea del Norte, Libia y también la RFA). Las importaciones afectadas por el boicot imperialista, y que ahora entran a través de Dubai y los emiratos del Golfo Pérsico u otros países terceros, se han encarecido en un 25%.

En opinión de los dirigentes del Partido Republicano Islámico (PRI), la crisis económica se debe en gran medida a la disminución de los ingresos del petróleo y a sus consecuencias, dado el peso del Estado en la economía del país. Justo antes de la revolución, el Estado iraní realizaba directamente cerca del 50% de las inversiones industriales. Hoy en día tiene que llevar encima la carga de varios centenares de empresas que fueron nacionalizadas o pasaron bajo el control del Estado tras la huida de los inversores extranjeros o de los **taghutis** iraníes. Los empleados —de una manera u otra— en el sector público ascienden a 1,5 millones de personas, para una población activa no agrícola de 7,5 millones de trabajadores.

Las medidas económicas del régimen

Pero el argumento es de doble filo: si el Estado iraní tiene tanta importancia económica, si además está dirigido por un único partido, que al mismo tiempo dirige el gobierno, dispone de una amplísima mayoría en el Parlamento y controla directamente, a través de los hombres que ha colocado, tanto las fundaciones más grandes —como la fundación de los desheredados— como los bancos y las industrias nacionalizadas, entonces se puede juzgar de viso cuál es la orientación de la política económica.

Una cosa es reconocer las dificultades objetivas, que vienen del pasado o surgen en la situación actual. Pero hay que examinar también el sentido general de las medidas políticas y económicas que se han tomado, y de las que son responsables en exclusiva los dirigentes de la República Islámica. El examen es harto revelador:

•Mientras que desde hace un año y medio proliferan los desórdenes agrarios y las ocupaciones de tierras, el PRI se niega en el Parlamento y en el gobierno a aplicar el famoso artículo 3 de la Ley de Reforma Agraria, que prevé la posibilidad del reparto de tierras.

•Lo mismo sucede con un decreto, previsto desde enero de 1980, que contempla la creación de un monopolio del comercio exterior. La feroz oposición del bazar y de sus representantes en el PRI mantiene bloqueado el proyecto que prevé conceder el monopolio a nueve centrales de compra.

•Como corolario de esta decisión de no nacionalizar el comercio exterior está la decisión de mantener la paridad del rial y del dólar al nivel de 75 riales por un dólar, mientras que con la inflación que existe en Irán, lo normal habría sido reajustar la paridad sobre la base de 100 riales por un dólar. El Estado iraní, que es el principal exportador (en particular porque el petróleo representaba el año pasado el 95% de los ingresos de divisas), y cuyo presupuesto (en riales) depende fundamentalmente de los ingresos petroleros (pagados en dólares o sobre la base de una "cesta" de divisas fuertes), podría recuperarse con ello. El alza de determinados productos importados estimularía asimismo su sustitución a plazo fijo gracias al desarrollo de la industria iraní.

Pero lo que le parecería razonable y de sentido común a cualquier economista burgués "desarrollista", es demasiado osado para los dirigentes actuales de la República Islámica. Es cierto que la devaluación habría perjudicado al gran bazar de la importación-exportación, que se beneficia ampliamente de ese rial sobrevalorado. Incluso el ingeniero Sahabi, próximo al "liberal" Bazargan, ha denunciado los exorbitantes beneficios de los bazaris: un billón

200 millones de riales el año pasado, es decir, tres veces más que el año más fasto bajo el sha. Estos beneficios representan un poco menos de la mitad del presupuesto del Estado el año pasado.

En cambio, las recientes medidas económicas que han adoptado el gobierno y el Parlamento tienen, eso sí, un sentido más preciso, que no es ni el de una mayor independencia con respecto al imperialismo ni la satisfacción de las necesidades de las masas iraníes.

El primer aspecto de estas medidas afecta a las relaciones con el imperialismo. Para relanzar la economía iraní, el gobierno actual pretende relanzar la producción petrolera y trata de normalizar sus relaciones con determinados inversores extranjeros cuyos bienes habían sido nacionalizados.

La cantidad de petróleo exportado se consideraba desde hacía tiempo como el barómetro de la dependencia económica del país con respecto al extranjero. Así, los proyectos gubernamentales de pasar de un nivel de 700.000 a 1.000.000 de barriles diarios a 2,5 millones de barriles han suscitado una inquietud legítima en torno a la política económica del régimen, ante la ausencia de un verdadero plan de lucha contra la dependencia económica. Máxime cuando se han concluido o están en trance de concluirse una serie de acuerdos o negociaciones comerciales con los antiguos socios imperialistas.

Así, el gobierno iraní anunció en julio de 1981 que estaba dispuesto a entablar negociaciones con los bancos occidentales cuyos haberes habían sido nacionalizados en Irán, con miras a indemnizarlos. Asimismo ha tomado contacto con los trusts farmacéuticos alemanes Hoechst, Bayer, etc., que participaban en proyectos en Irán, para indemnizarlos.

Este intento de normalización parcial de las relaciones económicas; con determinadas potencias imperialistas (Francia, Gran Bretaña —cuyo comercio con Irán se duplicó en 1980-81 en comparación con el año anterior—, la RFA y Japón) les ha permitido a los "liberales", y en particular a Bani Sadr, atacar al PRI por la incoherencia económica de su "antiimperialismo". El debate sobre el aumento de las exportaciones petroleras y la firma de contratos con empresas extranjeras ha estado en el origen de las polémicas más arduas entre el PRI y Bani Sadr.

Una ofensiva contra las conquistas obreras

El segundo aspecto de esta política económica es el de una vigorosa ofensiva de austeridad, que apunta sobre todo a las conquistas de los trabajadores iraníes. Mientras se intensifica la represión en Irán, el nuevo gobernador del banco central, Mohsen Nurbaksh explica al muy burgués *Financial Times* que *«aunque no sea un monetarista de tomo y lomo (...), la lucha contra la inflación pasa por la reducción y el control de la masa monetaria».*

Esto significa ante todo, en las condiciones actuales de la economía iraní, reducir el déficit presupuestario de forma drástica. Mientras que este déficit alcanzó el año pasado 11.400 millones de dólares (y los gastos de la guerra de Irak sólo afectaron a la mitad del año fiscal iraní, que va de marzo a marzo), el proyecto de presupuesto del gobierno para 1981-82 preveía el equilibrio.

Además de multiplicar por cuatro las exportaciones actuales de petróleo (pues no parece que sea previsible un nuevo aumento importante del precio, debido a la recesión y al *dumping* de Arabia Saudí), el gobierno iraní pretendía asegurar el equilibrio mediante fuertes recortes en los presupuestos de desarrollo, un aumento importante de los impuestos (del orden del 30%) y la rentabilización del sector público y nacionalizado, con todo lo que esto significa de bloqueo de salarios o incluso despidos.

La puesta en práctica de estos proyectos económicos significaría evidentemente un nuevo enfrentamiento con la clase obrera iraní, que no ha sufrido aún ninguna derrota importante. Pero ya hace varios meses que los capitalistas iraníes y el gobierno multiplican las escaramuzas y sondean la situación.

Esto se vio con particular claridad cuando estalló la guerra con Irak. La agresión irakí, que los trabajadores identificaron con un intento de derrocar el régimen de la República Islámica, suscitó una importante movilización combativa y política en las empresas: en numerosas fábricas, los trabajadores, para hacer frente a la guerra de agresión y a las amenazas de contrarrevolución, se movilizaron, se organizaron para controlar la producción, exigir un entrenamiento militar en el lugar de trabajo, en algunos casos controlar los precios de los productos alimenticios racionados en los barrios.

Ante esta movilización política, el gobierno cedió un poco (con la organización del entrenamiento militar), para eludir la cuestión principal: el armamento masivo de la población que exigían espontáneamente los trabajadores para defender "su revolución". Pero al mismo tiempo, los patronos y el gobierno (y se trataba en este caso de una política aplicada tanto por Bani Sadr como por el PRI) aprovecharon el clima de patriotismo y de unión nacional que creó la guerra para intentar rebajar las conquistas de los trabajadores. En algunas fábricas se ha aumentado la jornada de trabajo, pasando de 10 a 12 horas. En muchos casos se ha suprimido el descanso del jueves por la tarde. No sólo se han bloqueado los salarios, sino que encima se ha impuesto por decreto un "donativo", deducido del salario, para los combatientes del frente o para los refugiados.

Hay que decir que durante algún tiempo, la clase obrera aceptó de buen grado estos sacrificios económicos.

Un desengaño creciente

Pero los trabajadores se han dado cuenta muy pronto que han sido ellos los que estaban pagando la guerra y la crisis económica: a pesar de las declaraciones oficiales, el mercado negro seguía floreciendo. No se concretaba ningún plan de reconversión industrial para responder a las esperanzas de que esta guerra podría ser el medio para romper definitivamente con el imperialismo.

Y sobre todo, el gobierno no se dotaba de los medios para poner fin a la guerra. Al contrario, los combates volvían a estallar en el Kurdistán, cuando la resistencia kurda había propuesto al régimen de Teherán combatir junto a él al invasor irakí, a cambio de que se le reconociera un régimen de autonomía y el derecho a conservar sus armas. Al negarse a armar masivamente a los trabajadores, Bani Sadr por un lado y el PRI por otro intentaban aprovechar como fuera la guerra para reforzar su propio dispositivo en el seno del aparato de Estado. Uno apoyándose en la jerarquía militar del antiguo ejército imperial, los otros en el refuerzo de los cuerpos de *pasdars* (especie de milicias islámicas).

Este desengaño creciente con respecto al régimen era evidente a partir de diciembre de 1980. En la primavera de 1981 se manifestó en una serie de movilizaciones sociales, incluso en huelgas, particularmente cuando el Parlamento decidió anular la distribución para el Año Nuevo iraní (21 de marzo) de las primas institucionalizadas en tiempos del sha, so pretexto de que los obreros participan en los beneficios de las empresas... Estas primas representan a menudo más del salario de un mes.

Se produjeron otras huelgas (papelera de Pars, conductores de autobuses de Ispahan, compañía de electricidad de Teherán, fábrica de calzado Kafch Melli, fábrica de automóviles Iran National etc.), para obtener aumentos de salarios o el reconocimiento de los órganos de representación obrera (*shoras*, delegados).

Pero estos movimientos reivindicativos de la clase obrera fueron parciales, limitados. Además del fardo de la guerra —*«no se puede hacer huelga sin debilitar el frente»* es un argumento que sienten en particular los trabajadores del petróleo, que trabajan a unos cuantos kilómetros de los cañones irakíes— y las maniobras de intimidación del régimen, influye también el retraso en la construcción de un

movimiento obrero organizado nacional único, la debilidad de las tradiciones de lucha económica del proletariado iraní y la ausencia de una alternativa política clara.

A su vez, el gobierno y los patronos emplearon toda una serie de métodos para contener, limitar o sofocar esta renaciente agitación obrera: despidos y detenciones selectivas de los trabajadores más activos y destacados, utilización de la guerra y del paro como instrumento de presión, ampliación de las prerrogativas concedidas a las Anyomeh Eslami (Asociaciones Islámicas) en las empresas, a expensas de los shoras, política sistemática de división de los shoras con criterios ideológicos y, a veces, intervención de bandas de matones para impedir las huelgas.

Todo ello explica por qué el creciente desengaño con respecto al régimen no ha desembocado aún en luchas sociales de gran amplitud y ha sido capitalizado en parte por los *mudyahedines*, cuando no ha sido aprovechado por Bani Sadr en beneficio propio.

La fuerza de los mudyahedines

En el mes de diciembre, y hasta marzo de 1981, Bani Sadr reunía a centenares de miles de personas en sus mitines, tanto en Teherán como en la provincia. Y su popularidad se derivaba menos del papel contestable y contestado que pudo desempeñar durante la guerra, que del hecho de que haya criticado cada vez más abiertamente la incoherencia de la política económica del régimen y sobre todo los ataques a las libertades democráticas (prohibición de partidos, restablecimiento de la llamada "ley del talión", prohibición de periódicos, monopolio del PRI sobre los medios de comunicación, etc.).

Pero es sobre todo la organización "islámica progresista" de los Mudyahedines del Pueblo la que ha capitalizado el creciente descontento, en particular entre la juventud. Los mitines de la campaña presidencial de Massud Madyavi, en 1980, habían permitido ya probar el impacto de esta organización, que goza de un importante apoyo gracias a su pasado heróico de resistencia frente al sha y de su afirmación islámica.

Los mudyahedines capitalizaron igualmente el apoyo incondicional prestado por los estalinistas del partido Tudeh al régimen, así como la adhesión de la mayoría de los fedayines a los dirigentes del PRI. Sus relaciones con el régimen han sido contradictorias. Aunque disponían de importantes puntos de apoyo, aunque minoritarios, en el seno de la jerarquía chiíta (el ayatola Taleghani, el jeque Ali Tehrani), se negaron a devolver, las enormes cantidades de armas de que disponían tras la insurrección de febrero de 1979.

Si bien apoyaron la ocupación de la embajada norteamericana, el apoyo que prestaron luego al movimiento de las nacionalidades, en particular a los kurdos, fue el factor determinante de su eliminación de la carrera a la presidencia, y más tarde de los ataques de que fueron objeto, en particular cuando se cerraron las universidades. Al estallar la guerra con Irak, participaron valientemente en la organización de la defensa en el Jusestán cuando se inició el avance irakí.

Ultimamente, su periódico *Modyahed*, que no es legal, tenía una tirada de 200.000 ejemplares. Desde comienzos del año 1981, han concluido un acuerdo de unidad de acción con el Partido Democrático del Kurdistán (PDKI). La popularidad de los mudyahedines se debe también al hecho de que, dejando aparte los movimientos de las nacionalidades, desde hace un año son las principales víctimas de la represión, sobre todo tras el cierre de las universidades.

Los ataques perpetrados por los matones organizados por el PRI, a menudo con la complicidad directa y la ayuda de los *pasdars*, contra sus locales o reuniones, los atentados individuales contra sus militantes y simpatizantes conocidos se han saldado en un año, antes de los enfrentamientos de junio de 1981, con más de una cincuentena de muertos y varios centenares de heridos en las filas de los mudyahedines. En una carta dirigida a Jomeini, el 2 de mayo de 1981, los mudyahedines explicaban, para protestar contra la suerte que corrían: «*nos permitimos señalar que nuestras desgracias son fundamentalmente las mismas que las de amplias capas de la Nación. Una nación que siente cada día más que le faltan las cosas más elementales, así como los principios y las ideas que lo menos cabía esperar de la revolución es que fueran puestas en práctica. El pueblo se da cuenta de las tierras, al igual que las riquezas y los privilegios, permanecen intactos, sin ser compartidos. Las libertades no existen y en cuanto a la lucha contra el imperialismo, el Estado no ha cumplido su tarea en lo que a él le afecta. Esta situación se deriva en primer lugar y ante todo de esta amarga verdad: mientras que según sus propias palabras, 'todo el mundo' hizo la revolución, sus frutos han sido recogidos por un único grupo que intenta controlar la totalidad de los medios de comunicación para justificar su acción a golpes de propaganda...*».

Y habla de la carestía de la vida, del paro, de los ataques contra las libertades democráticas, del billón 200 millones de riales de beneficio del bazar, los miles de millones de dólares «*que corresponden a los desheredados y que caen en manos de pretendidos acreedores, personas corrompidas o de los americanos*», antes de solicitar una entrevista con Jomeini para «*dar a luz soluciones, generar la comprensión nacional, resucitar la esperanza de un acuerdo pacífico y por consiguiente suprimir los desórdenes interiores*».

Este es el contexto general de la lucha fraccional que ha estallado en las cúspides de la República Islámica.

No cabe duda que es criticable el apoyo que han prestado los mudyahedines a agrupamientos o personalidades burguesas, en primer lugar a Bani Sadr, presentados como "mal menor". Cabe temer también que sus referencias ideológicas, y sobre todo su orientación populista, así como sus tradiciones prácticas, después de haberlos llevado a subestimar las tareas específicas de reconstrucción de un movimiento obrero organizado, unitario y centralizado, les impulsan a utilizar formas sustituistas de enfrentamientos armados con el poder.

Todo esto hipoteca evidentemente el futuro de la revolución iraní. Así lo explicaba la resolución adoptada por el Secretariado Unificado de la IVª Internacional en julio de 1980: «*En los combates del porvenir, en torno a los problemas que afectan a sus intereses inmediatos, las masas trabajadoras desbordarán repetidamente a la dirección Jomeini, enfrentándose a ella más o menos directamente, se dotarán de sus propios instrumentos de combate (shoras, comités, milicias). Precisamente en el transcurso de estos desbordamientos y a causa del creciente descontento popular, fuerzas como los mudyahedines y los fedayines, han podido reforzar su audiencia y su implantación. Sin embargo, si no existe una dirección proletaria alternativa, las masas seguirán presas, a pesar de todo, y en el plano político, de las soluciones que no rompen, en última instancia, con la colaboración de clases*».

La traición de los estalinistas

Pero el análisis que hacen los estalinistas del partido Tudeh y sus compadres los fedayines "mayoritarios", de los actuales enfrentamientos como la simple oposición de un ala "antiimperialista radical" (el PRI y Jomeini) frente a los sectores "liberales" y proimperialistas de la burguesía iraní, encarnados por Bani Sadr, es una simple y pura falsificación.

Fieles a la concepción estalino-menchevique de la revolución por etapas y a la teoría bujarinista del "bloque de las cuatro clases", el Tudeh y los fedayines "mayoritarios" explican que en Irán la lucha contra el imperialismo es la prioridad del momento, y que todo lo demás (opresión de las nacionalidades, ataques a las libertades, bloqueos de la Reforma Agraria, represión antiobrera) no son más que "contradicciones secundarias". No es casualidad que en el pasado mes de enero, *Mardom*, periódico del Tudeh, escribiera, para criticar la actividad de los mudyahedines, que su acción era similar a la de los izquierdistas chilenos, «*que contribuyeron*

así al derrocamiento del régimen popular de Allende».

Y el secretario general del partido Tudeh, Nuredin Kianuri, ha explicado ya, después de la reciente ilegalización de *Mardom* hasta donde están dispuestos los estalinistas a llevar su política: *«incluso si se ilegalizara nuestra organización y se persiguiera a nuestros militantes, nosotros seguiríamos defendiendo la línea del imán Jomeini, que consiste en combatir al imperialismo y a sus agentes locales, los "liberales" y los "maoístas". Nuestra postura al respecto no se basa ni en consideraciones partidistas ni en maniobras tácticas. Nuestro apoyo a la revolución es de carácter estratégico».*

Esta declaración merece figurar en una antología de la traición estalinista, al lado de las declaraciones similares que hicieron en su tiempo los PC irakí, egipcio o sudanés. Y apostamos a que el "apoyo de carácter estratégico" tiene algo que ver con los intereses de la diplomacia soviética en la región...

Nuredin Kianuri aún ha rizado el rizo después de las ejecuciones en serie. En unas declaraciones a la agencia AFP, el dirigente del partido estalinista, tras registrar con satisfacción *«los avances (realizados por el régimen) de una tendencia a normalizar las relaciones con los países socialistas»*, afirma (¿lapso burocrático?) que Bani Sadr y el dirigente de los mudyahedines, Massud Radyavi, debían ser *«encerrados en un hospital psiquiátrico»*. Aprobando las ejecuciones, declara: *«Los dirigentes de los grupos contrarrevolucionarios son asesinos y merecen la pena de muerte»*. En cuanto a los *«jóvenes, aturdidos por la propaganda de los mudyahedines, deberían ser reeducados en campos de trabajo»*.

Los marxistas revolucionarios hacen la distinción entre la burguesía de un país oprimido y la de un país opresor, incluso cuando la primera emprende concretamente la vía de la contrarrevolución. Aún hoy no adoptaríamos una actitud neutralista, pacifista o derrotista en caso de agresión de cualquier potencia imperialista contra el régimen de la República Islámica. Pero de ahí no deducimos que la burguesía nacional o una de sus fracciones, sea más progresista ni más revolucionaria que la burguesía de un país no colonial en un período de revolución democrática. El yugo colonial no confiere un carácter revolucionario a la burguesía nacional, a uno de sus componentes o a sus representantes políticos.

El imperialismo, la burguesía y la contrarrevolución

Como explicaba la resolución del Secretariado Unificado de la IVª Internacional, ya citada, sobre la situación iraní: *«Independientemente de las luchas que ha desarrollado contra el sha y de sus posiciones actuales en los enfrentamientos con el imperialismo norteamericano, independientemente de los enfrentamientos entre fracciones de la jerarquía chiita y sectores de la burguesía, la dirección Jomeini, a causa de los lazos que mantiene con sectores del capital nacional (el gran bazar), a causa de los recursos económicos de la jerarquía chiita, entre otros los bienes inmobiliarios, a causa del contenido económico, social y político de su programa, a causa de los vínculos que mantiene con tal o cual sector del imperialismo (Europa, Japón), y a causa de su papel en el mantenimiento del aparato de estado, cumple la función de una dirección burguesa».*

La lección de todas las revoluciones coloniales, empezando por las revoluciones coloniales victoriosas (China, Vietnam, Cuba), es que ninguna burguesía nacional se ha colocado jamás en un punto "equidistante" entre el imperialismo y las masas explotadas y oprimidas de su propio país, o con mayor razón, se ha encontrado más cerca de 'sus' trabajadores y de 'sus' campesinos pobres que de las potencias imperialistas.

Como explicaba Trotsky, *«la cuestión de la naturaleza y de la política de la burguesía viene determinada por toda la estructura interna de las clases en las naciones que desarrolla la lucha revolucionaria, por la época histórica en que se produce esta lucha, por el grado de dependencia económica, política y militar que ata a la burguesía indígena al imperialismo mundial en su conjunto, o a una parte del mismo, y principalmente por el grado de actividad de clase del proletariado indígena y por el grado de vinculación con el movimiento revolucionario internacional. Una revolución democrática o la liberación nacional pueden permitirle a la burguesía ampliar sus posibilidades de explotación. La intervención autónoma del proletariado en la arena de la revolución amenaza con quitárselas todas».*

El PRI no ha entablado la batalla contra Bani Sadr para poder luchar mejor contra el imperialismo (ya hemos visto en detalle su política económica). Tampoco lo ha hecho por razones puramente "ideológicas", para materializar al Estado teocrático (aunque el Islam sea el argumento moral con que cubre su acción y la legislación represiva). Los enfrentamientos interburgueses que se han producido en Irán reflejan de manera deformada el choque de intereses de las clases fundamentales.

"Existen países oprimidos", escribía Lenin en las tesis sobre la cuestión nacional y colonial, adoptadas por el II Congreso de la Internacional Comunistas, en 1920, *«dos movimientos que cada día se separan más: el primero es el movimiento burgués democrático y nacionalista, que tiene un programa de independencia política y de orden burgués; el otro es el de los campesinos y obreros, ignorantes y pobres, que luchan por liberarse de toda clase de explotación. El primero trata de dirigir al segundo, y a menudo lo ha conseguido, hasta cierto punto. Pero la Internacional Comunista y los partidos miembros deben combatir esta tendencia de desarrollar entre las masas obreras y de las colonias el sentimiento de que pertenecen a una clase independiente».*

El PRI se ha lanzado con tanta brutalidad tanto contra Bani Sadr como contra su oposición de izquierda precisamente para dar una solución capitalista a la crisis económica y para relanzar la acumulación, liquidar el movimiento de las nacionalidades oprimidas, contener y sofocar el empuje de los obreros de los campesinos pobres y de los jóvenes. A medida que crece la desconfianza popular hacia él, al PRI le resultaba cada vez más vital controlar *totalmente* el aparato de Estado. Esto tampoco excluye la posibilidad de nuevos "virajes" tácticos, frente a Irak o al imperialismo. Pero hay que comprender que el margen de maniobra general de los dirigentes de la República Islámica, y por tanto de las maniobras que pueden intentar hacer, se ha estrechado.

La intervención personal de Jomeini

Dos hechos lo subrayan: el "consenso", la "unión nacional" de que han sacado provecho los dirigentes de la República Islámica, tras la guerra con Irak, finalmente duró muy poco, en comparación con lo que ocurrió tras la ocupación de la embajada norteamericana de Teherán.

Esto explica también por qué el PRI, contrariamente a lo que sucedió cuando la ilegalización del Frente Nacional Democrático de Matin Daftary en agosto de 1979 o la eliminación de Bazargan en noviembre de 1979, tuvo que recurrir a la intervención directa y personal de Jomeini para ganarle la partida a vida o muerte a Bani Sadr. Fue el prestigio de que aún goza Jomeini en amplias capas populares, o el arma disuasoria que constituye para algunos sectores de la burguesía y del aparato de Estado, lo que hizo que finalmente la balanza se inclinara a favor del PRI.

Esto no dejará de tener consecuencias en el futuro, pues señala un cambio en la capacidad de Jomeini para desempeñar un papel bonapartista análogo al que ejerció entre las distintas alas del clero, entre las diversas fracciones de la burguesía o incluso, en parte, entre las clases fundamentales de la sociedad iraní. Máxime cuando el centro de gravedad del poder, en el seno del PRI, se ha desplazado en dirección a las tendencias más "integristas", simbolizadas por hombres como Jafari, Hassan Ayat (organizadores del ataque contra las univer-



sidades el año pasado) o Navabi, próximo a los *Mudyahedin e Islam*, un grupo paramilitar comparable al de los Hermanos Musulmanes.

Independientemente de las cortinas de humo que constituyen los apoyos de que disponen unos o las alianzas que realizan los otros, los últimos acontecimientos anuncian la proximidad de un choque frontal y abierto y brutal entre la revolución y la contrarrevolución en Irán.